



Revista
Cultural

Lotería

Nº 417 Marzo - Abril - 1998

Año MCMXCVIII



***Junta Directiva de la
Lotería Nacional de Beneficencia***

Presidente

LIC. ROLANDO A. MIRONES JR.

Representante del Ministerio de Gobierno y Justicia

LIC. JOSÉ PABLO VELÁSQUEZ

Representantes de Compradores de Billetes

SR. VÍCTOR RAÚL VÁSQUEZ

DR. JOSÉ EMILIO SIMONS BRAGIN

Representante Suplente de Compradores de Billetes

SR. GUILLERMO MANFREDO BERNAL

Representante de la Contraloría

LIC. LUTZIA FISTONICH

Representante del Sindicato de Billeteros

SRA. LEOCADIA TORRES ÁLVAREZ

Representante Suplente del Sindicato de Billeteros

PROF. RUBÉN PATIÑO R.

Revista
Cultural

Lotería

Nº 417 Marzo - Abril - 1998
Año MCMXCVIII

DR. DILIO ARCIA TORRES

DIRECTOR GENERAL

ING. ROLANDO LUQUE

SUB DIRECTOR GENERAL

PROF. MARCELA F. DE RODRIGUEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

JUSTO ARROYO

EDITOR

CONSEJO EDITORIAL

ANÍBAL ILLUECA S.

DEMETRIO C. TORAL

REVISTA LOTERIA

Publicación de la Dirección de Desarrollo Social y Cultural
ISSN 0024.662X

©Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá

Se permite la reproducción del presente material y se agradece
consignar como fuente la *REVISTA CULTURAL LOTERIA*.

Para suscripciones y consultas sobre la REVISTA LOTERIA

Comunicarse con el Departamento Cultural.

ROMMEL ESCARREOLA PALACIOS

Telefax.: 227-1316 • Apartado Postal Nº 21, Panamá 1, Panamá

Impreso en los Talleres de Litho Impresora Panamá, S.A.

INDICE

REVISTA CULTURAL LOTERÍA No. 417 MARZO - ABRIL DE 1998

1. <i>Editorial</i>	5
2. <i>Mujer y Derechos Humanos.</i> MARIBLANCA STAFF WILSON	6
3. <i>Mujer y Mundo Laboral en Panamá.</i> VIELKA BOLAÑOS MORENO	34
4. <i>El Derecho como Institución Legitimadora de la Oposición de Las Mujeres.</i> NISCHMA DEL C. VILLARREAL CHÁVEZ	55
5. <i>Georgina Jiménez, una feminista en los inicios de la sociología panameña.</i> BRISEIDA BARRANTES	64
6. <i>El CEPAM: una alternativa de abordaje integral de la violencia intrafamiliar en Panamá.</i> NIDIA ELENA CHASE	74
7. <i>CEPAL: VII Conferencia Regional Sobre la Integración de La Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe.</i> URANIA A. UNGO M.	82
8. <i>Mujeres Rurales: Prioridad Nacional.</i> LUZ ALEYDA TERÁN.	88
9. <i>Género y Relaciones Internacionales Contemporáneas.</i> BRISEIDA ALLARD O.	97
10. <i>Violencia Contra La Mujer.</i> GLADYS MILLER R.	106
11. <i>Violencia Contra la Mujer: Pasos a su erradicación en Panamá.</i> ROSINA PÉREZ BERMÚDEZ	115
12. <i>Cuando Reinaron las Diosas.</i> AGATHA WILLIAMS SPRINGER	122
14. <i>Correspondencia</i>	128
13. <i>Nuestras colaboradoras</i>	130

EDITORIAL

*En esta edición de la **Revista Cultural Lotería**, la número 417 correspondiente a marzo y abril de 1998, destacamos con sumo placer la contribución de reconocidas escritoras nacionales quienes, a propósito del Día Internacional de la Mujer, analizan el estado actual de la mujer panameña.*

Sociólogas, abogadas, economistas e historiadoras, pasan revista a fondo de la situación de la mujer en nuestro país, tanto de la ciudad como la del campo, tanto nacional como internacional. De este modo, la presente edición de la **Revista Cultural Lotería** representa un compendio en extremo instructivo sobre la mujer y los derechos humanos, su condición laboral, la violencia intrafamiliar y las diversas formas en que se manifiesta la discriminación en base al género.

Un número de antología cuya utilidad y pertinencia será de interés tanto para los claustros universitarios como para los institutos especializados, para los analistas académicos como para la ilustración personal y privada de los simples ciudadanos, hombres y mujeres.

Edición para la reflexión a la par que invitación a la acción.

Mujer y Derechos Humanos

MARIBLANCA STAFF WILSON

I. Breve Introducción

Atendiendo la gentil invitación de la Dirección Nacional de la Mujer, me complace poder participar con un modesto aporte, en este número especial de la **Revista Lotería**, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y qué espacio más oportuno que éste, para abordar un tema de tanta trascendencia como lo son los derechos humanos, específicamente los de la mujer.

Hablar de derechos humanos, es referirse al patrimonio común e inalienable de toda la humanidad, toda vez que los mismos guardan relación directa con el ser humano. El reconocimiento de lo que hoy día constituyen estos derechos, es el resultado de miles de años de sacrificios y frustraciones sufridos por el género humano, desde que se estableció la diferencia entre gobernantes y gobernados/as, lo que también equivale a decir, de aquellos que a través del poder político, económico y coercitivo, han utilizado la fuerza para imponer su criterio, frente a aquéllos /as que han carecido de estos elementos de dominación.

II. Concepto de derechos humanos

Para entender mejor el tema, es preciso desarrollar en forma muy elemental, lo que constituye un derecho. En este sentido, debemos decir que derecho, es un conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda relación civil, a cuya observancia, las personas pueden ser compelidas por la fuerza. Siendo lo anterior así, se puede también definir, que los derechos humanos, son derechos inherentes a nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir como seres humanos.

III. Características generales de los derechos humanos:

Los derechos humanos tienen determinadas características, iguales en todas partes del mundo, como son las siguientes:

1. Son innatos y congénitos, porque todos los seres humanos nacemos con ellos.
2. Son universales, en cuanto se extienden a todo el género humano en todo tiempo y lugar.
3. Son absolutos, porque su respeto se puede reclamar indeterminadamente a cualquier persona o autoridad.
4. Son necesarios porque su existencia deriva de la propia naturaleza del ser humano.
5. Son inalienables, porque pertenecen en forma indisoluble a la esencia misma del ser humano.
6. Son inviolables, porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos, salvo las justas limitaciones que pueden imponerse a su ejercicio, de acuerdo con las exigencias del bien común de la sociedad.
7. Son imprescriptibles, porque forman un conjunto inseparable de derechos.

Es importante resaltar también, que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, reconoció un principio básico como derecho humano, que es el derecho de toda persona a mejorar económicamente, social y culturalmente.

IV. Influencia del feminismo en la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres:

Es un hecho innegable que la condición jurídica de la mujer a nivel mundial, ha logrado cambios fundamentales, como resultado del tiempo y de las modificaciones sobrevenidas en las costumbres sociales y políticas de la humanidad y en gran parte, debido a la influencia y desarrollo mundial de los movimientos liberacionistas femeninos.

Las mujeres, a través de las distintas épocas, hemos desplegado grandes esfuerzos de reflexión y acción, en la búsqueda de lograr el reconocimiento expreso y específico de nuestros derechos humanos. De ello hay numerosos antecedentes, tanto en diversos documentos como en la ocurrencia de hechos históricos, como son entre otros:

Siglo XVI. La obra escrita a fines del siglo XVI por María Lejars, titulada *La igualdad de los hombres y las mujeres*.

1731. La obra de la inglesa Mary Astell, *La proposición formal dedicada a las damas para el mejoramiento de sus verdaderos y más grandes intereses*.

1789. El primer hito histórico más importante del feminismo, se produjo en 1789 durante la Revolución Francesa, cuando las mujeres de París, mientras marchaban hacia Versalles y al grito de "*libertad, igualdad y fraternidad*", exigieron por primera vez el derecho al voto para la mujer.

1791. La *Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana*, redactada y presentada a la Asamblea Nacional Francesa, por la activista francesa Olympe de Gouges, declaración que postulaba la dignidad de las mujeres y por consiguiente, el reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales, cuya defensa le costó perder la vida en la guillotina y sus compañeras fueron recluidas en hospicios para enfermos mentales, convirtiéndose así en una de las primeras mártires de la causa y los movimientos feministas.

1792. La inglesa Mary Wollstoncraft, publicó el libro *Reivindicación de los derechos de la Mujer*, uno de los manifiestos feministas más radicales de la historia, inspirado sobre la base de cambiar la idea de que la mujer no sólo existe para el placer del hombre y proponiendo que la mujer recibiera el mismo tratamiento que aquél en educación, derechos políticos, en el trabajo y que fuera juzgada por los mismos patrones morales.

1832. Mary Smith de Stannore, una dama de alto rango, presentó a la Cámara de los Comunes de Inglaterra, una petición reclamando los derechos políticos de las mujeres.

1857. El 8 de marzo de 1857, las obreras de la industria textil y de la confección, realizan una gran huelga y se manifiestan en las calles de Nueva York, exigiendo el derecho al trabajo y garantías de condiciones de trabajo más humanas.

1866. Las mujeres logran un triunfo, cuando el primer Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, aprobó una resolución relativa al trabajo profesional de la mujer, documento que desafió abiertamente la tradición de que el lugar de las mujeres era el hogar.

1889. El 19 de julio de 1889, la dirigente alemana Clara Zetkin, pronuncia su primer discurso sobre los problemas de la mujer, durante el Congreso fundador de la Segunda Internacional Socialista celebrada en París. Allí defendió el derecho de la mujer al trabajo, la protección de las madres y los niños y también la participación amplia de la mujer en el desarrollo de los acontecimientos nacionales e internacionales.

1899. Se realizó una conferencia de mujeres en La Haya (Países Bajos), donde se condenó la guerra; hecho que marcó el comienzo del movimiento antibélico que tuvo mucho impulso en el Siglo XX.

1908. Más de 130 mujeres obreras ofrendan su vida el 8 de marzo de 1908, cuando se produjo un incendio en una fábrica textil en Nueva York, donde se habían encerrado para reclamar iguales derechos laborales que los hombres, dando surgimiento a la celebración del día internacional de la mujer.

1910. El 8 de marzo de 1910, Clara Zetkin, propuso en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague-Dinamarca, que todos los años se celebrara un Día de la Mujer; una manifestación internacional unificada, en honor del movimiento en pro de los derechos y la libertad de la mujer. Esta propuesta fue aprobada en resolución firmada por más de 100 delegados/as de 17 países.

1911. El 8 de marzo de 1911 se celebró por primera vez en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, el Día internacional de la Mujer, donde más de un millón de hombres y mujeres asistieron a diversas manifestaciones, exigiendo, además del derecho al voto y a ejercer cargos públicos, el derecho al trabajo y a la formación profesional, así como el fin de la discriminación en el trabajo.

1912. La celebración del Día Internacional de la Mujer se extiende a otros países como Francia, Países Bajos y Suecia.

1913. Se realizó en San Petesburgo (Rusia), la primera manifestación del Día Internacional de la Mujer, a pesar de la intimidación policial.

1914. El 8 de marzo, se celebró en muchos países, el Día Internacional de la Mujer, bajo el estandarte del movimiento de paz, en señal de protesta contra la guerra que amenazaba a Europa; hecho que comprueba que la mujer es la más fiel defensora de la paz.

1952. La Organización de Naciones Unidas (ONU), instituye el 8 de marzo como "**Día Internacional de la Mujer**".

1975. La ONU realiza en México, la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, evento en el que se declaró 1975 como Año Internacional de la mujer. En esta primera conferencia los Estados adoptaron un "Plan de Acción", cuyo resultado fue la proclamación por la Asamblea General de la ONU del "**Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer**" (1975-1985).

1977. La Asamblea General de la ONU aprueba la Resolución 32/142, por la cual se insta a los Estados a que conforme a sus tradiciones históricas y costumbres, proclamen un día del año como día de las Naciones Unidas por los derechos de la mujer y la paz internacional.

1979. La Asamblea General de la ONU aprueba la "**Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer**", a la que se han adherido ya más de 130 países.

1980. Se efectúa en Copenhague, Dinamarca la, II Conferencia Mundial sobre la Mujer, cuyo objetivo primordial fue evaluar el desarrollo del "**Decenio para la Mujer**" y se aprueba un "**Programa de Acción**" para la segunda mitad del decenio, poniendo énfasis en temas relativos al empleo, salud y educación.

1981. Se efectúa en julio de 1981 el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, donde se proclama el día 25 de noviembre, como fecha conmemorativa del día internacional de la no violencia contra la mujer, convirtiéndose en una conmemoración internacional no sólo en honor a las tres hermanas Mirabal asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura trujillista de República Dominicana, sino en honor de tantas otras heroínas anónimas, pero además, como una ocasión propicia para la reflexión, para la denuncia contra las distintas formas de violencia que se ejerce contra las mujeres, como un espacio para promover una cultura de paz entre los miembros de la familia, muy principalmente entre hombres y mujeres en sus relaciones de pareja.

1985. Se realiza en Nairobi, Kenia, la III Conferencia Mundial sobre la Mujer, cuyo objetivo fue examinar y evaluar los avances logrados y los obstáculos enfrentados durante el "**Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer**". En esta conferencia se aprobó por consenso de los Estados, el documento denominado **Las Estrategias de Nairobi orientadas**

hacia el futuro para el adelanto de las mujeres hasta el año 2000; estrategias que consisten en medidas que deben adoptarse en el plano nacional, regional e internacional, para promover el reconocimiento social del papel de las mujeres y del ejercicio de sus derechos humanos.

1994. Por iniciativa de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), en resolución aprobada el 9 de junio de 1994, en la VII Sesión Plenaria, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, aprueba la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Para).

1995. La ONU realiza en Beijing, China, la *"IV Conferencia Mundial sobre la Mujer"*, cuyo objetivo fue analizar y discutir ampliamente la situación de las mujeres en el mundo, e identificar las acciones prioritarias a realizarse para mejorar su condición de género. En esta Conferencia se adoptó por consenso de los Estados, una Plataforma de Acción, que recoge una serie de medidas que deben implementarse en un período de quince (15) años, cuya meta es el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.

En la República de Panamá, se conmemora el día internacional de la mujer, a partir del 8 de marzo de 1972.

Como se aprecia de la síntesis cronológica anterior, ha sido muy amplia la gama de documentos y hechos históricos que han enriquecido y consolidado los movimientos feministas a nivel mundial, que han contribuido al desarrollo, promoción y respeto de los derechos humanos de las mujeres.

V. Los derechos humanos de las mujeres:

Nadie pone en duda el trascendental valor que la Declaración de los Derechos Humanos, como los demás instrumentos relativos a los mismos, representan para la humanidad, no obstante, las mujeres refutamos el hecho de que su nacimiento, ha estado fuertemente ligado a la idea del ser humano centrada en la imagen del hombre-varón, es decir, que esos derechos humanos sólo han tenido como referencia al sexo masculino, que se considera como el paradigma de lo humano, sin que se tomara en cuenta la manera de sentir, pensar, luchar, y vivir del sexo femenino, que representa la otra parte de la humanidad, pero que ha sido invisibilizada y se le niega el reconocimiento de sus derechos específicos y simplemente se la incluye como formando parte integrante del hombre.

Es innegable que a través de los siglos, la concepción patriarcal que ha prevalecido en el mundo, ha sido plasmada en los distintos instrumentos nacionales e internacionales, al considerar al hombre (varón) como paradigma de la humanidad; situación que se ha reflejado en los derechos humanos, en su lenguaje, en sus ideas, valores, costumbres y hábitos, pues los mismos sólo tienen como referencia a una parte de la humanidad: la masculina, a través de cuyos sentimientos y pensamientos se nos ha ubicado en la sociedad, como seres inferiores, sumisas y dependientes, sin derecho a nuestra propia identidad genérica.

Es preciso conceptualizar el término patriarcado, el cual debe ser entendido como la supremacía masculina institucionalizada. Es cierto que desde su surgimiento, que según se dice se originó en Mesopotamia en el cuarto milenio antes de Cristo y que se extendió gradualmente por el mundo, el patriarcado también ha tenido numerosos desafíos; no obstante, ha sido el feminismo el primer movimiento que lo desafía propiamente como tal, al exigir las mujeres ser tratadas como seres humanos con derechos: el derecho a la integridad física, es decir a la integridad de nuestro cuerpos; el derecho al trabajo, a la educación, a la cultura, al acceso al poder; el derecho a una vida sexual y reproductiva plena y sana; el derecho a conservar nuestros ingresos; el derecho a acceder a la tierra y a las facilidades financieras; el derecho a ser tratadas con dignidad, en fin, gozar efectivamente, en igualdad de condiciones y oportunidades, de los derechos de que gozan los hombres.

Los distintos movimientos de mujeres a nivel mundial, han continuado la labor de promoción y vigencia efectiva de nuestros derechos y libertades fundamentales, luchando por una reformación global de los derechos humanos con perspectiva de género, con fundamento en que si bien es cierto, como hemos visto en los párrafos anteriores, que el reconocimiento de los Derechos Humanos comprende de manera general al hombre y a la mujer, no menos cierto es, que la realidad práctica, evidencia que los instrumentos internacionales y los mecanismo de derechos humanos, invisibilizan las necesidades, deseos y demandas de las mujeres, pues tales instrumentos no toman en cuenta sus especificidades, pues sus derechos humanos son sistemáticamente violados, además de ser victimizadas por ser mujeres, sin que tales hechos sean considerados como violación a los derechos humanos.

Es así, que entre los conceptos derechos humanos, mujer y violencia, existe una vinculación muy íntima, porque aunque parezca obvio

que los derechos humanos de la mujer, están teórica y formalmente contenidos en el concepto de derechos humanos, nuestro mundo cotidiano revela una realidad bien diversa. El hecho es que la gran mayoría de las legislaciones internas e internacionales, convenios, acuerdos y tratados; en la actuación de los Estados-Parte comprometidos con los documentos sobre la igualdad que firmaron y ratificaron e inclusive, en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la actuación de los diversos grupos no gubernamentales que trabajan en pro de los derechos humanos, se puede constatar que las cuestiones específicas de las mujeres reciben tratamiento secundario y marginal, por cuanto los mismos sólo tienen como referencia a una parte de la humanidad: el sexo masculino, que es considerado como el paradigma de lo humano.

Para comprender esto mejor, basta señalar por ejemplo, que la Declaración de los Derechos Humanos proclamada en 1948, para definir los derechos humanos de la persona, tomó como base el término genérico "hombre", que aun cuando incluye a la mujer, no la refleja; no la define como ser individual y por tanto, este concepto no tomó en cuenta las diferencias humanas y principalmente las especificidades de las mujeres. Fue en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, que la comunidad internacional organizada, por primera vez, se vio precisada a declarar y reconocer que los derechos de las mujeres son también humanos, al señalar que "los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable integrante e indivisible de los derechos humanos universales".

Lo anterior encuentra su explicación, en que dichos documentos fueron elaborados en foros constituidos mayoritariamente por hombres, representantes de un modelo ideológico eminentemente patriarcal y no es de sorprender entonces, que no hayan tomado en cuenta nuestra manera de sentir, pensar, luchar, y vivir. Esta es la razón de que los movimientos de mujeres, nos hayamos instalados en rebeldía en el escenario interno e internacional, denunciando el desprecio a nuestro derecho y exigiendo que las diferencias biológicas entre los sexos, no se traduzcan en desigualdad en el plano social, jurídico, político, económico, familiar, etc.

En ese sentido, consideramos que el logro más visible del género femenino, es el de haber colocado en la agenda pública mundial, la temática de la mujer en todos sus aspectos, especialmente la referida a la violencia contra la mujer como una violación a sus derechos humanos. La violencia contra la mujer, constituye un grave problema social a nivel

mundial, que ha sido hasta las últimas décadas, considerado como un problema del ámbito privado, no siendo hasta años recientes, ante las constantes demandas de las mujeres y de grupos femeninos organizados que se ha logrado ponerlo en la palestra pública, para tratar de prevenirlo, erradicarlo y sancionarlo.

Y es por ello, que se considera necesario, evaluar la efectividad de los instrumentos y mecanismos, en el campo de los derechos humanos, en la perspectiva de su reformulación, para que cumplan efectivamente su objetivo de salvaguardar los derechos fundamentales de toda la humanidad, por cuanto existe una cantidad de actos violatorios a los derechos humanos de las mujeres, que no se encuentran contemplados en los diversos instrumentos jurídicos relativos a estos derechos.

VI. La discriminación y violación sistemática de los derechos de las mujeres:

Una gran cantidad de países, recogen en sus Constituciones, el principio de igualdad de derechos entre mujeres y hombres, por lo que se dice que no existen normas discriminatorias; sin embargo, cuando se hace un análisis integral de los sistemas jurídicos, queda claramente evidenciado que existe igualdad en teoría y desigualdad en la práctica, por lo que la igualdad sigue siendo una quimera para la gran mayoría de las mujeres del mundo.

A nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, constituye el instrumento jurídico que de manera universal, protege los derechos de hombres y mujeres; principios que recogen la mayor parte de las Constituciones de los países, así como otros convenios internacionales, sin embargo, en la realidad se produce una gran cantidad de actos violatorios a los derechos humanos de la mujer, como son:

Principales actos violatorios a los derechos humanos de las mujeres:

1. Violaciones al derecho a la integridad personal:

-La violencia física, psíquica, sexual y económica, que acontece en las relaciones de pareja y en la familia, que en la mayoría de los casos terminan en homicidio, suicidio o feminicidio;

-El abuso sexual y el estupro, especialmente los incestuosos;

-La violencia social a nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento e intimidación

sexuales en el trabajo, en instituciones educativas, en la administración de justicia y en otros ámbitos;

- La prostitución forzada y el tráfico y la esclavitud de niñas y mujeres;

- El asesinato de mujeres, especialmente los practicados por maridos, ex maridos, convivientes y enamorados;

- Las mutilaciones genitales de que son objeto millares de mujeres en el mundo, por razones religiosas sin fundamento alguno;

- La utilización de la violación sistemática de la mujer como arma de guerra en los conflictos armados;

- La esterilización forzada, el aborto forzado, la utilización coercitiva o forzada de anticonceptivo, el infanticidio de niñas y la determinación prenatal del sexo;

- La impunidad de los agresores y las absoluciones fundamentales en conceptos legitimadores de la opresión de la mujer por parte del hombre.

Un hecho relevante, es que no obstante la mujer es víctima de la violencia en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, es también la principal promotora de la paz.

2. Violaciones al derecho a la libertad:

- Violaciones a la libertad del desarrollo de la personalidad, pues desde el nacimiento, las mujeres son limitadas en su desarrollo en todos los ámbitos, a través de una influencia cultural que estimula la dependencia, subordinación y discriminación, así como el pleno ejercicio de sus derechos como persona.

- Violaciones a la libertad de expresión, conciencia, religión, reunión, asociación y movilización, pues se espera que la mujer subordine su pensamiento y sus acciones a los del hombre, sea éste su padre, esposo, amante, hermano, hijo.

- Violaciones a la libertad de movimiento fuera del matrimonio, cuando el esposo o compañero no permite a la mujer que trabaje, estudie o salga sin su autorización.

- Control de la sexualidad y del cuerpo de la mujer. En muchos países, las mujeres no pueden decidir sobre el número de hijos, ni el momento en que desea tenerlo o no, y en muchos casos, requieren para esterilizarse autorización del compañero o esposo, y si es soltera se le niega el derecho a esterilizarse, no obstante, el hombre sí puede hacerse una vasectomía en cualquier momento y sin autorización de la mujer.

-El resultado de todas estas violaciones, es que se limitan las oportunidades de desarrollo de la mujer y además, se pone en peligro sus vidas.

3. Violaciones al derecho a la igualdad:

-Se producen violaciones en el acceso al sistema judicial y a la administración de justicia, especialmente en los casos de violación, abuso sexual y violencia intrafamiliar, donde los procedimientos son inadecuados y hay un gran desconocimiento del manejo de este tipo de situaciones por parte de los funcionarios/as y en la mayoría de los casos, las, víctimas resultan victimarias, al ser cuestionadas y consideradas culpables de la violencia ejercida en su contra.

-Se viola el derecho a la igualdad, cuando se niega o se limita el acceso de la mujer a la toma de decisiones y al poder político en igualdad de derechos y oportunidades con el hombre.

-Se viola el derecho a la igualdad cuando se da un trato desigual o discriminatorio en la legislación o en los tribunales de justicia.

Si todo lo descrito anteriormente no es discriminación y no es violación a los derechos humanos de las mujeres, ¿cómo se le puede llamar? De allí pues, surge la necesidad de trabajar en una reformulación de la legislación, dando énfasis en los derechos humanos de las mujeres, elaborando y promulgando nuevas leyes no sólo en el ámbito penal, sino también en el civil, administrativo y de procedimiento, destinadas a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer en todas sus formas y expresiones.

Pero es importante que, paralelamente con las reformulaciones a la legislación, se desarrollen programas de difusión y de educación a toda la población, sobre la existencia y alcance de sus derechos ante la ley, pues sólo a través de su conocimiento estaremos avanzando hacia la eliminación de la discriminación contra la mujer y fundamentalmente, concienciar a los hombres en torno a la necesidad de que reconozcan y respeten los derechos de las mujeres, pues como señala la doctora Nafis Sadik, Directora Ejecutiva del fondo de Población de la ONU, *"Ningún cambio fundamental en favor de la mujer será posible sin que se produzca un cambio masivo en las actitudes masculinas"*.

VII. Instrumentos jurídicos que reconocen los derechos humanos de las mujeres:

Es importante reconocer los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, en la realización de

importantes conferencias mundiales en las que se ha abordado el tema de la mujer, con resultados muy positivos, así como la aprobación de diversos instrumentos jurídicos y convenciones internacionales, tendientes a corregir la situación de desigualdad y de garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres. A continuación señalaremos los más relevantes, a saber:

Instrumentos Internacionales :

Declaraciones, Convenios, Conferencias y Pactos:

Las declaraciones, convenios, conferencias y pactos más relevantes, entre otros:

1.1. Convención Sobre Nacionalidad de la Mujer: Fue suscrita el 26 de diciembre de 1933 por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que establece la prohibición de discriminar por razón del sexo en materia de nacionalidad. Fue ratificada por Panamá, mediante Ley Nº 5 de 27 de septiembre de 1938.

1.2. Convención Interamericana sobre concesión de los Derechos Políticos a la Mujer: aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en el año 1948, establece para las partes contratantes, que el derecho al voto y a ser electo/a para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo. Este convenio fue aprobado por Panamá, por Ley 31 del 24 de febrero de 1951.

1.3. Declaración Universal de Derechos Humanos: fue aprobada por la Asamblea General de la ONU, en Resolución 217 de 10 de diciembre de 1948. Esta declaración universal, constituye el documento jurídico base, sobre el que se trabaja el tema de los derechos humanos a nivel legislativo.

1.4. Convenio Internacional para la represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución ajena: fue proclamada por la Asamblea de la ONU en resolución 317 de 2 de diciembre de 1949 y entró en vigor el 28 de julio de 1951, cuya finalidad principal es la de reprimir la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, mediante la adopción por parte de los Estados Partes, de medidas tendientes a sancionar y erradicar estas conductas indignas de la persona humana.

1.5. Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer: aprobada por la Asamblea de la ONU en Resolución 640 de 20 de diciembre

de 1952, que recoge en sus 3 primeros artículos, los derechos fundamentales de la mujer en la esfera política. Este convenio fue aprobado por Panamá, mediante Ley 31 del 24 de febrero de 1951.

1.6. Convención Sobre Nacionalidad de la Mujer Casada: aprobada por la Asamblea General de la ONU en resolución 1040 de 29 de enero de 1957, que entró en vigencia el 11 de agosto de 1958. Esta Convención establece que ni la celebración, ni la disolución del matrimonio entre nacionales y extranjeros, afectará automáticamente la nacionalidad de la mujer.

1.7. Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza: adoptada por la Conferencia de UNESCO el 14 de diciembre de 1960, entró en vigor el 22 de mayo de 1962. Establece disposiciones tendientes a eliminar la discriminación en la esfera de la enseñanza por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, nacimiento, clase social, posición económica o por cualquier otra situación discriminatoria. Esta Convención fue ratificada por Panamá, mediante Ley 9 de 27 de octubre de 1976.

1.8. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (P.I.D.C.P.): adoptado por la Asamblea General de la ONU en resolución 2200 de 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Su protocolo Facultativo fue aprobado en resolución 2200 A de la misma fecha y también entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Ratificado por Panamá mediante Ley 15 de 28 de octubre de 1976.

El pacto desarrolla con más detalles, los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y su Protocolo Facultativo se basa en un tratado internacional, por medio del cual, los Estados partes se obligan a aceptar un procedimiento concreto y específico para examinar las denuncias sobre violación a derechos civiles y políticos protegidos por el pacto internacional correspondiente, que se presenta contra un Estado, pero el mismo sólo se aplica a los Estados partes que hayan firmado el procedimiento.

1.9. Convención de la ONU sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para el matrimonio y su registro. Fue aprobada en Resolución 1763A del 7 de noviembre de 1962 y puesta en vigor el 9 de diciembre de 1964. La misma recoge en sus tres primeros artículos, disposiciones que deben adoptar los Estados partes en relación con el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraerlo y sobre su inscripción en un registro oficial destinado al efecto.

1.10. Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer: proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2263 del 7 de noviembre de 1967.

1.11. Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estado de emergencia o de conflicto armado: proclamada mediante Resolución 3318 de la Asamblea General de la ONU el 14 de diciembre de 1974, es un documento que recoge en seis puntos, reglas específicas que deben observar los Estados miembros de la ONU, destinadas a la protección de la mujer y el niño que se encuentran en estados de emergencia o de conflicto armado.

1.12. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (P.I.D.E.S.C.): adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200A de 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 3 de enero de 1976, recoge en 31 artículos, disposiciones que desarrollan los derechos económicos, sociales y culturales de la persona humana, contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue aprobado por Panamá mediante Ley 13 de 27 octubre de 1976.

1.13. Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José): aprobada en la Conferencia de los Estados Americanos (OEA) el 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica. Es un documento de carácter regional, que reafirma los derechos fundamentales de la persona humana, a través de la enumeración de los deberes de los Estados y los derechos protegidos; los deberes de las personas y los medios de protección de los derechos humanos. Fue aprobada por Panamá mediante Ley 15 de 28 de octubre de 1977.

1.14. Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (C.E.D.M.): fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979, entrando en vigor el 3 de septiembre de 1981. Con esta Convención se dió un gran paso hacia la meta de la igualdad de derechos para la mujer, al consagrar que la discriminación contra la mujer es una injusticia y constituye una ofensa a la dignidad humana. La mencionada convención, contiene 30 artículos que consagran en forma jurídica obligatoria, principios aceptados universalmente y medidas para lograr que la mujer goce de derechos iguales en todos los aspectos.

Esta Convención, conocida también como la "**Carta Internacional de Derechos de la Mujer**", representa un gran avance en el campo de los derechos de la mujeres, toda vez que amplió las disposiciones gene-

rales de los derechos humanos. La misma ha sido ratificada por más de 100 países, siendo ratificada por Panamá, mediante Ley Nº 4 de 22 de mayo de 1980 y empezó a regir en junio de 1981.

1.15. Estrategias de Nairobi Orientadas hacia el futuro para el Adelanto de la Mujer: estas estrategias fueron aprobadas en 1985, en la conferencia de la ONU realizada en Nairobi, basada e inspirada en los principios fundamentales y objetivos contemplados en la Carta de Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos y otros convenios internacionales. Constituyen un conjunto de medidas generales para contrarrestar los obstáculos que impiden el adelanto de la mujer, así como para promover mejores condiciones de vida de la mujer y la erradicación de la discriminación.

1.16. Conferencia Mundial de Derechos Humanos (C.M.D.H.): la Conferencia realizada en Viena en 1993, constituye uno de los documentos internacionales más importantes para las mujeres, no sólo porque en él se reconoce los derechos de la mujeres como parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales, sino porque también urge a los Estados a establecer programas de educación en derechos humanos, enfatiza la necesidad de divulgar la información y los datos, tanto teóricos como prácticos para la promoción y vigencia de los derechos humanos. Esta declaración, sin lugar a dudas, fue un importante avance en el reconocimiento de la discriminación y la violencia contra las mujeres por su condición de género, como violación a sus derechos humanos.

1.17. Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer: mejor conocida como "CONVENCION DE BELEM DE PARA", fue aprobada el 9 de junio de 1994 por la Asamblea General de Estados Americanos (OEA), en su vigésimo cuarto período de sesiones. Representa otro valioso instrumento jurídico para las mujeres, pues establece a nivel mundial los parámetros legales en torno a la violencia contra la mujer y al cual quedan sujetos todos los países signatarios de dicha Convención.

1.18. Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (C.I.P.D.): realizada en El Cairo en 1994, representa también un avance más a nivel mundial, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, al plasmarse un Programa de Acción que establece especialmente, los derechos humanos de las mujeres en el área de la igualdad y equidad;

en el acceso a la toma de decisiones; en los derechos de salud sexual y derechos reproductivos y en el área de la violencia contra la mujer.

1.19. **Cuarta Conferencia Mundial de Beijing:** ha sido una de las conferencias mundiales de mayor importancia que haya organizado la ONU, y con seguridad la mayor de las conferencias especializadas en asuntos de la mujer, celebrada del 4 al 15 de septiembre de 1995 en Beijing, China, que contó con la participación de casi 50,000 personas, de las cuales más de las dos terceras partes fueron mujeres. El resultado de esta Conferencia se puede sintetizar en dos documentos de suma importancia, a saber:

a). **La Declaración de Beijing:** es una declaración conjunta, adoptada por los Estados Miembros de la ONU que participaron en la Conferencia, que resume las posiciones y los proyectos de medidas acordadas en la Plataforma de Acción; declaración que expresa la determinación de los gobiernos, de desarrollar e intensificar esfuerzos y acciones tendientes al logro de los objetivos de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro; promover la independencia económica de la mujer y fomentar un desarrollo sostenible enfocado hacia la persona, a través de la educación, la capacitación y la atención primaria de la salud; igualmente expresa la determinación de los gobiernos de garantizar la paz para las mujeres; la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y la niña, intensificando esfuerzos para garantizar a éstas el disfrute de condiciones de igualdad de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

b). **La Plataforma de Acción:** es un programa dirigido a potenciar el papel de la mujer en la sociedad, en el que se proponen los objetivos y medidas estratégicas que deben adoptar durante los próximos 5 años, los gobiernos, la comunidad internacional, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, para acelerar la promoción, protección y fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres.

A nivel nacional:

Los principales derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, se pueden sintetizar así:

1. Derecho a la vida, por el cual toda persona tiene derecho a que se respete su vida, desde el momento de su concepción y a lo largo de toda su existencia. (art. 17, Constitución Nacional; art. 3, Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 4, Convención Americana Sobre Derechos Humanos; art. 6, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)

2. Derecho a la integridad personal, según el cual toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral por lo que nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles. (art. 17, 21, 22, 23, C.N.; art. 3, D.U.D.H.; art. 5, C.A.D.H.; art. 7, P.I.D.C.P.)

3. Prohibición de la esclavitud y servidumbre, por lo que se prohíbe que el ser humano sea considerado esclavo y que las mujeres sean objeto de tráfico sexual. También se prohíbe que alguien tenga forzosamente que trabajar en determinada profesión o actividad. (art. 43, D.U.D.H.; art.6, C.A.D.H.; art. 9, P.I.D.C.P.)

4. Derecho a la libertad y a la seguridad personal, mediante el cual nadie puede ser sometido a prisión o encarcelamiento arbitrario y en caso de serlo, derecho a ser informado por qué se le detiene, a ser llevado ante autoridad competente y a ser juzgado expeditamente. (art. 21 C.N.; art.3, D.U.D.H.; arts. 7,8, C.A.D.H.; art. 9, P.I.D.C.P.)

5. Reconocimiento de garantías judiciales, mediante las cuales toda persona tiene derecho a ser oído en juicio y que se presuma su inocencia, mientras no se le pruebe su culpabilidad y tener derecho a un juicio justo o de debido proceso; a defenderse por sí solo o mediante abogado. (arts. 22, 23, 32 C.N.; arts. 8, 9, 10, D.U.D.H.; arts. 8, C.A.D.H.; art. 14, P. I.D.C.P.)

6. Derecho de toda persona a ser indemnizada conforme a la ley, en caso de ser condenada por sentencia firme por error judicial. (art.10 C.A.D.H.)

7. Principio de legalidad y retroactividad, por el que nadie puede ser condenado por acciones, que al momento de su detención no estuvieran consideradas como delitos. (arts. 31, 32, C.N.; art. 11, D.U.D.H.; art. 9, C.A.D.H.)

8. Derecho a la protección de la honra y de la dignidad, según el cual, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. (art. 17 C.N.; art. 12, D.U.D.H.; art. 11, C.A.D.H.; art. 17 P.I.D.C.P.)

9. Derecho a la libertad de conciencia y de religión, por el cual toda persona tiene derecho a elegir, expresar y practicar su religión y sus creencias religiosas. (arts. 35 C.N.; arts. 18, D.U.D.H.; arts. 12, C.A.D.H.; art. 18 P.I.D.C.P.)

10. Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, según el cual, toda persona tiene derecho a la libre emisión del pensamiento y a

expresarse, a través de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, sin consideración de fronteras, tanto oral como por escrito, de manera impresa o artística o por cualquier otro procedimiento, sin sujeción a censura previa, excepto las responsabilidades ulteriores que deben estar previamente fijadas en la ley. (art. 37, C.N.; art. 13 C.A.D.H.; art. 19 D.U.D.H.; art. 4 P.I.D.C.P.)

11. Derecho de reunión y de libertad de asociación, según el cual toda persona tiene derecho a reunirse y asociarse libre y pacíficamente, sin que pueda ser obligada a pertenecer a una asociación determinada. arts. 39 C.N.; art. 20, D.U.D.H.; arts. 15,16, C.A.D.H.; art. 22 P.I.D.C.P.)

12. Derecho de todo hombre y de toda mujer a constituir una familia y contraer matrimonio libremente y así también, el derecho al nombre y el apellido de los padres. (arts. 20, 53, 59, C.N.; art. 7, D.U.D.H.; arts. 17, 18, C.A.D.H. arts. 2, ordinal a) y 15 de la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; art. 23 P.I.D.C.P.)

13. Derecho de los niños y las niñas a que se les proteja por su familia, por la sociedad y por el Estado; derecho que implica que todos los hijos e hijas tienen los mismos derecho ante la ley. (arts. 55,56,57, C.N.; art. 17, C.A.D.H.);

14. Derecho al nombre y a gozar de la nacionalidad del país donde se nace, según el cual toda persona tiene derecho a un nombre propio y al apellido de los padres o de uno de ellos, así como derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, sin perjuicio del derecho que tenga a otra y sin que pueda ser privada de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. (arts. 8 a 16 C.N.; art. 15, D.U.D.H.; arts. 18,20, C.A.D.H.)

15. Derecho a la propiedad privada, según el cual tienes derecho a disfrutar de tus bienes a título individual o colectivo y a no ser despojado de tus propiedades sin una razón justificada. (arts. 44,45 C.N.; art. 17, D.U.D.H.; art. 21, C. A.D.H.)

16. Derecho de circulación y residencia, que implica transitar por el territorio del país y residir donde se considere conveniente o a salir del país. (art. 27 C.N.; art. 13, D.U.D.H.; art. 22, C.A.D.H.)

17. Derechos civiles y políticos, que comprenden participar en los asuntos públicos, votar y ser elegido/ a y tener acceso a las funciones públicas. (arts. 126,129,131, C.N; art. 21, D.U.D.H.; art. 23, C.A.D.H.)

18. Derecho a ser tratado con igualdad ante la ley y a la protección judicial; derechos que implican recibir igual trato ante la ley y sin discriminación, e igualmente a gozar de la protección de la ley, a través de promover recursos efectivos, sencillos y rápidos ante los tribunales de justicia competentes, que le amparen contra actos violatorios a sus derechos humanos, reconocidos en la Constitución, la Ley o convenios internacionales, cuando tales actos sean cometidos por funcionarios públicos. (arts. 41, 50 C.N.; art. 8 D.U.D.H. ; arts. 24, 25, C.A.D. H.)

19. Derecho a tener un desarrollo progresivo en los aspectos económicos, sociales y culturales; que no son más que los derechos a la educación, a una adecuada alimentación y a la salud, a la vivienda digna, a un trabajo equitativamente remunerado y ejercerlo en las mejores condiciones; a practicar y disfrutar el deporte y las actividades artística y culturales. (arts. 60-114 C.N.; arts. 22-27 D.U.D.H.; art. 26 C.A.D.H.)

En los derechos individuales mencionados del punto 1 al 18, inclusive, fue que los Estados inicialmente, pusieron mayor énfasis en su reconocimiento, lo que tiene su explicación en que su cumplimiento se materializa fácilmente, por medio de la no intervención estatal en las acciones de las personas. Por esta razón, estos derechos se denominan "libertades baratas" y su primera aparición en los textos e instrumentos jurídicos, constituye el motivo de que se les llamara "derechos de primera generación".

Sin embargo, el reconocimiento de los derechos individuales, civiles y políticos, no fue suficiente, pues mientras no existiera una satisfacción de las necesidades básicas de las personas, como alimentación, salud, vivienda, educación, etc. y que los mismos no fueran consagrados como derechos, no podía garantizarse la dignidad personal y el desarrollo de los pueblos, por lo que de manera gradual se fueron incorporando en los documentos legales y que se conocen como derechos de segunda generación. La diferencia con los derechos de primera generación, es que sí requieren por parte del Estado y de los particulares, la realización de acciones positivas para su ejecución y cumplimiento.

VIII. Organismos jurídicos de promoción y protección de los derechos humanos de la mujer :

1. **En el Sistema de Naciones Unidas:** dentro del sistema de las Naciones Unidas, existe una serie de organismos cuya función primordial es la de promover y ser guardianes de los derechos de la mujer, a saber:

1.1 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CCJS): fue creada en el año de 1946 como un órgano subsidiario del Consejo Económico y Social. Está compuesta por 45 miembros y tiene dentro de sus funciones, promover los derechos de la mujer y formular directrices sobre actividades tendientes al mejoramiento de la condición de la mujer, en aspectos económicos, políticos, social, cultural y de la educación y formular recomendaciones sobre los problemas que requieren atención inmediata.

1.2 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW): fue creado en el año 1982, como un organismo de vigilancia de la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, teniendo a su cargo examinar el cumplimiento de las disposiciones de la Convención, por parte de los países que la han ratificado, así como los informes presentados por los Estados partes. Está integrado por 23 miembros/as, todos expertos/as en su campo y se eligen por períodos de 4 años, en intervalos escalonados.

1.3 División para el Adelanto de la Mujer: constituye una Secretaría ubicada en el Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, con sede en Viena, Austria. Sirve de secretaría tanto para la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer, como del CEDAW. Sus programas se relacionan con la vigilancia y evaluación de la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro y también realiza estudios de investigación y coordina actividades de investigación, edita publicaciones, mantiene un importante banco de datos sobre la mujer, etc.

1.4 Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM): es un organismo creado en 1976, incluido dentro de la estructura del PNUD y se encarga de poner en ejecución proyectos que ayuden a la mujer a integrarse en los procesos de desarrollo, a través de la realización de actividades en pequeña escala, que generen ingreso. Este fondo se financia mediante contribuciones voluntarias de 100 países donantes, organizaciones internacionales y no gubernamentales, logrando mejorar las condiciones de vida de millares de mujeres pobres de todo el mundo, otorgándoles acceso al crédito, a la capacitación y a la tecnología.

1.5. Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW): es un organismo creado por la Asamblea General de la ONU en el año de 1975, cuya sede se encuentra

en Santo Domingo, República Dominicana y se financia totalmente con contribuciones voluntarias. Esta es una instancia que financia y realiza investigaciones, seminarios y actividades de capacitación e información, con el objeto de mejorar la metodología existente para los estudios sobre la mujer, en especial sobre la participación de ésta en el desarrollo. Actúa como centro de distribución de información e investigación y además coordina actividades privadas e institucionales de investigación y los esfuerzos de capacitación de la mujer.

1.6 División Especial de la Mujer en el Desarrollo del PNUD: es una división especial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que mantiene estrechas relaciones de trabajo con las oficinas exteriores y promueve acciones concretas para asegurar la participación de la mujer en proyectos financiados por el PNUD y además ayuda a los gobiernos en la integración de la mujer en las actividades de desarrollo.

1.7. Dependencia Especial de la Mujer, la población y el Desarrollo del FNUAP: es una dependencia especializada de la mujer del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), que además cuenta con un grupo asesor de mujeres que brindan conocimientos técnicos sobre la integración sistemática de los intereses de la mujer en todos los programas de desarrollo.

1.8. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): este organismo de la ONU coordina actividades relativas a la condición de la mujer y su sede principal está en París, Francia.

Existen además dentro de la ONU, otras dependencias que coordinan programas relacionados con la mujer, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), que coordina la dependencia de integración de la mujer en el desarrollo industrial; también hay otros organismos internacionales como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que brinda asesoría técnica de la mujer en el desarrollo y muchos otros organismos.

2. En el Sistema Interamericano: en el Sistema Interamericano de la Organización de Estados Americanos:

2.1. Comisión Interamericana de Mujeres (CIM): creada el 18 de febrero de 1928, como un organismo especializado de carácter permanente, para luchar por la mujer y sus derechos. Por su recomendación,

han sido diversas las resoluciones que ha expedido la Asamblea General de la OEA, en relación con la promoción de la mujer, entre otras, la relativa al Año Internacional de la Mujer; sobre el Decenio de la Mujer (1975-1985); Participación de la Mujer en la cooperación para el Desarrollo de 27 de noviembre de 1980; Integración de la Mujer a través de la Educación, de 18 de noviembre de 1983; Participación plena e igualitaria para el año 2000 (1990), etc.

3. En el sistema del Estado panameño: la República de Panamá, cuenta con diversos organismos, tanto a nivel gubernamental como no gubernamental, dedicados a la promoción de la mujer y a la protección de sus derechos humanos y constitucionales, a saber:

3.1. Comisión de Asuntos de la Mujer de la Asamblea Legislativa: se creó mediante Ley 7 de 27 de mayo 1992, como una comisión permanente de la Asamblea Legislativa, cuyas funciones entre otras son las de estudiar y proponer proyectos de ley y emitir conceptos sobre temas que afecten a la mujer en el campo jurídico, cultural, y social; promover los derechos de la mujer; protección jurídica de la mujer, a través de acciones legislativas tendiente a eliminar la discriminación, basada en el sexo, etc.

3.2. Comisión Nacional Intersectorial de Apoyo al Programa Mujer, Salud y Desarrollo: fue creada mediante Decreto Ejecutivo Nº. 818 de 14 de octubre de 1992, adscrita al Ministerio de Salud, teniendo dentro de sus objetivos principales: promover políticas y estrategias de desarrollo para un mejor acceso de la mujer a todos los servicios de salud; velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de la mujer; luchar por la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, etc.

3.3. Consejo Nacional de La Mujer y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Mujer: creado mediante Decreto Ejecutivo Nº 70 de 27 de julio de 1995, adscrito al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, como un organismo consultor y de asesoría para la promoción y desarrollo de la mujer, en el campo político, social y económico, teniendo entre sus funciones, entre otras, las de formular y proponer políticas públicas en favor de la mujer y el acceso a recursos para su desarrollo; recomendar al Órgano Ejecutivo las medidas que se estimen convenientes para mejorar la condición y posición de la mujer; estudiar los problemas fundamentales que influyen en las políticas relativas a la mujer y proponer soluciones; etc. Este Consejo es presidido por el

Ministro de Trabajo y Bienestar Social y conformado por 12 miembros/as con sus respectivos suplentes, integrado por representantes tanto del sector gubernamental como de la sociedad civil.

3.4. Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá: esta institución fue creada mediante Resolución Nº. 8-95 de 26 de julio de 1995, del Consejo Académico de la Universidad de Panamá, que tiene dentro de sus objetivos principales, entre otros, promover acciones tendientes a la transformación de la condición de la mujer en el país, a través de la realización de estudios que identifiquen sus problemas, asesorar a las distintas instancias de la administración del Estado, a las empresas privadas y organismos no gubernamentales, etc.

4. Otros mecanismos de protección legal: además de los mecanismos internacionales ya mencionados, Panamá cuenta con algunos mecanismos legales a nivel interno, a través de los cuales se protegen los derechos humanos de manera general y que pueden también ser utilizados por las mujeres para hacer valer sus derechos. Estos mecanismos son, a saber:

4.1. El Recurso de Habeas Corpus: es una garantía que se encuentra consagrada en el artículo 23 de la Constitución Nacional, mediante la cual, toda persona detenida fuera de los casos y la forma que prescribe la Constitución y la Ley, debe ser puesta en libertad a petición suya o de un tercero, presentando ante la autoridad competente el recurso de Habeas Corpus, que debe tramitarse con prelación a otros casos pendientes, mediante un procedimiento sumarísimo, sin que la tramitación pueda ser suspendida por razón de horas o días inhábiles

4.2. El Amparo de Garantías Constitucionales: es otra garantía constitucional establecida en el artículo 50 de la Carta Magna, por la cual, toda persona contra la que se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, que viole sus garantías constitucionales, tendrá derecho a solicitar por sí misma o por un tercero, que la orden sea revocada; procedimiento que debe tramitarse mediante un trámite sumario, siendo de competencia de los tribunales judiciales.

4.3. El Recurso de Inconstitucionalidad: esta garantía se encuentra establecida en el numeral 1, del artículo 203 de la Constitución por medio de la cual, toda persona puede demandar o impugnar, ya sea por razones de forma o de fondo, la inconstitucionalidad de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos, que considere violatorios de sus

derechos constitucionales. Este recurso es de competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

4.4. El recurso Contencioso Administrativo: se encuentra establecido en el numeral 2, del citado artículo 203 de la Constitución, por medio del cual, toda persona puede demandar o impugnar, los actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en el ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos y autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades autónomas y semiautónomas, a fin de que la Corte Suprema de Justicia, anule los actos acusados de ilegalidad; restablezca el derecho particular violado, establezca nuevas disposiciones en reemplazo de las impugnadas y se pronuncie prejudicialmente sobre el sentido y alcance de un acto administrativo o de su valor legal. Su competencia corresponde a la Corte Suprema de Justicia.

4.5. La Defensoría del pueblo: esta institución, conocida en otras partes como OMBUDSMAN o como Defensoría o Procuraduría de los Derechos Humanos, constituye un mecanismo que por mandato legal está obligado a comprometerse en la defensa, protección y tutela de los derechos humanos y constitucionales de la población civil; viene a ser la voz de la población frente al poderoso aparato estatal.

En Panamá es de creación reciente, a través de la Ley 7 de 5 de febrero de 1997, que a mi juicio, representa un gran avance no sólo en el ordenamiento jurídico panameño, sino un valioso espacio donde las mujeres podrán acudir para presentar sus denuncias y quejas sobre violación de sus derechos humanos y constitucionales.

Es importante resaltar también, que existen una serie de organizaciones no gubernamentales, que tienen dentro de sus objetivos específicos, velar por la promoción y protección de los derechos humanos, como son entre otros: el Comité Popular de los Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA), el Comité Panameño de los Derechos Humanos, el Comité Nacional de los Derechos Humanos (CONADEHUPA), la Comisión de Justicia y Paz, el Centro de derechos de la mujer, como CEPAM, CODIM, FUNDAMUJER, Capacitación Social de Panamá (CEASPA); igualmente organizaciones no gubernamentales que desarrollan acciones para la promoción de los CEDEM, FORO, MUJER Y DESARROLLO, UNAMUP y otras.

IX. Conclusiones:

A continuación se ofrece un conjunto de grandes premisas, que resumen de manera general, la situación de los derechos humanos de las mujeres, a saber:

1). Si bien es cierto que estudios e investigaciones recientes, señalan el avance significativo en la condición jurídica de las mujeres en la región latinoamericana, a través de las distintas leyes y convenciones que nos han otorgado una mayor igualdad de derechos y que han permitido la consolidación de sus derechos humanos, no menos cierto es, que a pesar de estos logros, aún está lejos la garantía del pleno respeto y disfrute de los derechos humanos de las mujeres, pues muchas de las leyes que supuestamente benefician a la mujer, no están libres de prejuicios sexistas, o porque sólo ofrecen repuestas parciales o no responden a la realidad social e institucional de los países, siendo por tanto, limitada su aplicación y efectividad.

De lo anterior, surge como premisa fundamental, la importancia de desarrollar a todos los niveles, amplios programas de promoción y divulgación de los derechos, convenios y leyes, pues es un mecanismo que entre otros, permite poner fin a la discriminación .

2). Es evidente que los diferentes instrumentos emitidos por las Naciones Unidas, en relación a la problemática de las mujeres, constituye un avance e innovaciones que se dirigen a una redefinición de lo humano, hecho que está relacionado directamente con los grandes esfuerzos realizados por los movimientos y organizaciones de mujeres en todo el mundo. Sin embargo, coincido plenamente con los planteamientos que mundialmente, vienen esgrimiendo los movimientos de mujeres, en cuanto a la necesidad de la ampliación, reformulación y sistematización de los Derechos Humanos en un nuevo instrumento internacional, que sin invalidar los logros recogidos en la Declaración de 1948, integre en un documento de similar naturaleza, los avances obtenidos por la humanidad, tanto en la teoría como en la práctica y que se haya tomado en cuenta la perspectiva de género, es decir, que los mismos tomen en consideración la riqueza de la universalidad, de la pluralidad y las diversidades humanas sin discriminación. Esta, constituye la propuesta de reformulación de los Derechos Humanos que hacen las mujeres a nivel mundial, de cara a los retos que implica la entrada a un nuevo milenio.

3). La salud de la mujer constituye un requisito previo indispensable, para garantizar el disfrute de sus derechos humanos sin discrimina-

ción y para ello hay que adoptar medidas tendientes a asegurarle en pie de igualdad, un acceso adecuado a los servicios de atención de la salud, nutrición, planificación familiar, incluyendo su derecho a decidir el número y espaciamiento de hijos; aumentar su esperanza de vida, etc.

4). La educación es clave fundamental para facultar políticamente a la mujer, y es además una inversión de alto rendimiento para el desarrollo general de la sociedad, pues al educar a la mujer se educa a toda la familia; de allí la importancia de que se promueva un plan de acción estratégica, tendiente a la eliminación del analfabetismo entre las mujeres. La educación de la mujer es una herramienta eficaz para combatir los estereotipos sexuales y las conductas discriminatorias en su contra, permitiéndole un mejor disfrute de sus derechos humanos.

5). Es preciso reconocer expresamente y valorar equitativamente el trabajo de la mujer, pues la misma realiza múltiples funciones y responsabilidades que contribuyen de manera muy importante en el desarrollo socioeconómico; sin embargo, sus contribuciones no son tomadas en cuenta; de allí la necesidad de incorporar su efectiva participación en los programas de ajustes y de desarrollo; asegurándole además, condiciones equitativas de trabajo, que le permita gozar de manera práctica de sus derechos humanos en el campo laboral.

6). Se plantea como una medida urgente, el análisis de los problemas de discriminación que aún subsisten en los sistemas jurídicos y en una reconceptualización del concepto humanidad, para que abarque y exprese de manera integral a toda la población mundial, promoviendo un marco jurídico que garantice a las mujeres el pleno respeto y goce efectivo de sus derechos humanos, ya que los mismos constituyen parte integral, inalienable e indivisible de los derechos humanos universales.

Y en la realización universal de los derechos humanos, los gobiernos tienen una responsabilidad primordial de promoverlo y garantizar su protección, pero es imprescindible, que se trabaje en la reformulación de todos los cuerpos jurídicos vigentes, empezando por sensibilizar a toda la sociedad y en especial a las instancias que tengan que ver con la elaboración y promulgación de leyes a partir del reconocimiento de que todos los actos violatorios a los derechos de las mujeres, constituyen un claro desprecio a sus derechos humanos. Cuando logremos ese objetivo, podremos avanzar hacia una nueva legislación más equitativa, que respete, proteja y garantice la efectividad de los derechos humanos sin discriminación, donde la aplicación práctica de la justicia se vea en todas las situaciones y momentos de la vida, pues lo que está en juego no es el futuro de las mujeres, sino el futuro mismo de la humanidad.

Ningún pueblo del mundo, que se precie de ser democrático, será verdaderamente libre ni justo, en tanto persistan normas y costumbres lesivas a la dignidad y a los derechos humanos de las mujeres. ¿Cómo poder aceptar, sin el sonrojo de la vergüenza, cualquier práctica discriminatoria contra la mujer que es la fragua de la vida de todo hombre? Los pueblos alcanzan su mayor desarrollo, su verdadera dimensión de patria, cuando eliminan todo vestigio de discriminación, por pequeño e intrascendente que pudiera parecer; cuando hacen que cada mujer y cada hombre que lo conforman sean iguales ante la ley terrenal y humana.

Por eso, hombres y mujeres, tenemos que asumir seriamente el compromiso, de trabajar juntos en la construcción y consolidación de un mundo más equitativo y humanizado, donde ambos sexos gocemos plenamente y sin discriminación de los derechos humanos y libertades fundamentales, que permita hacer efectivo el lema de la ONU, de que el 2000 es el año de la igualdad para la mujer en el planeta.

Ser mujer en el mundo de hoy, no es tarea fácil. Constituye un gran desafío en la larga lucha por el pleno reconocimiento y vigencia de nuestros derechos, en el que hemos tenido que superar con valentía, inteligencia y paciencia una infinidad de obstáculos, muchos de los cuales subsisten todavía; pero, no por ello debemos detenernos. Es necesario seguir ese proceso de lucha por obtener nuestra propia visibilidad como ser social, cultural, político y productor de riqueza y tener voz y voto, en todas las instancias de deliberación, que interfieran directa o indirectamente, con la condición de vida de todas las personas; por la integración y plena participación de las mujeres en el desarrollo de nuestros pueblos, que nos permitan, fundamentadas en una claridad de propósito, coraje y sobre todo, intervenir decisivamente en la construcción de un nuevo mundo más equitativo y humanizado.

Para lograr lo anterior, las mujeres debemos atrevernos a romper definitivamente las cadenas que todavía nos atan a la sumisión, subordinación y dependencia, pues como dice una de las más bellas frases del poeta y escritor mexicano, Octavio Paz, una de las figuras literarias más representativas de la lírica y el pensamiento de México y de Hispanoamérica: **"La mujer vive presa en la imagen que la sociedad masculina le impone; por tanto, sólo puede elegir rompiendo consigo misma ... si se atreve a amar, a elegir, si se atreve a ser ella misma, debe romper esa imagen con que el mundo la encarcela"**.

BIBLIOGRAFÍA

- Arango Durling, Virginia. **Derechos Humanos de la Mujer**. Ediciones Panamá Viejo, S.A. Panamá, 1994.
- Badilla, Ana Elena. **La Discriminación de género en la Legislación Centroamericana. Estudios Básicos de Derechos Humanos IV**. Publicación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Comisión de la Unión Europea. San José, 1996
- Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer. Beijing, 4-15 septiembre de 1995. Colección Documentos N°. 10. Información General y selección de Documentos. Publicación del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer. San José Costa Rica, 1996.
- Dixon, Graciela. Ethert Wetherborne. **Los derechos Humanos en Panamá**. Series Manuales Temáticos #3. Centro de Capacitación Social. Panamá, junio 1993.
- Enciclopedia Jurídica OMEBA**. Tomo IV. Editorial Bibliográfica Argentina. Buenos Aires. Argentina, 1962.
- Estudios Básicos de Derechos Humanos IV**. Publicación conjunta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, y la Comisión de la Unión Europea. Autoras: Sonia Montaña, Magdalena León, Line Bareiro y otras.
- Facio Montejo, Alda. **Cuando el Género Suena cambios trae**. (Metodología para el análisis de género del fenómeno legal. 1ª edición. Talleres Gráficos de Duplicadoras de Costa Rica. San José, Costa Rica 1992.
- Filosofía de los Derechos Humanos**. Series Seminarios Básicos. Módulo N° 1, editado por Centro de Capacitación Social. Panamá, junio 1993.
- Lagarde, Marcela. **Identidad de Género y Derechos Humanos**, La construcción de las humanas. Estudios Básicos de Derechos Humanos IV. Ob. cit.
- La Mujer. Retos hasta el Año 2000**. Publicación de Naciones Unidas. Nueva York, 1991. **Mujer y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe**. Conferencia Mundial de Derechos humanos. San José, Costa Rica, 18-22 de enero de 1993.
- Mujeres, Desde Beijing: una Plataforma de Acción y un mandato claro para el adelanto de la mujer**. Publicación del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. DPI/1749/Wom-95-30878- Noviembre de 1995-5M.
- Pacheco Gómez, Máximo. **Los Derechos Humanos. Documento Básico**. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, Julio de 1987.
- Puntos de Vista de las Naciones Unidas: Las Mujeres**, Publicado por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. DPI/1171-Mayo 1992.
- Rol de los Derechos Humanos en la Sociedad**. Series Seminarios Básicos. Módulo N° 2, editado por Centro de Capacitación Social. Panamá, junio 1993.
- Staff Wilson, Mariblanca. **La Discriminación contra la Mujer en la Legislación Panameña**. Impretex, S.A.; Panamá, 1994.
- Staff Wilson, Mariblanca. **Reseña Histórica del Sufragio Femenino en Panamá**. Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA), Panamá octubre 1996.
- Tijerino, Doris. **Los Derechos Humanos de las Mujeres**. Serie Manuales Temáticos N°. 1, editado por Centro de Capacitación Social. Panamá, junio 1993.

****Mujer y Mundo Laboral en Panamá***

VIELKA BOLAÑOS MORENO

INTRODUCCION.

La economía panameña presenta una dinámica altamente concentrada en el sector terciario, predominando las actividades comerciales y de servicios, así como el transporte de mercancías para el mercado mundial.

El anterior ensayo de sustitución de importaciones, que priorizaba la industria como factor principal de desarrollo, fue puesto en marcha como estrategia económica nacional desde los años 50 y se agota al aproximarse los años 70.

En los períodos subsiguientes se hace énfasis en una estrategia centrada en el sector terciario de la economía. A este respecto, analistas económicos (Jované y Achong, 1990), ofrecen un examen sistemático (que se resume a continuación), sobre la política económica y su evolución reciente.

El modelo centrado en la industria es reemplazado paulatinamente por una estrategia que prioriza el comercio internacional y se fundamenta, por un lado, en la mayor explotación de actividades generadas por la posición geográfica del Istmo y los beneficios que generaría la renegociación de Tratados del Canal de Panamá y, por otro lado, en la oferta de una moderna base material, legal y de servicios para atraer la inversión internacional.

*Por razones de espacio se publica sólo el primer capítulo de este Informe de Consultoría, ofrecido por la DINAMU-MITRABS y realizado con el auspicio de la Oficina Internacional del Trabajo para Centroamérica y Panamá. El Informe completo puede consultarse en las oficinas de la Dirección Nacional de la Mujer del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia.

Un proceso de endeudamiento público posibilitó la financiación de esta estrategia. Las políticas económicas, enfocadas hacia las actividades terciarias culminan con el establecimiento de una plataforma transnacional de servicios (consistente en un complejo de servicios internacionales, basado en la Zona Libre de la ciudad de Colón, el Centro Bancario Internacional y el Centro Internacional de Reaseguro).

Esta estrategia de desarrollo trajo como consecuencia un fuerte endeudamiento público externo, inestabilidad económica, y un creciente nivel de desempleo abierto. Este escenario, aunado a los cambios experimentados en la política económica internacional y a los acuerdos cancleros que significan consolidación de los eslabones básicos del modelo terciario y una adecuación de la estructura gubernamental, derivó en nuevas orientaciones de la política económica panameña, dirigida hacia la estabilización y ajuste estructural.

El ajuste estructural pone énfasis en una mayor apertura de la economía hacia el mercado internacional, y en la eliminación de la protección y subsidio a la producción local, a fin de elevar la competencia y productividad, con lo cual caerían los precios locales y aumentaría la capacidad de exportación nacional. Para ello se requería también la compactación del sector público, reduciendo su tamaño y peso en la vida económica del país, y haciéndolo más eficiente.

Entre otras, las medidas indicadas frente a estos propósitos, incluían la modificación del sistema de protección de cuotas por aranceles; la eliminación de los controles de precios de bienes finales y al productor; la eliminación del carácter discriminatorio que se le imputaba a la ley con relación a la pequeña empresa; la modificación de la legislación agrícola e industrial; y la redefinición del papel del sector público.

A nivel de lo laboral las medidas, según los autores citados, planteaban "eliminar algunas rigideces en la legislación laboral que eran contraproducentes a la creación de empleo y productividad. Se buscaba diferenciar entre las actividades industriales y las agrícolas, entre las grandes y pequeñas empresas y promover las exportaciones. Asimismo, se intentaba vincular esta modificación de la ley con la redefinición del criterio de incrementar el ingreso con la producción y no con los subsidios. Esto significaba modificar el código del trabajo."

El avance de estas medidas fue significativo hasta 1987, expresándose en la venta o cierre de un considerable número de empresas estatales, supresión o disminución del precio sostén de productos de la canasta

básica, liberación de la exportación de carne, cancelación de controles de precio de algunos productos de consumo doméstico, cambio de cuotas por aranceles para 368 categorías de productos, modificación de las leyes agrícolas e industrial, y otras.

Contrario a lo esperado, la economía nacional vive un creciente proceso de deterioro y crisis. Entre otras cosas los autores plantean que las metas en el comercio internacional fracasan al no contemplar problemas de competitividad del país, características del mercado de exportación que se quiere promover, y factores monetarios y financieros; el sector comercio y servicios aumenta su peso en el PIB nacional, pasando de 67.6% en 1970, a 70.9% en 1987; cae el valor de las exportaciones; no se resuelven los problemas de la deuda externa y las finanzas públicas; crece el endeudamiento del gobierno central con instituciones estatales; se reduce el gasto público y social; y el desempleo, que no se consideró reducir sino por derivación, fue escalando de 8.4% a inicios de 1980, a cerca de 20 % entre 1986-87.

Este escenario se agrava a partir de 1987, a partir de la crisis político-militar que provocó el bloqueo económico por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, y culminó con la invasión militar a Panamá, el 20 de diciembre de 1989.

La significativa pérdida de vidas humanas se acompañó con el deterioro de la actividad económica y comercial impactadas por el saqueo de establecimientos que siguió a la invasión, y por la imposición de fuertes sanciones económicas por parte de los Estados Unidos a Panamá. Esto último provocó el cierre del sistema bancario, eliminación de cuotas de exportación, colapso de las finanzas e inversión públicas, y moratoria de la deuda pública, entre otros.

Entre 1987-88 y 1988-89, el PIB decae en 15.6% y 0.4%, respectivamente. Para 1990 y 1991, aunque el PIB muestra tasas de crecimiento de 4.6 % y 9.3%, la difícil situación socioeconómica del país no muestra cambios positivos. Los esfuerzos no alcanzan para restablecer los niveles de crecimiento ni de empleo que existieron antes de la crisis. Además el problema de la deuda externa, que alcanza a fines de 1990 los 5,300 millones de dólares, continúa siendo un reforzador de la crisis (Fundación Arias, 1993).

A partir de septiembre de 1994, al tomar posesión el gobierno actual, las políticas públicas proponen el desarrollo social con eficiencia económica, dando continuidad a los planes de ajuste estructural

Al caracterizar la problemática actual sobre empleo y salarios, las políticas públicas sostienen que la mala distribución del ingreso se explica por el elevado desempleo estructural (que se mantiene a pesar de un crecimiento elevado de la producción) y por el bajo poder adquisitivo de los salarios. "Panamá enfrenta la paradoja de que los salarios son altos para los empresarios cuando se los comparan con los de otros países latinoamericanos con que deben competir, pero son bajos para quienes los reciben pues pueden comprar con ellos menos de lo que comprarían con ese ingreso convertido a la moneda nacional de los países potencialmente competidores". Se menciona el incremento progresivo de las tasas medias de desempleo (de 7.3% entre 1970-79, pasa a 14.2% entre 1991-93) que, sumadas al subempleo, suponen la enorme pérdida de riqueza material al no utilizar la mano de obra disponible.

Al analizar las causas de los problemas socioeconómicos que enfrenta el país, entre otros factores explicativos (servicios públicos costosos, proteccionismo, distorsiones microeconómicas, e infraestructura deficiente), resalta la ineficiencia económica en el uso de recursos, expresado en el alto costo de inversión para generar puestos de trabajo y la baja productividad de la mano de obra. Esto se atribuye al exceso de incentivos legales a favor del capital, que promueve más la adquisición de maquinarias que la contratación de mano de obra, debido al sobre costo al uso de la fuerza de trabajo establecido por ley. Esto produce la sobre capitalización de las empresas, el consecuente costo fiscal, y el desempleo de la mano de obra.

Para la política pública en lo que a materia económica se refiere, se plantean dos componentes esenciales: la estabilización y el cambio estructural. A ello correspondería una política laboral que busque "la garantía de los derechos fundamentales del trabajo universalmente aceptados, como piedra angular de la posición en esta materia. Los objetivos de política laboral consisten en crear las condiciones necesarias en el mercado laboral para alcanzar un alto nivel de empleo, tener una legislación que sea competitiva con la de otros países que también tratan de atraer inversiones extranjeras y lograr niveles de productividad que fortalezcan nuestra posición competitiva internacional. El logro de estos objetivos es esencial para la modernización de la economía y superar el desempleo, lo cual requiere, a corto plazo, modificar la Legislación Laboral" (Gobierno de la República de Panamá, Políticas Públicas, 1994).

Las expectativas de las políticas públicas en cuanto a alcanzar un alto nivel de empleo, espera la maduración del modelo de desarrollo el

cual, conforme a lo planteado, se encuentra activo en crear condiciones previas que considera necesarias para el logro de esa meta, pero ello inevitablemente genera fases de contracción del empleo y reducción de satisfactores sociales y económicos para el conjunto de la población, que serán superadas.

En lo tanto, aunque no hay acuerdo entre los impulsores y detractores del ajuste estructural en cuanto a sus bondades y limitaciones como expediente de desarrollo, en el período analizado se verifica un desempleo creciente (conforme a IDEN-CIFE 1997, la tasa media de desempleo para 1996 es de 13.9%, estadísticamente idéntica a la de 1992 y 1995, que fue de 14%), y la reducción del gasto público y social ha afectado la prestación de servicios básicos a la población.

Los costos producidos por la reducción o cancelación de estos servicios, son transferidos en buena medida a los propios hogares, (donde suelen compensarse muchos baches dejados por la aplicación de disposiciones económicas), y administrados por mujeres, responsables de la organización económica del hogar para la sobrevivencia de sus miembros.

Pero además, el fenómeno de contracción del mercado laboral que afecta al conjunto de la población, suele tener impactos diferenciados en los distintos estratos y grupos poblacionales. En el caso de las mujeres, su particularmente difícil situación socio laboral se expresa en el nivel, estilo y condiciones de inserción ofertadas por el mercado de trabajo, lo cual se explora a continuación.

1. Mujer y Mercado Laboral:

Conforme al último Censo la población panameña alcanzó los 2,329,329 habitantes en 1990, y las mujeres representaron prácticamente la mitad de la población del país (49.4%).

Para 1995 se estima que la población total del país se elevó a 2,631,013 habitantes, y la representación femenina fue nuevamente de 49.4%.

A través de la década comprendida entre 1985 y 1995, esta relación se ha mantenido, es decir, las mujeres han constituido casi la mitad de la población nacional.

En el mismo período, conforme a las encuestas de hogares, la población en edad de trabajar pasó de 1,256,762 a 1,632,355. A través de la década las mujeres representaron poco más de la mitad de la población en edad de trabajar (en promedio, el 50.6%).

1.1 Participación económica:

Entre 1985 y 1995, la población económicamente activa femenina (PEA) continúa representando un importante sector de la PEA nacional, a la vez que conserva su sostenida tendencia al incremento.¹

En efecto, durante la década la mujeres aportaron en promedio el 33.5% de la PEA, esto es, algo más que la tercera parte de la fuerza de trabajo a nivel nacional.

No obstante en la PEA prevalece la presencia masculina, aunque con leves altibajos tendientes a decrecer. En 1985 aglutinan el 68.2% y para 1995 desciende a 65.3%.

Conforme la rama de actividad se observa una fuerte concentración de la fuerza de trabajo femenina en las de servicio y comercio, (o sea, en el sector terciario de la economía).

En 1995, aproximadamente un 75% de la PEA femenina se ubicaba en las ramas de ese sector. Esto contrasta con una más homogénea distribución de la masculina entre la diversidad de ramas ofertadas por el mercado de trabajo, lo que evidencia sus mayores posibilidades de movilidad laboral.

Las tasas de participación económica de la población conforme al sexo, constatan el patrón de comportamiento observado en la PEA: creciente aporte femenino y prevalencia descendiente del aporte masculino.

Así, las tasas de participación femeninas suben de 35.6% en 1985, a 42.5% en 1995. Mientras tanto las masculinas, aunque superiores, muestran leves descensos y ascensos en el período pasado de 78.8% en 1985, a 81.3% en 1995.

Si bien las tasas de participación masculinas prevalecen sobre las femeninas, estas últimas crecen en mayor proporción. Se calcula que su incremento en 10 años fue de 19.4%, mientras el masculino fue de apenas el 3.2%.

Conforme a edades, se aprecian notorias diferencias entre las tasas de participación femeninas y masculinas.

1. Este comportamiento se verifica en la década precedente en que, conforme a las Encuestas de Hogares, la PEA femenina se incrementa de 28.3% en 1975, a 30.9% en 1984.

Mientras la tasas más altas de participación femenina cierran sus límites en el tramo etéreo de 35 a 49 años, las masculina los extienden al tramo comprendido entre los 25 y 54 años. Es decir, la mayoría de los hombres hacen su ingreso al mercado laboral a edades más tempranas y permanecen en él durante más tiempo que las mujeres.

La mayor participación económica masculina expresada en los indicadores vistos, muestra su contrapartida al analizar la población no económicamente activa (PNEA) donde, en consecuencia, la relación se invierte y son las mujeres las que aglutinan los mayores porcentajes.

Durante 1995, por ejemplo, las mujeres representaron el 75.7% de la PNEA, y los hombres apenas el 24.2% restante.

Atendiendo a las categorías de (in)actividad, las amas de casa constituyeron entonces más de la mitad de la PNEA (52.1%). El 100% de esa categoría estaba integrado por mujeres (ningún hombre se declaró ama de casa). Entre ellas el 88.6%, se declaran inactivas puras, y en su mayoría (casi 60%) residen en el resto no metropolitano de la república (eminentemente rural).

1.2. Estructura del empleo :

En el período en referencia las mujeres constituyen alrededor de un tercio de los ocupados a nivel nacional.

Aunque su participación ha ido aumentado levemente a la par que decrece la mayor presencia masculina, las variaciones en 10 años no han sido significativas.

En 1985, las mujeres representaban un 29.5% de la ocupación total, y en 1995 alcanzan el 32.2%. Este leve aumento de su incorporación ocupacional no ha sido homogéneo más que en términos absolutos.

De tal forma, su crecimiento entre 1985-95 muestra fluctuaciones porcentuales (15.1%, 5.5%, ascienden a 13.5% y finalizan con 9.6%). Este comportamiento refleja periodos de crisis en que el mercado laboral se restringe excluyendo población femenina que engrosa las filas de la cesantía.

Ahora bien, esta creciente incorporación de las mujeres al empleo muestra sus diferenciaciones cualitativas conforme se avanza en el análisis de la ocupación por rama de actividad, categoría y grupo ocupacional, según sexo.

El comportamiento de la población femenina ocupada conforme ubicación por rama de actividad en la última década, constata la histórica terciarización del empleo femenino nacional. Las ramas de servicio y comercio han aglutinado el conjunto de la ocupación femenina: a lo largo del período el 53.8% de las mujeres se ubicaron en servicios y el 22% en comercio.

No obstante hay que observar que la presencia de mujeres ocupadas en actividades de servicio iba en aumento en 1989 (55.6%) y empezó a decrecer levemente a partir de 1991. Al final del período, registra un 50.8%. Mientras tanto entre 1991 y 1995, su actividad tanto en establecimientos financieros como en el comercio, se incremento levemente.

Por su lado, la población masculina ocupada se ubicó mayormente en el sector primario agrícola (cerca de 37% de sus ocupados durante la década). Le siguieron de lejos los servicios, el comercio y la industria.

La presencia masculina en la rama agrícola desciende fuertemente en 1995 (29.1%), mientras se incrementa ligeramente en la industria, establecimientos financieros y servicios. Esto pone de relieve, nuevamente, la mayor movilidad intersectorial masculina.

Al analizar las categorías ocupacionales, se constata que entre la población femenina ocupada hay un registro notable de asalariadas.

En 1995, el 80.4% de las ocupadas eran asalariadas. Entre ellas, el 64.2% se registró como empleadas de la empresa privada, pero ese porcentaje incluye un 20.3% de asalariadas que son del servicio doméstico.

En el caso de los varones, el 61.3% de los ocupados eran asalariados. Entre ellos, el 72.8% se registró como empleados de la empresa privada pero, a diferencia de las mujeres, el porcentaje sólo incluye un 1.7% del empleo en servicio doméstico.

Además del empleo privado en el servicio doméstico, el empleo en el gobierno también explica el alto registro de asalariadas, ya que integra un 34.4% del total de las mujeres empleadas. En el caso de los varones, el empleo gubernamental abarcó el 23.4% del empleo masculino total.

Ahora bien, al observar la distribución porcentual por sexo de las distintas categorías ocupacionales, se constata la predominancia masculina.

Así, en 1995 las mujeres representaron el 38.5% de los empleados totales, el 23.8% de los trabajadores familiares sin sueldo, y en las categorías patrono o socio y cuenta propia registraron sus más bajos porcentajes frente a los varones.

La menor presencia femenina entre los trabajadores por cuenta propia se debe a que éstos se concentran en el área rural donde, conforme a estudio, la participación productiva femenina se invisibiliza cuando son consideradas y ellas misma se declaran como ama de casa, al no percibir la diferencia entre el trabajo productivo y doméstico por realizarse en el mismo espacio físico (finca -hogar); además "Los registros estadísticos oficiales no contemplan formas de medición refinadas para evitar captar el peso de las valoraciones culturales de los informantes y encuestadores en la definición de su actividad" (Bolaños, y otras, 1995). No obstante, es importante destacar que la presencia de mujeres cuentapropistas ha ido incrementándose durante el decenio, mientras la masculina tendió a decrecer.

El comportamiento inverso se observa al revisar la cifra de los trabajadores en servicios domésticos al interior de la categoría empleados, donde se registra un fuerte 87.9% femenino frente a un 12.1% masculino.

La subcategoría empleo gubernamental refleja una situación más homogénea entre los sexos (47.9% para mujeres y 52.1% para hombres); mientras los empleos privado y canalero integran menos mujeres (27.8% y 18.5% respectivamente).

Por último, el comportamiento de la población ocupada conforme al grupo ocupacional por sexo, cierra el patrón de diferenciación del empleo femenino.

Los datos de la década muestran una tendencia a la diversificación del desempeño femenino en distintos grupos ocupacionales asociados al sector terciario de la economía, mientras el masculino permanece estable en un par de ellos, asociados al primario y secundario .

Las mujeres distribuyen sus mayores porcentajes entre los empleados de oficina (alrededor del 23.0%), profesionales y técnicos (alrededor del 20.0%, trabajadores domésticos (cerca del 16.0%), vendedores, y trabajadores en servicios, con 13% y 12%, respectivamente.

Los mayores porcentajes masculinos se polarizan, en cambio, entre el agricultores (alrededor del 30%), y artesanos y operarios (cerca del 18.0%).

Los datos demuestran que las mujeres, aunque subrepresentadas en el empleo total, aportan más mano de obra calificada durante la década (así lo confirma ese 20% de sus ocupadas que son profesionales y técnicos, frente al 9% masculino).

Ahora bien, cuando se analiza la composición por sexo de los grupos ocupacionales, una primera mirada gráfica al año 1995 hace evidente el sesgo en la integración de hombres y mujeres en los distintos grupos.

Aunque esto es esperable por el simple hecho de que los varones son la mayoría de los ocupados (70%), durante la década se observa que tal integración diferencial puede ser mayor o menor según el grupo ocupacional de que se trate.

Así, el trabajo doméstico y el empleo de oficina está polarizado hacia las mujeres (alrededor de 90% y 70% de los ocupados totales respectivos, son mujeres).

Mientras, los oficios de transportistas, agricultores, obreros y jornaleros, artesanos y operarios, son eminentemente masculinos (porcentaje en general superiores al 90% de los ocupados totales).

Vale acotar que, aunque es baja la presencia de hombres en el grupo de trabajadores domésticos, su incremento es significativo a través de la década: de 1.4% en 1985, pasa a 12.1% en 1995 (probablemente hay un mayor número de hombres en oficios de jardinería y otros de mantenimiento del entorno hogareño).

A nivel de los gerentes y administrativos, la diferencia se mantiene, aunque más atenuada: las mujeres constituyen la cuarta parte aproximadamente, mientras los hombres ocupan alrededor del 75% de esos puestos. No obstante el porcentaje de mujeres fue creciendo, aunque baja levemente hacia 1995.

Entre los grupos de vendedores y trabajadores en servicios (sector terciario) hay más flexibilidad para integrar mujeres. Durante el período estas constituyen aproximadamente el 40% de los ocupados respectivos, frente al 60% masculino.

El grupo de profesionales y técnicos es el que muestra mayor flexibilidad en cuanto a la diferenciación sexual de los grupos ocupacionales, ya que la distribución durante la década es incluso algo superior para las mujeres (52.5% frente a 47.5% masculino, promedialmente). No obstante la diferencia se va atenuando hasta casi desaparecer en 1995, cuando los profesionales y técnicos femeninos y masculinos son casi paritarios. Esto significa que la presencia de mujeres en este grupo ocupacional, aunque fuerte, tiende a disminuir.

Se puede suponer que entre las profesionales y técnicas hay un fuerte componente de maestras y enfermeras, dado que en la PEA respectiva

las mujeres dedicadas a la enseñanza y a actividades de servicios sociales y de salud, constituyen el 69.0%.

1.3. Desempleo:

Aunque constituyen sólo un tercio de la PEA nacional, las mujeres explican aproximadamente la mitad del desempleo nacional entre 1985-95.

Sus tasas de desempleo abierto siguen siendo sensiblemente mayores que las masculinas y su tendencia ascendente más marcada pero, al igual que las masculinas, se estabilizan a partir de 1993.

Las mujeres inician la década aglutinando el 47.5% de los desocupados y concluyen siendo el 49.9% de los mismos. Su tasa promedial de desocupación casi duplica la masculina (19.8% frente a 11.0%).

Las tasas de desempleo para ambos sexos se disparan entre 1988-91, lo cual se asocia al período de crisis político-militar y económica que afectó al país.

Aun así, las tasas de desocupación femeninas ascienden de 21.4% a 22.6%, mientras las masculinas bajan de 14.0% a 12.8%. Esto se explica por los procesos de compactación del sector público que afecta más a las mujeres, por cuanto el Estado constituye el segundo empleador femenino.

A partir de 1993, las tasas se estabilizan, manteniéndose la femenina alrededor del 20%, y la masculina cerca del 10%.

El comportamiento de la desocupación por sexo muestra también diferencias conforme a los grupos de edades.

Durante la década analizada las tasas de desocupación se incrementan entre los jóvenes, en especial si son mujeres entre 15 y 24 años.

En efecto, el desempleo femenino en este grupo etáreo alcanza en promedio para la década, dimensiones del 40.5% (mujeres entre 15 y 19 años), y 37.7% (mujeres entre 20 y 24). Estos promedios para el grupo homólogo masculino fueron de 27.3% y 21.4%, respectivamente.

Aunque menos acentuada, también es particular la situación de las mujeres entre 25 y 34 años. Sus tasas de desocupación en la década promediaron 27.1% (mujeres entre 25 y 29 años) y 18.0% (mujeres entre 30 y 34), mientras los varones de igual edad, presentaban tasas bastantes inferiores (13.5% y 8.0%, respectivamente).

Al final del período (1995), las tasas decrecen respecto a sus promedios para la década, pero en general aumentan respecto al año inicial (1985), especialmente para los grupos etáreo femeninos. Se exceptúan de este patrón los grupos femeninos entre 15 y 24 años y los masculinos entre 20 y 29 años, ya que sus tasas muestran leves recuperaciones respecto a las del año inicial.

Otro aspecto que expresa diferencias entre el desempleo femenino y masculino es el tiempo de desocupación conforme al sexo. Para 1995, se observa que a medida que aumenta el tiempo de desocupación la cantidad de mujeres desempleadas se incrementa, mientras la masculina disminuye.

1.4. Subempleo:

A lo largo de la década estudiada el subempleo ha afectado en promedio a un 22% de los ocupados totales y muestra tendencia al incremento.

Así, el subempleo ha pasado de 17.9% en 1985 a 26.7% en 1995. No obstante, el femenino se incrementa en mayor medida que el masculino, pasando de 19.2% en 1985 a 29.3% en 1995. El masculino pasó de 17.4% a 25.4% en el mismo lapso.

Diferenciando los tipos de subempleo, observamos que en la década el visible (horas trabajadas) reportó promedios similares para hombres y mujeres (cerca del 33%). El invisible (ingreso percibido) fue levemente mayor para los hombres (66.8%) que para las mujeres (65.9%).

No obstante, la década cierra en 1995 con un subempleo invisible ligeramente mayor en las mujeres que en los hombres; y con un subempleo visible levemente mayor para los hombres.

Atendiendo ahora a la distribución por sexo del subempleo, se observa que a través de la década las mujeres son alrededor de la tercera parte de los subempleados, mientras los hombres constituyen el grueso de los mismos (66%).

De tal forma, en términos promediales las mujeres son el 34.0% de los subempleados totales, el 34.6% de los subempleados visibles, y el 33.7% de los invisibles.

1.5. Sector informal:

Durante la década, la informalidad laboral es un fenómeno que alcanza a cerca de la mitad de los ocupados nacionales (46.4% en prome-

dio). Conforme al sexo, se observa que el impacto sobre las mujeres es menor que entre los hombres.

Entre 1985-95, el 38.6% de las mujeres ocupadas pertenecían al sector tradicional de la economía, porcentaje que para los hombres fue del 49.8% (en términos promediales).

La mayor participación femenina en el sector moderno de la economía puede explicarse por su fuerte inserción en el empleo gubernamental (47.9% de las ocupadas).

No obstante, durante la década se observa mayor tendencia creciente de la informalidad femenina respecto a la masculina. Así, su integración al segmento tradicional del mercado pasa entre 1985 y 1995, de un 36.1% a un 40.3%, mientras los varones pasan de 48.6% a 47.4% en el mismo período.

Así, el incremento en 10 años para las mujeres equivaldría a un 11.6%, y el de los varones a un 2.3%.

1.6. Condición laboral y nivel educativo:

A nivel de la población económicamente activa nacional, se puede observar un claro fenómeno de escolarización diferenciada entre hombres y mujeres.

En 1995, los mayores porcentajes femeninos se ubican en los niveles de secundaria de 4 a 6 años (31.1%) y en el nivel universitario (27.3%). Mientras los masculinos se ubican entre la primaria de 4 a 6 años (29.7%) y la secundaria de 4 a 6 años (23.6%).

Conforme se avanza en los niveles educativos la PEA femenina reporta mayores porcentajes que la masculina. Así, entre los grupos sin ninguna escolaridad las mujeres aglutinan apenas el 2.0% de su PEA, frente al 5% masculino.

A nivel secundario, la PEA femenina reporta casi un 50%, frente a un aproximado de 43% masculino.

Por último, en los estudios universitarios la PEA femenina constituye casi el doble de la masculina (27.3% frente a 14.5%).

1.7. Ingresos:

El análisis de la distribución del ingreso medio conforme al sexo destaca las brechas existentes entre los salarios de hombres y mujeres.

Durante la década, el ingreso femenino resulta siempre inferior al masculino. En promedio éste alcanzó los 289 balboas mensuales, mientras el masculino fue de 349 Balboas. Esto significa que el salario femenino representó el 83% del masculino, o que fue un 17 % menor que el mismo.

Aunque sus ingresos se han ido incrementando a través de los 10 años, ese incremento es algo superior para los hombres (16.5% frente al 15.6% femenino).

Al cerrar la década el ingreso femenino reportó 312 Balboas y el masculino 382 Balboas, con lo que el ingreso femenino representó en 1995 el 81.7% del masculino (18.3% por debajo del mismo).

Si pasamos a ver el ingreso femenino como porción del masculino, conforme a la rama de actividad, constataremos que éste puede ser mayor o menor para las diferentes ramas.

Si analizamos las ramas de actividad que más reclutan mujeres (servicio y comercio, con 75.8%), observaremos que para la década el ingreso femenino promedio en la rama de servicios representó el 67.1% del masculino y el del comercio el 75.6% (lo cual en ambos casos, incluso está muy por debajo de la media general femenina para la década que, como vimos, fue de 83%).

Las mujeres también reportan más bajos ingresos durante la década en la rama de la industria y establecimientos financieros (promedialmente 68.8% y 91.7%, como porción del masculino. No obstante las mujeres ocupadas en estas ramas son pocas (9.7% y 5.6%).

Durante la década las mujeres reportan en promedio mayor porción de ingresos respecto al de los hombres en ramas de actividad en que su porcentaje de ocupadas es ínfimo (entre 0.08% y 9.7%).

Así, en la construcción su ingreso representó el 162.5% del masculino, en la agricultura el 140%, en las minas el 131.4%, en el transporte el 115.2%, y en la electricidad el 105.4%. Esto puede estar afectado por el pequeño porcentaje de mujeres con estatus de profesionales, técnicos, o de empleadas de oficinas que incursionan en esas ramas, cuyos salarios serían mayores a los masculinos que fungen en oficios de menores salarios dentro de las mismas (mujeres como secretarias, hombres como obreros, choferes, etc).

Al ver la distribución del ingreso medio por sexo y grupo ocupacional, se encuentran fuertes contrastes salariales entre hombres y mujeres.

De tal forma, en términos promediales para los diez años, los ingresos femeninos que representan porcentajes más bajos respecto a los masculinos son los de las trabajadoras en servicios (52.3%), artesanas y operarias (52.3%), vendedoras (64.1%), y profesionales y técnicas (71.4%). A excepción del grupos de artesanas y operarias, todos los restantes grupos ocupacionales incorporan porcentajes significativos de mujeres ocupadas .

Les siguen los de las gerentas y administradoras (88.0%), y las obreras y jornaleras (94.6%), categorías en las cuales se ocupan menos mujeres .

Los grupos ocupacionales de trabajadoras del transporte, agricultoras, y empleadas de oficinas presentan porcentajes mayores respecto a los masculinos (136.9%, 125.8% y 104.5%, respectivamente).

Entre estos, sabemos que las trabajadoras del transporte y las agricultoras constituyen en promedio apenas el 0.2% y 2.8% del empleo femenino total, conforme a grupo ocupacional. Se asume que sus mayores ingresos están explicados por la incorporación de mujeres a labores de transporte colegial, y las mujeres que dentro de la agricultura ejercen oficios especializados que son mejor remunerados.

En el caso de las empleadas de oficina, grupo ocupacional que integra el mayor contingente de mujeres ocupadas, los mayores ingresos respecto a los masculinos están dados por su integración al empleo gubernamental.

Al cerrar la década, los ingresos de los grupos ocupacionales que integran mayor porcentaje de ocupadas (empleadas de oficina, trabajadoras en servicios, vendedoras), han tendido en general a reportar proporciones menores respecto a los masculinos, si se contrastan con el año inicial de 1985. Sólo en el caso de las profesionales y técnicas se reporta un leve aumento de 68.9% a 69.6%.

1.8. Mujeres rurales:

Conforme a las estimaciones oficiales para 1995, la población rural ascendió a 1,186,391 habitantes, y las mujeres integraron el 47.2% de la misma.

En 1995 la población rural en edad de trabajar ascendió, según la Encuesta de Hogares, a 603, 802 personas, representando el 37% de la población nacional. Las mujeres constituían el 46.9% y los hombres el 53.1% de la población rural mayor de 15 años.

La PNEA rural incorporó un 76.9% de hombres y apenas un 23.0% de mujeres (bastante menor que el promedio nacional femenino para ese año, que fue de 35%). La tasa rural de participación femenina para 1995, fue de 29.3%, y la masculina, de 86.1%.

La PNEA rural femenina ascendió al 81.8% (la nacional fue de 75.7%), con un fuerte aporte de las amas de casa (68.5%), que en su totalidad fueron mujeres. Las mujeres rurales aportan un mayor porcentaje de amas de casas a la PNEA, que las urbanas (51.7% y 48.3%, respectivamente).

Respecto al empleo, las mujeres representan el 20.1% de los ocupados rurales totales. Entre los desocupados constituyen el 46.6%, frente a un 53.4% masculino. La tasa de desempleo rural entre las mujeres, es sensiblemente mayor que la masculina (19.3% frente a 6.6%). Según esto, una buena parte del reducido número de mujeres que integró la población económicamente activa rural en 1995, lo hizo como desempleada.

Según rama de actividad, en 1995 las ocupadas rurales reportan sus mayores porcentajes dentro del comercio al por mayor y menor (19.3% y en hogares privados con servicio doméstico (15.6%), ramas terciarias que aglutinarían entonces alrededor del 35% de las ocupadas. Les siguen la industria manufacturera, en que las mujeres aportan el 12.4% de su fuerza laboral, y sólo en tercer lugar la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (11.1%).

Los hombres, en cambio, se concentran básicamente en el sector primario, con un fuerte 57.9% en agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

Si se examina las categorías ocupacionales se verifica que entre las ocupadas rurales el 59.6% se registra como asalariada o empleadas, un 29.8% como cuenta propia, sólo un 1.6% como patronas, y 9.0% como trabajadoras familiares.

El gobierno, la empresa privada, y el servicio doméstico constituyen los principales empleadores de las ocupadas rurales (37.5%, 36.2%, y 26.2%, respectivamente).

En el caso de los varones, el 48.3% se registran como empleados o asalariados, 39.2% como cuenta propia, como patrono el 3.1%, y como trabajadores familiares el 9.3%.

El mayor empleador masculino es básicamente la empresa privada, que aglutina al 68.9% de los empleados. Los hombres en el servicio doméstico constituyen apenas el 8.6% de los empleados.

1.9. Mujeres indígenas:

Respecto a las mujeres indígenas, no se cuenta con información nacional actualizada sobre su situación. Los últimos datos conocidos provienen del Censo de 1990. Las encuestas de hogares no dan información sobre estos grupos.

Los grupos indígenas integran el 8.3% de los habitantes rurales. Las mujeres constituyen 48.4% de la población indígena, y el 8.2% de la población rural femenina.

Entre la población mayor de 10 años, las mujeres indígenas aglutinaron el 48,3%, o sea, casi la mitad de los que, conforme al Censo, están en edad de trabajar.

La PEA indígena de 1990, incorporó a un 79.4% de hombres, y a un 20.6% de mujeres (porcentaje algo menor que la PEA rural femenina). La tasa de participación indígena femenina, fue de 19.1%, y la masculina, de 68.8%. Este contraste es más fuerte que para el caso rural y el nacional.

La PNEA femenina indígena reportó un 80.9%, mientras la masculina fue de 31.2%.

Entre los ocupados indígenas, las mujeres constituyen apenas el 20.8%, mientras el restante 79.2% es masculino. Las tasas de desempleo abierto femenino indígena para 1990, resultaron algo menores que las masculinas (8.6% frente a 9.7%).

Según rama de actividad, las ocupadas indígenas se distribuyen entre agricultura, caza, silvicultura y pesca (48.5%), y trabajo en industrias manufactureras (34.1%). Los hombres, por su lado, se ubican fundamentalmente en agricultura, caza, silvicultura y pesca, con 82.9%.

Si se observan los índices de femineidad conforme a ramas de actividad económica, se constata que las mujeres explican el empleo en la industria manufacturera y en el servicio doméstico para hogares privados (índices de 341.0 y 335.0, respectivamente). En el resto de las ramas, los índices son bastante bajos para las mujeres.

En el caso del trabajo de las indígenas en la industria manufacturera, la información se complementa al examinar el alto índice de femineidad

que reporta, entre las ocupaciones, el rubro artesano y operarios en ocupaciones, relacionadas con la hilandería, la confección de vestuario, calzado y otros, el cual asciende a 260.0%. La artesanía indígena femenina explica entonces la alta presencia de mujeres en la industria manufacturera.

1.10 Resumen y comentarios:

Aunque son bien conocidas las fuertes restricciones que presenta el mercado laboral tanto para hombres como para mujeres que componen la fuerza de trabajo del país, los indicadores estadísticos vistos nos muestran que éstas son mayores para las mujeres.

Los indicadores nos han dado cuenta de la menor pero sostenidamente creciente y discriminada participación de las mujeres panameñas en el mundo laboral respecto a la población masculina. Esto se reflejó en:

- el comportamiento por sexo de la PEA, las tasas de participación, el empleo, y las tasas de desempleo;

- la fuerte concentración femenina en las ramas terciarias de servicio y comercio, frente a una distribución más homogénea de los hombres en las distintas ramas, permitiéndoles mayor movilidad intersectorial;

- el contraste entre el ingreso tardío y retiro temprano de las mujeres al mercado laboral, frente al inicio temprano y permanencia por más tiempo de los hombres;

- la feminización de la PNEA, encabezada por las amas de casa;

- su proporcionalmente mayor, aunque particular integración al trabajo asalariado, a través del empleo en la empresa privada, el gobierno, y el servicio domestico;

- su sobre presentación en categorías ocupacionales de menor jerarquía social y económica como el trabajo en servicios domésticos, aunada a su subrepresentación en la categoría patrono o socio;

- su creciente (aunque menor) integración entre los cuentapropistas;

- su mayor escolarización y aporte de mano de obra profesionalizada, no aparejado con ingresos equivalentes a los masculinos;

- la marcada división sexual del trabajo expresada en las categorías ocupacionales;

- su menor presencia en cargos gerenciales y administrativos;

- su mayor permanencia como desempleadas;
- sus menores ingresos en las ramas de actividad y grupos ocupacionales que más reclutan mujeres;
- sus más desventajosas condiciones de incorporación al trabajo cuando se trata de mujeres rurales e indígenas.

Los hallazgos sobre la menor, sostenidamente creciente, y discriminada participación de las mujeres en el mundo laboral logran explicarse al relacionarlo con aportes teóricos y conceptuales que previenen del análisis de género.

Podría cuestionarse, por ejemplo, la menor participación femenina que reportan los datos, expresadas en las diferencias porcentuales que registran tanto su PEA como sus tasas de participación respecto a las masculinas. Estos datos suelen ocultar problemas de subregistro que presentan las estadísticas oficiales al medir la actividad económica femenina.

Tras muchas "amas de casa", clasificadas como inactivas, se oculta un importante contingente de fuerza de trabajo cuya forma de inserción productiva no sólo está sometida a las variaciones estacionales inherente a la informalidad rural o urbana, sino que además está supeditada, superpuesta y confundida con el rol doméstico primario que declaran. Esto no lo advierten ni quienes encuestan, ni las encuestadas, ni las boletas de registros. El resultado es la subenumeración de la actividad económica femenina.

Esta situación se evidencia más en el campo, donde resulta difícil diferenciar las faenas domésticas del trabajo "productivo" agrícola que hacen las mujeres, ya que los espacios de realización de ambos se funden: el hogar es la finca y la finca es el hogar. Conforme a los datos vistos, además de que son más las mujeres rurales que se declaran amas de casa y por ende se registran como PNEA, la mayor parte de las amas de casa que se declararon inactivas puras residen en áreas rurales.

Ahora bien, aunque los problemas de subregistro son reales y afectan la valoración del aporte femenino, es importante recalcar que las mujeres reportan, en efecto, menor participación económica, lo cual se explica por la asignación social y asunción por las mujeres, de roles domésticos hogareños que les imponen fuertes limitaciones para integrarse al mercado laboral.

La decisión de trabajar o no fuera de casa, el cuándo empezar y dejar de hacerlo, el tiempo invertido en ello, y el tipo de trabajo a realizar, no sólo depende de las señales del mercado laboral, sino de factores inherentes a la organización doméstica del hogar, a las características económicas de la familia, y a sus valoraciones (que incluyen las de las propias mujeres), sobre la actividad y espacio social adecuado para el género femenino.

Así, aspectos como el tamaño de la familia, el sexo, edades y parentescos de sus miembros, sus características educacionales, las valoraciones culturales sobre qué miembro del hogar son responsables de las faenas domésticas y cómo efectivamente se distribuyen las mismas, interactúan con sus necesidades de ingresos económicos. A partir de ello se define cuántos y quiénes deben incorporarse al mercado de trabajo. Por usos sociales las labores domésticas corresponden a las mujeres y, en las medidas de las posibilidades familiares, serán ellas las que queden en casa a cargo de esas labores. De allí que sus roles domésticos les generen limitaciones reales para incorporarse laboralmente como se reflejó, por ejemplo, en las edades de incorporación y retiro de mujeres del mercado laboral.

No obstante, a pesar de estas limitaciones, los indicadores también han dado cuenta de que la participación de las mujeres panameñas en el mundo laboral es sostenidamente creciente, lo cual significa que esta aparentemente rígida asignación social de faenas domésticas a las mujeres puede flexibilizarse. Análisis explicativos (Berger y Buvinic, 1988) destacan un conjunto de factores que combinadamente han posibilitado la creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo:

- la crisis económica y el desempleo que hacen necesaria la incorporación laboral de más miembros (sobre todo en familias pobres);

- la mayor migración de mujeres campesinas a raíz de los procesos urbanizatorios;

- el mayor acceso de mujeres a la educación y formación laboral;

- la disminución de la fecundidad,

- el incremento de la jefatura femenina de hogar,

- el carácter terciario de la economía aunado a la evolución tecnológica que permite mercantilizar algunas labores domésticas,

- y la mayor posibilidad de contratar ayuda doméstica o de contar con apoyo familiar en sociedades subdesarrolladas.

Pero el significativo incremento de la participación femenina en el mercado laboral explicada por estos factores, muy pronto revela su naturaleza discriminatoria.

Tras él se esconden procesos diversos evidenciados por las estadísticas, como la feminización del desempleo; el creciente subempleo; la terciarización del empleo femenino en condiciones precarias; la segregación ocupacional hacia actividades de menor poder y jerarquía social y económica incluso para mujeres profesionales; y otros.

Avalado por las pautas sociales sobre las tareas y características que corresponden a la mujer, el mundo laboral les reserva entonces espacios específicos en que suelen ejercer labores relacionadas tanto con sus destrezas domésticas como con sus atributos de personalidad, cuya desvaloración social tiene también su expresión en la retribución económica.

En tal sentido, las condiciones discriminatorias en que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo no sólo se fundamentan sino que reproducen la cultura sesgada de género existente en la sociedad.

Así, entonces, lejos de modificar el estatus socioeconómico de la mujer, su creciente participación económica parece exponerlas a nuevas situaciones de subordinación y pobreza. Se hace necesario buscar el equilibrio entre el esfuerzo desplegado por las mujeres para participar en el mercado laboral, la adecuada utilización de su potencial de contribución al desarrollo socioeconómico, y la retribución de beneficios acordes con su participación.

Para ello es imprescindible generar condiciones laborales que posibiliten el adecuado desarrollo de ese potencial femenino. Aunque el problema de la discriminación laboral de las mujeres se ha expresado en forma contundente a través de las estadísticas, no se agotan en ellas. La discriminación se manifiesta con igual fuerza en las diferentes condiciones y relaciones de trabajo que les ofrece el mercado laboral.

Aspectos como las condiciones de salubridad, higiene y seguridad laboral en que se trabaja, facilidades públicas existentes frente a responsabilidades familiares, seguridad social, leyes que rigen las relaciones laborales, y otros serán enfocados en algunas de las secciones a continuación, y darán cuenta de estas diferenciales condiciones.

El Derecho como Institución Legitimadora de la Opresión de Las Mujeres

NISCHMA DEL C. VILLARREAL CHAVEZ

La garantía de cohesión y estabilidad social han dependido y dependen, para bien o para mal, del nivel de aceptación de las reglas que establezca el sistema predominante, lo que trae como consecuencia determinados modelos de estratificación clasista, desigualdades económicas, explícitas relaciones de poder, de servidumbre y desigualdades de género.

La ideología como conjunto de ideas sistematizadas e institucionalizadas, a la vez que garantiza la organicidad y coherencia social, permite que las desigualdades se vean a través del tiempo como normales, como consecuencia de un proceso natural e inmutable. Los complejos mecanismos antropológicos que sirven de trasfondo a la actividad cotidiana de los seres humanos, así como el contexto histórico concreto, —herencia social— más necesidad, explican que las leyes no son más que definiciones de poder que expresan la ideología dominante en una sociedad.

La cultura patriarcal predominante en todas las sociedades contemporáneas, cualquiera que sea su orden político, económico y religioso, mantiene su vigencia a través de diversas instituciones, una de ellas la constituye el Derecho.

Por ser una institución ideologizante, no es neutral, se expresa en privilegios para unos y subordinación para otras y para otros. El Derecho jerarquiza, valora o desvaloriza, por tanto puede llegar a ser clasista, racista, pero sobre todo androcéntrico.

Todas, absolutamente todas, las sociedades se sustentan en una cultura patriarcal, que salvaguarda los intereses de los hombres en menoscabo de los intereses de las mujeres. Por ello el Derecho es a todas luces androcéntrico, toma como centro de sus principios al hombre, como parámetro de la humanidad.

El Derecho entonces se convierte en una de las más importantes instituciones legitimadoras de la subordinación de las mujeres, hecho social e histórico que aún cuando para algunos y algunas parezca invisible, se evidencia con fuerza en el mundo privado y público.

Nuestro derecho se compone de normas escritas y no escritas, sustantivas, adjetivas, en definitiva de normas que sin lugar a dudas, han expresado y expresan las necesidades, los sentimientos, la preservación de privilegios de un grupo social determinado. En última instancia llegan a expresar hasta los temores de dicho grupo a perderlos.

Las necesidades de las mujeres de ayer y hoy han sido definidas como un apéndice de las necesidades de los hombres. Fueron "colectivizadas", nunca comunes y por ende invisibilizadas. Ello dio origen a normas protectoras, más no promotoras de los derechos de las mujeres.

Las necesidades de conocimiento, trabajo, participación pública y ejercicio pleno de la sexualidad y la libertad para las mujeres han estado condicionadas en tanto satisfagan las necesidades de su esposo, compañero, padre, hijos e hijas.

El derecho con todos sus componentes ha estado entonces históricamente condicionado por el poder y las necesidades de los hombres en la sociedad. La atención de estas necesidades a través del Derecho se expresan de diferentes formas, a través de mecanismos formales (integrados por las leyes escritas, instituciones y autoridades que le dan sentido a la ley), y por mecanismos informales constituidos por las tradiciones, actitudes, usos y costumbres que se hacen legítimas y verosímiles para la sociedad.

Las leyes escritas y no escritas no son invariables, están determinadas política, social y culturalmente. Están de hecho influidas por los condicionantes culturales en boga, los mecanismos de manipulación ideológica beligerantes en el entorno social.

Algunas y muchas de ellas quedan varadas en el tiempo, como un rezago ideológico, pretendiendo prevalecer invariables, aun cuando la situación que las originaron se modifique, debido a un mecanismo denominado "inercia social".

Según este criterio, primero cambia la realidad y después, mucho después, la conciencia.

Los ajustes conceptuales que luego se trasladarán a las normas llegan mucho más tarde, muchas veces producto de confrontaciones y contradicciones sociales.

Un ejemplo, lo observamos en las leyes de protección especial para las mujeres en el plano laboral. La Corte Suprema de Justicia declaró mediante **Sentencia de 29 de abril de 1994 la inconstitucionalidad del ordinal 1 del artículo 104 del Código de Trabajo**, que prohibía a las mujeres trabajar en subterráneos, minas, subsuelos, canteras, actividades manuales de construcción civil y actividades peligrosas.

A pesar, muy a pesar de la declaración de este fallo judicial, los empresarios se niegan a contratar mujeres en el sector de la construcción, o peor aun los contratos de algunas que logran ser empleadas, las definen, no como trabajadoras de la construcción sino que establecen en sus contratos que deberán realizar otras labores que nada tienen que ver con el objeto esencial del contrato.

La prohibición, aun cuando no se encuentre jurídicamente establecida, se extrapola del plano formal al plano cultural para mantener su objetivo original, su vigencia y eficacia. Se trata en primera instancia de desestimular los contratos laborales a mujeres en sectores considerados tradicionalmente masculinos.

Otro ejemplo se encuentra establecido en el **Artículo Nº. 491 del Código de la Familia** mediante el cual se prohíbe a los establecimientos educativos imponer sanciones disciplinarias a las estudiantes por causa de embarazo. Sin embargo, aun cuando dicha norma se encuentre promulgada y sea de obligatorio cumplimiento para la sociedad, el hecho real es que las niñas embarazadas son obligadas mediante un sinnúmero de subterfugios expresados en actitudes que van desde el rechazo y miedo de "contagio general" al resto de las estudiantes y legitimados y avalados por una "red social" constituida por padres de familia, maestros, y profesores. Esta red se convierte en promotora de la desigualdad de oportunidades a la educación de las niñas, que impide la eficacia en la aplicación de la normativa jurídica. Educación y familia, dos instituciones básicas del sistema, se unen en contraposición al instrumento legal establecido.

En el mismo sentido otra norma de menor peso legal, la encontramos en el **Decreto Ejecutivo Nº 28 de 26 de enero de 1996**, por el cual

se desarrolla el artículo 491 del Código de la Familia, establece una serie de mecanismos preventivos, de seguridad y atención para los casos de embarazo en la población estudiantil. El **Artículo N° 4**, específicamente preceptúa los procedimientos a seguir para estos casos en los planteles oficiales. "El director del Colegio, junto al padre de familia o su representante legal, la estudiante, su profesor consejero y los profesores de las asignaturas que cursa, realizarán una evaluación de la situación y establecerán los medios educativos adecuados para la continuación de los estudios de la estudiante embarazada". La pregunta que surge aquí es la siguiente: si la estudiante decidiera continuar sus estudios de manera regular, sin intervención de métodos distintos como los señalados por el decreto, tales como sistema de módulos, estudio libre y cualquier otra modalidad de estudio que el Ministerio de Educación adopte ¿sería necesario realizar evaluaciones exhaustivas del caso en particular, o simplemente se reconocerá plenamente el derecho postulado en el Código de la Familia?

Partiendo del hecho claro de que el artículo 491, no tiene como objetivo más que, el de impedir la exclusión forzada de las niñas embarazadas del sistema educativo, permitir su ejercicio pleno del derecho a la educación postulado en la **Convención de los Derechos del Niño** ratificada por nuestro país; mal pueden entonces las estudiantes embarazadas ejercer este derecho en tanto que este Decreto establece limitaciones al mismo, otorgándole un sentido distinto del plasmado en la norma jurídica principal. Se trata de normas con un carácter ambiguo que van en detrimento del ejercicio real del derecho a la educación de las niñas. En todo caso a quien corresponde definir los medios educativos es directamente a la estudiante afectada, decidir sobre la forma de ejercer su derecho a la educación es un derecho eminentemente humano.

Cada ejemplo establecido permite entender que las normas bien pueden estar derogadas y continúan teniendo vigencia; se instalan en la conciencia individual a tal punto que llegan a ser acatadas a plenitud.

Existen también las normas que aun cuando están formuladas a través de mecanismos jurídicos, una vez pasan por el proceso de interpretación de las instituciones y las autoridades que la representan, su aplicación dependerá del sentido, de los valores, conocimientos, opiniones, ideas, ideales, creencias, juicios y prejuicios que las mismas viertan sobre ellas.

Analizar el fenómeno jurídico con una visión de género, nos permite entonces reconocer que las normas no deben ser estudiadas única y

exclusivamente en su plano formal, la letra de la ley, es esencial ampliar el análisis de las mismas a sus resultados y sobre todo las consecuencias específicas que tendrán para hombres y mujeres.

El estudio de las leyes en términos generales desde la perspectiva de género posibilita la comprensión de los porqué y cuándo una norma aparentemente igualitaria a todos y todas, una vez aplicada, puede llegar a tener como resultado la desigualdad. Abogadas del movimiento feminista contemporáneo establecen que "ni siquiera nos debería importar, para efectos de la reconceptualización de la igualdad, cuáles diferencias son biológicas y cuales son construidas por el género, sino que debemos concentrarnos en crear una igualdad de resultados para todas las personas que parten, precisamente, de que hoy por hoy las personas vivimos con grandes desigualdades y que **esas desigualdades deben ser el punto de partida y no de llegada de las leyes**". (Facio, 1995.p.254)

Por otra parte, los mecanismos legales (entendiéndolos en su acepción más amplia) están permeados por la moralidad; pueden, como dije antes, valorar o desvalorar la conducta de las personas. Pero la moral que se expresa no es única, o universal, ni siquiera llega a ser común para todos y todas, lleva implícita el fenómeno de la dualidad, es decir la doble moral.

La moral es un concepto lleno de subjetividad, es temporal, y su significado real está sujeto a variaciones en el tiempo y a condiciones y estereotipos culturales. La moral entonces se expresa de una u otra forma de acuerdo a la época, a la sociedad en condiciones de modo, tiempo y lugar. El modelo ético vigente, previamente establecido por leyes y costumbres es lo que permite la calificación concreta de la conducta individual.

Las normas de cada sociedad determinan la moral aplicable para mujeres y hombres que la conforman. No está expresada de manera bilateral, sino de manera dual. La moral expresada en toda norma se aplica de manera distinta a hombres y mujeres, no se hace visible muchas veces en su estado formal, sino cuando pasa al componente cultural, se hará concreta y visible a través de las instituciones y personas que la interpreten y apliquen, tomando como base la idea, estereotipo y actitud que se tenga sobre el hecho en cuestión.

La promulgación de la Ley 27 sobre Violencia intrafamiliar y maltrato de menores, por ejemplo, supone un avance significativo; sin embargo, es importante aclarar que la ley reproduce en algunos de sus

artículos los conceptos androcéntricos y discriminatorios contra las mujeres víctimas de delitos como el estupro. Continúa estableciendo requisitos en cuanto a la "**experiencia sexual**" de las niñas sujeto de la protección penal. El bien jurídico tutelado no es la libertad sexual, por el contrario se califica a la víctima en términos de "doncellez", concepto que encierra evidentes visos de discriminación por razón de sexo.

En el delito de estupro, por un lado se le otorga validez al consentimiento de los y las menores de edad en la relación sexual, y por el otro, se le exige representación legal o representación de quien tenga su guarda o crianza, para poder acceder a la justicia mediante querrela, en una clara contradicción con la normativa constitucional. Las niñas en estos casos llegan a experimentar una doble forma de victimización, de la ley en sí misma y de un procedimiento discriminatorio no escrito, pero respetado en todas sus partes, mediante el cual deberá probar toda una serie de hechos.

Un procedimiento que evaluará esencialmente no si el hecho se cometió, sino la reputación y experticia sexual de la víctima.

Las niñas en este caso concreto llevarán el peso de la moral expresada en la norma, haciéndolas responsables de su sexualidad, ya no más justificada en virtud de su minoridad. El delito no sólo está calificado por la edad de la víctima sino por conceptos subjetivos y anacrónicos, tales como el término "doncellez", que ha sido definido por los operadores de la ley penal como sinónimo de "virginidad". Doncellez y virginidad en una simbiosis traumática determinarán si la víctima es objeto o no de la protección penal.

Y si aún no está muy claro el resultado discriminatorio de esta norma en concreto, es muy importante que conozcamos que la reparación del daño para las víctimas de este delito en particular, **prevee la cárcel o el matrimonio como solución, promoviendo la exoneración de la culpa del victimario, en caso de escoger- él y sólo él-casarse con al víctima.**

Históricamente los derechos de las mujeres se han expresado a través de normas protectoras que no llegan a tener un significado material, real y concreto. Por el contrario, estas normas protectoras llevan consigo conceptos de tutela de la vida misma de las mujeres, su accionar en los espacios públicos y privados ha estado sujeto a controles que se inician en la infancia y continúan en al vida adulta.

El control sobre nuestra función reproductora es prueba de ello. Las instituciones sociales han mistificado la maternidad a tal punto que lle-

gan a considerarla como la única función de la mujer en el desarrollo social.

Durante la época primitiva la mujer ocupaba un lugar predominante en la organización social, a tal punto que la filiación de la descendencia se realizaba por vía materna y no paterna como sucede en la actualidad. La maternidad era entonces respetada y venerada, pero también se convirtió en un hecho ciertamente atemorizante.

Alexandra Kollontai se refiere a este hecho cuando dice: "*A causa de su maternidad, la mujer ocupó una posición particular entre los miembros de la tribu. Es la mujer a quien la humanidad debe el descubrimiento de la agricultura, descubrimiento extremadamente importante para su evaluación económica...*" (Kollontai, 1982. p.49).

Ese respeto y veneración determinó sin duda la posición preponderante de la mujer, comprobada en algunas sociedades primitivas; en nuestras sociedades por el contrario determina su exclusión del mundo público.

El hecho venturoso se convirtió en tragedia. La actividad reproductiva de la mujer justificó y legitimó su subordinación, y por tanto controló su acceso a la producción, a la libertad, a la independencia, a su crecimiento intelectual, es decir a la realización plena de sus facultades humanas.

Estudios del tema en cuestión señalan "*...cabría preguntarse si como sociedad es posible aprender a distinguir entre el aspecto biológico de la reproducción (la maternidad) y sus aspectos afectivos, sociales y culturales (el maternazgo). El primero se termina con el amamantamiento, el segundo implica un compromiso a largo plazo, el cual deja espacio para que tanto los hombres como las mujeres se pregunten acerca del significado de ser padre.*" (Alméras, 1997.p.19).

Las responsabilidades familiares en términos amplios han sido referidas sólo a las mujeres en virtud de una función consciente del patriarcado que asimila a la maternidad con las tareas que en suma corresponden a ambos realizar.

El tiempo y el espacio son una de las muchas categorías que han sido tradicionalmente divididas por razón del sexo. El tiempo que le imprimen las mujeres a cada tarea verificada en el hogar y a la crianza y cuidado de sus hijos e hijas, es inversamente proporcional al tiempo que le imprimirán a sus tareas en la esfera pública.

Las leyes laborales han estado condicionadas a estos hechos, no fueron construidas tomando en consideración que la mujer tiene como necesidad el ejercicio de un trabajo remunerado, si no, ¿cómo se explicaría en la práctica el subvalor del trabajo realizado por mujeres, o el hecho real de que las remuneraciones salariales estén determinadas por el sexo de quien las ejecute y no por la capacitación, experiencia y credenciales académicas?

¿Cómo explicar el hostigamiento sexual en el empleo contra las mujeres? Una vez rompe algunas barreras que le impiden participar en el mercado laboral, arrastrando inevitablemente su rol doméstico, se la hostiga sexualmente para que no lo olvide jamás y afiance su rol subordinando. Poseerla es controlarla. Esta forma no sutil de discriminación laboral por razón de sexo, limita sus posibilidades de incorporación plena al mercado laboral, de ascenso a jefaturas, de autonomía e independencia y en última instancia, promueve el desempleo femenino.

Nuestra Constitución establece que el Estado deberá proteger la maternidad. De qué protección estamos hablando cuando todas las mujeres sin distinción de clase, edad y raza estamos obligadas a demostrar una certificación que no nos encontramos en estado grávido para ser sujeta de contratación laboral. Una ley no escrita que se cumple sin limitaciones, una práctica inconstitucional que limita el acceso de las mujeres al proceso productivo por razón del proceso de reproducción.

La protección especial de la maternidad ha tenido como resultado una distorsión de las normas laborales que promueven la desigualdad de oportunidades para las mujeres en el mundo laboral. La protección de la maternidad se transforma en el anverso y reverso de la misma moneda: la desigualdad.

Los Códigos Laborales de Latinoamérica tienen un denominador común: la protección especial de las mujeres, asimilados en conjunto con la protección de los menores de edad, como si de hecho y de derecho, las necesidades de protección laboral de ambos grupos se conjugaran en una sola. El concepto de vulnerabilidad afianza la subordinación a través de normas que más allá de la "protección especial", se traducen en la "exclusión especial" de las mujeres.

Nuestro Código de Trabajo en particular expresa normas protectoras, no promotoras del ejercicio pleno del Derecho al Trabajo de las Mujeres, más allá de la satisfacción de necesidades básicas o como suplemento a la economía, es un derecho humano, es la necesidad de ser

protagonistas en el proceso de producción y desarrollo económico y social.

A través de la ejemplificación de situaciones que se producen en nuestro ordenamiento social y jurídico, hemos querido contribuir al análisis y la reflexión de la realidad de las mujeres a la luz del Derecho.

El Derecho ha sufrido un proceso de evolución, convirtiéndose en momentos históricos determinados en protagonista y otros, en producto de los cambios sociales; sin embargo, para el caso de las mujeres en particular, en algunos casos concretos ha involucionado.

No ha sido suficiente con que nuestra Constitución proclame igualdad *jurídica sin distinción de sexo; la historia de las mujeres ha demostrado que dicha igualdad no le ha sido propia sino ajena*. La construcción de una nueva cultura jurídica sólo será posible con la deconstrucción de las estructuras patriarcales que hasta hoy han sustentado al Derecho como institución, desinstalarlas de la conciencia individual, que tenga como inspiración de sus principios las necesidades de mujeres y hombres, donde el ideal social no promueva contradicciones en las esferas públicas y privadas sobre el *deber ser y querer ser de las mujeres*.

Construir una nueva visión sobre los Derechos de las Mujeres es hacerlas protagonistas en la construcción de su propia vida.

NOTAS

Almérás, Diane. **Compartir Responsabilidades Familiares: Una tarea para el desarrollo**. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Séptima Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el desarrollo económico y social de América Latina. Documento de Referencia Nº DDR/6 de 12 de noviembre de 1997.

De qué igualdad se trata. Conferencia dictada por Alda Facio y citado en el Manual de Capacitación en Módulos: "Hacia la igualdad Real". Naciones Unidas/ILANUDUNIFEM. s/f.

Kollontai, Alexandra. **Mujer Historia y Sociedad. Sobre la Liberación de la Mujer**. Editorial Fontamara, Barcelona, 1982.

Georgina Jiménez, Una Feminista en los Inicios de la Sociología Panameña

BRISEIDA BARRANTES

Las cinco primeras décadas de la República estuvieron marcadas por una clara y consistente lucha de clases expresada a través de diferentes movimientos sociales que propugnaban por mejores condiciones de vida y justos derechos.

En la década del 20 hubo grandes acontecimientos, tanto a nivel mundial como nacional, que alimentaron por un lado la fuerza de la clase obrera organizada, y por otro, la fortaleza de un movimiento femenino por el derecho al sufragio universal.

Aunque en estas fechas no se había logrado organizar formalmente un partido obrero, se inaugura en 1921 la **Federación Obrera de la República de Panamá**, que le abrió sus puertas a las trabajadoras con su programa en el que se comprometían con las luchas por la obtención del derecho al sufragio femenino. Luego de esta agrupación nace el **Sindicato General de Trabajadores**.

A mediados de 1922, se inicia una organización femenina denominada "**Centro Renovación**", que va a ser la antesala de lo que en 1923 se constituiría en el **Partido Nacional Feminista**. Igualmente se crea en 1922 la **Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer** que no duraría mucho tiempo. Ambos grupos femeninos tenían una composición básicamente magisterial. Sin embargo, eran radicalmente opuestos en sus objetivos. El **Partido Nacional Feminista** centró sus principales

metas en la consecución del ejercicio pleno del sufragio universal, expresando en los veinte puntos de su programa, en tanto que la **Sociedad Nacional Para el Progreso de la Mujer** hacía énfasis solamente en la educación y cultura de las mujeres.

La beligerancia que desarrolló el **Partido Nacional Feminista** hizo posible su unidad de acción con gremios importantes que dirigieron luchas sociales que se desarrollaron a lo largo de su existencia, tal fue el caso de su participación en los acontecimientos de octubre de 1925 con la huelga inquilinaria en la que anarquistas y socialistas confluyeron en una rebelión contra el aumento de los alquileres, organizada por la **Liga de Inquilinos y Subsistencia**, adscrita al **Sindicato General de Trabajadores**.

Con el nacimiento en la década del 30 de los **Partidos Comunista y Socialista** se fortalece la conciencia de clase y las luchas demuestran mayor organización a través de conferencias, charlas, congresos, etc; que ayudan a la capacitación de los trabajadores(as) y gente con preocupaciones sociales y cívicas. Es así que el **Partido Nacional Feminista** organiza y participa en este tipo de eventos de corte popular y, a la vez, es invitado a dictar conferencias sobre la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y, por supuesto, de la importancia de la obtención del sufragio femenino.

En 1924 el **Partido Nacional Feminista** crea la "Escuela de Cultura Femenina" impulsado por su célebre dirigente **Clara González**, donde "impartían clases maestras en calidad de ad honorem como **Clara de Turner**; **Gumercinda Páez**, **Sara Sotillo**, **Georgina Jiménez** y **Elida de Crespo**, entre otras."¹ El contenido cívico de esta escuela se manifiesta en los siguientes temas:

- "1. Emancipación Social de la Mujer.
2. Acción Social de la Mujer.
3. Producción, distribución y consumo de la riqueza.
4. Obrerismo.
5. Derechos civiles y políticos de la Mujer.

1. Gutiérrez, Mira y Candanedo, Jacqueline. **Un siglo de Liderazgo Femenino en Panamá. Un Enfoque Histórico- Sociológico**. 1ª ed. Servicio de Paz y Justicia. Panamá, 1997.

6. Mujeres célebres en la historia

7. Maternidad Social.

8. Redención económica de la mujer.

9. Desigualdades sociales e intelectuales y medios de corregirlas.¹¹²

Como vemos la lista de los temas son del más alto nivel y su enriquecimiento se debió fundamentalmente a la calidad de las mujeres que se esforzaron en transmitir sus conocimientos a otras.

En este contexto nacional, donde se crean organizaciones con perspectiva de cambios radicales en los cimientos de la sociedad, a raíz de los movimientos sociales y políticos que se dan en medio de un escenario saturado por un enclave colonial, participan una serie de mujeres que supieron identificar sus aspiraciones políticas, profesionales y sociales como parte de su accionar diario y de hecho los tomaron como un compromiso personal.

Una de las más destacadas por su afán de conocimiento y su ímpetu de maestra joven y sangre nueva lo fue **Georgina Jiménez**, quien se consideró elogiada cuando la doctora Clara González le solicitó que fuese la representante al Congreso de Fundación del **Partido Nacional Feminista** por la provincia de **Los Santos**, producto de su trabajo como fundadora del **Centro Renovación** en este importante sitio del interior de nuestro país, lo que ella aceptó gustosa y con la más alta responsabilidad ciudadana.

Pero su papel no quedó allí, fue la delegada panameña del **Partido Nacional Feminista** ante el **Primer Congreso Interamericano de Mujeres**, efectuado en nuestra capital, en 1926.

Georgina Jiménez, fue una ciudadana que nació producto de la unión de **Paula Rivera Urriola**, quien fue descendiente de una madre colombiana y padre español, y de **Antonio Jiménez**. Tuvo dos hermanas y dos hermanos. Fue madre de **Gina Paula López Jiménez**, hija de su matrimonio con **Carlos Augusto López**.

El haber nacido en febrero de 1910, le hizo posible conocer la dura situación por la que atravesaban las mujeres de su época con respecto, no sólo a las limitaciones educativas, sino a la imposibilidad de ejercer

2. Ibid

sus derechos como ciudadanas y particularmente la opción de elegir y ser elegidas. El habersele hecho difícil la posibilidad de seguir estudiando, luego de obtener su título de sexto grado, la hizo perseverar hasta que logró su objetivo de ingresar a la **Escuela Normal de Institutoras** en la cual obtuvo el título de maestra en 1922, el año en que se fundaba el **Centro Renovación**.

Ejerció el cargo de maestra en el área rural. Su primer ejercicio docente lo efectuó en la **Escuela de La Arena en Chitré**. Por cierto que, la escuela donde laboraba, fue cerrada por el gobierno de turno por "falta de matrícula", lo que originó su traslado a la Villa de Los Santos donde impartió clases durante dos años y luego volvería a la capital.

Ocurrió que no contenta con sus conocimientos logra viajar para realizar estudios de bachiller universitario en ciencias y estudiar en varias ciudades norteamericanas. Al cabo de 12 años de estadía en las tierras del tío Sam regresa con los títulos en Maestría en Ciencias Políticas y Doctorado en Filosofía, obtenidos entre 1934 y 1939. Siendo estudiante universitaria llegó a ser Presidenta del grupo Interamericano de estudiantes y miembro del Club de Español de Mujeres, donde ofreció interesantes conferencias sobre Panamá.

De vuelta al terruño, en 1940, logra el cargo de *Asesora de Labores del Censo de Población y jefa de la oficina del Censo* y con plena orientación sociológica impulsa el *primer censo que empadrona a toda la población durante un mismo día*. Es llamada a ejercer como *docente en la Universidad de Panamá* como *catedrática de Sociología*, en medio de una situación crítica referente a las dificultades que se les crearon a varios profesores alemanes que estaban asilados en nuestro país y no les fueron renovados sus contratos en la Universidad, seguramente como consecuencia de su accionar político.

Su decisión y seguridad por la participación activa en toma de decisiones y protagonismo de las mujeres la hizo participar activamente como docente universitaria al punto de llegar a ser candidata en unas elecciones en la Facultad de Administración Pública y Comercio, donde logra ser elegida Decana en la década del 60. Desde esa tribuna impulsó la creación de la Escuela de Economía e impulsó cambios sustantivos para fortalecer dicha facultad.

Durante este período como catedrática de sociología tuvo una producción a través de diversas publicaciones, ensayos, artículos, etc., que demostraron la influencia que ejercieron los sociólogos norteamericanos en su visión de conjunto de la sociedad.

Dentro de su producción bibliográfica encontramos que, entre 1942 y 1960, publicó una serie de artículos y ensayos notables sobre hechos sociales de gran importancia para la sociedad panameña. Podemos mencionar que, para 1942, escribió **Sobre Reforma Universitaria en Panamá**, en la cual manifestaba sus opiniones con respecto a los cambios que debían hacerse en el campus universitario, desde su particular opinión que no concordaba con la de los docentes y los estudiantes que cuestionaron la Reforma Universitaria de 1941. Concerniente al análisis plasmado en el trabajo mencionado, el sociólogo **Carlos Gasnell** nos ilustra al señalarnos que **Georgina Jiménez** planteaba como alternativa *"la defensa del principio del pluralismo socioeducativo como una expresión de la necesaria adecuación que debe existir entre los cambios sociales económicos y políticos que ocurren en la sociedad y los cambios que paralelamente y en el mismo sentido deben producirse en el sistema educativo"*³

Es necesario señalar también el llamado de atención que nos hace Gasnell al detectar que pese a la postura asumida por Jiménez en aquellos momentos de crisis universitaria y del re juego de las ideas pensantes sobre los vaivenes y avatares de nuestra recién creada Universidad, la socióloga coincidía con la propuesta de cogobierno universitario que impulsó la Asociación de Universitarios como un reconocimiento a la seriedad con que los estudiantes asumían este compromiso que serviría para el adelanto de la Universidad.⁴

Su integridad como humana en el accionar diario de los acontecimientos que ocurrían en los momentos por ella vividos la hacía manifestarse, desde su clara postura ideológica y política, como una defensora de los derechos de las mujeres y en este aspecto logra mantener la visión histórica de la situación de la población femenina a través de un análisis, breve pero conciso y sustancioso, que nos alumbró sobre la realidad en la que se desenvolvían las mujeres panameñas. Tal aporte de innegable trascendencia es la **Participación de la Mujer en la Vida Pública** documento que recoge tres aspectos fundamentales en áreas de mayor impacto para la población femenina y las mismas son: la condición jurídica y social, la participación efectiva de la mujer en su cotidianidad,

3. Gasnell, Carlos. **Elementos Generales de Sociología**. Muestra de Sociología Panameña. Departamento de Sociología Universidad de Panamá. 1992.

4. Ibid. pág 152.

y cómo y en qué están organizadas las mujeres. Por supuesto sus mejores herramientas lo fueron el propio censo que dirigió en 1940 y toda su lucidez con respecto a la importancia de medir la condición social de las mujeres para saber hasta dónde se limitaban sus derechos. Este trabajo fue presentado por ella en el segundo seminario de la mujer que auspició la Organización de Naciones Unidas en Bogotá, a mediados de 1959.

Este documento, de relevancia histórica para el estudio del movimiento femenino panameño, nos transporta a los inicios de la década del 50, cuando logra que presenciemos la vivencia con que las mujeres defendieron la constitución de 1946, la que estuvo amenazada de ser eliminada por los sectores que querían retroceder a la otrora carta magna de 1941. Nos informa la catedrática Jiménez que, *"la crisis política que dio por resultado el derrocamiento del gobierno "panameñista" en 1951, por el atentado de querer suspender la Constitución de 1946 y volver a la de 1941, de corte totalitario y parcial en contra de la mujer, dio a ésta la ocasión de demostrar todo su valor cívico y también su capacidad política para la lucha, pues esta vez las mujeres salieron de sus casas en masa, sin distinción de clases sociales a defender sus derechos conculcados; prácticamente fueron ellas las que obligaron a la fuerza pública a cumplir su función de mantener el imperio de la Constitución y de las leyes."*⁵ Esta situación por la que atravesaron las mujeres panameñas en aquel momento nos demuestra una vez más que las conquistas que se obtienen en cualquier momento histórico, sobre todo luego de arduas batallas por tenerlas, sólo se mantendrán si se defienden, de lo contrario se retrocede en peores condiciones. Esto es así por una sencilla razón argumentada en una frase por la feminista panameña Clara González, en su última entrevista pública efectuada por la periodista Vielka Vásquez, en 1989, donde sentenció que, *"un derecho es un derecho y se acabó"*.⁶

Dentro de los aportes con que la doctora Jiménez de López contribuyó con mayor énfasis al estudio de la sociología panameña hubo uno que no pierde vigencia y es un documento de referencia para cualquier estudio o investigación acerca de las clases sociales en nuestro país y es su

5. Jiménez de López, Georgina. **Participación de la mujer en la Vida Pública** en Anuario de Derecho. Facultad de derecho y Ciencias Políticas de Panamá. Año IV. Nº 4, Panamá, 1959-60.

6. Video Clara González, La Mujer del Siglo. Vielka Vásquez. Panamá, 1989.

ensayo sobre **La clase Media en Panamá**, escrito en 1949, donde trasluce sus apreciaciones sobre la evolución de las clases sociales en PANAMÁ y el surgimiento de una clase media producto del mayor acceso a la educación y puestos de jerarquía en el Estado. Esto nos lo expresa al analizar el aspecto cultural de dicha clase social cuando señala que, *"La educación ha sido y continúa siendo la gran propulsora de la clase media y liberadora de la masa del pueblo. A ello ha contribuido en su mayor medida el Estado panameño, defectuoso en otros aspectos como estado democrático, pero fiel a su ideal de democratizar la enseñanza y mejorar el contenido de ella."*⁷

Aduce también en sus opiniones al respecto, que la alternativa debe ser la de incentivar la preparación de la masa para una mejor ubicación social y por lo tanto fortalecer a la clase media; en ese sentido afirma: *"No compartimos el criterio de los que piensan que las minorías seleccionadas logran el adelanto social y sobre todo cultural de un país. Pensamos, por el contrario, que el gran problema hoy día en América Latina es precisamente levantar el nivel cultural así como el standard social y nivel de vida de su masa de población, ignorante e indigente todavía, y colocarla de este modo a tono con las minorías cultas y afortunadas, con las cuales ha convivido, desde la Colonia, en un divorcio mental. Una clase media vigorosa, consciente de sus responsabilidades es la solución."*⁸ Toda su interpretación, lleva la influencia de la sociología funcionalista en boga en ese momento y su dinámica la hace suponer que es necesario incentivar el **status** social de esa clase, de la que Georgina Jiménez formaba parte.

No podemos dejar de considerar las apreciaciones que, a través de su estudio sobre **La Clase Media en Panamá**, hace Georgina Jiménez con respecto al histórico movimiento que levantó las banderas nacionalistas de defensa de la soberanía denominado Frente Patriótico de la Juventud, al cual ubica, por su composición cultural, como parte de este sector de clase y así nos dice: *"Pero es innegable que la clase media del país, una vez normalizada su condición de clase, tendrá que enfrentarse a sus propios problemas y tratará de hacer sentir su influencia en una*

7. Gandasegui, Marcos A. (Compilador), Jiménez de López, Georgina; Porras, Hernán; Soler, Ricauter. **Las Clases Sociales en Panamá, Grupos Humanos, clases medias, élites y oligarquía**. 1a; ed. Centro de Estudios Latinoamericanos. Panamá, 1993.

8. *ibidem* págs 38-39.

*forma más positiva en los destinos del país, posiblemente a través de organizaciones, ya sea de carácter cívico o de carácter político. Actualmente el conocido Frente Patriótico de la Juventud, formado casi en su totalidad por elementos egresados de la Universidad Nacional, procura hacerse sentir en la vida pública, aunque para ello se inspira más que todo en un sentimiento patriótico, como su nombre lo indica, que en un sentimiento de clase y una orientación ideológica bien demarcada. Marcha esta institución definitivamente hacia la formación de un partido político con tendencia de partido de centro, y con aspiración de absorber y dirigir todo el elemento estudiantil de las escuelas secundarias y de la Universidad. La Federación de Estudiantes de Panamá y la AMUP (Asociación de Mujeres Universitarias), aunque menos beligerante ambas, abiertamente políticas, pueden ejercer en otras direcciones una influencia propicia a la estabilidad social del país.*⁹ La doctora Jiménez formó parte y fue socia fundadora de la **Asociación de Mujeres Universitarias de Panamá** y llegó a ser presidenta de la **Unión de Catedráticas de la Universidad de Panamá**.¹⁰

Su expresión de clase y preocupación por mejorar los niveles de vida se visualiza a través de su participación como socia fundadora de la sociedad **Amigos de la Vivienda Propia** que buscaba mejores vías y mayores facilidades para las familias de pocos recursos con el objetivo de que pudiesen construir viviendas en las mejores condiciones posibles.

Lamentablemente tiene inéditas dos obras que merecerían el esfuerzo del INAC, alguna otra institución o centro de investigación social por recuperar que son **La Familia Panameña y sus Problemas** con la que obtuvo el Premio Miró en 1960 en la sección de Ensayo. El otro trabajo se denomina **Las Minorías Étnicas y Nacionales en el Istmo**. Nos damos cuenta de que estamos ante una insigne estudiosa de la realidad social panameña que dejó sus huellas en páginas y en hechos concretos como el de haber sido pilar en la construcción de un movimiento social representativo de las mujeres panameñas y que no quedó en la década del 20.

Para 1945 el Partido Feminista se diluye en la **Unión Nacional de Mujeres** del cual **Georgina Jimenez** va a ser miembro fundadora y

9. Ibid. págs 37-38.

10 Oller de Mulford, Juana. **Valores Panameños Femeninos**. Editor Marcos Ostrander Mulford. Panamá, 1978.

dirigente célebre de la misma, ya que pasó a ser la Secretaria General de esta agrupación. Pasa a la celebridad producto de que es, en ese año, que las mujeres con sus luchas, logran obtener el acuerdo de que se va a legislar correctamente sobre el sufragio femenino y así, en la Constitución de 1946, donde habían sido electas dos reconocidas dirigente femininas (**Gumerinda Paéz y Esther Neira de Calvo**), se establece constitucionalmente el derecho a elegir y ser elegidas a todas las mujeres. Por primera vez en igualdad de condiciones con los hombres y sin distinguos étnicos, políticos, o creencias religiosas. Fue una victoria rotunda contra todos aquellos sectores conservadores que con su doble moral, impidieron siempre las posibilidades de otorgar el sufragio universal a las panameñas. Pero afortunadamente la tenacidad y la confianza en la razón y la defensa de los derechos a través de toda una jornada que desde 1922 se convirtió en un esfuerzo heroico de las mujeres que, como Georgina Jiménez, se mantuvieron en pie de lucha por la igualdad de condiciones sin restricciones.

Es sorprendente la vitalidad desarrollada por esta estudiosa de las ciencias sociales, que tuvo la oportunidad y el regocijo de haber recorrido casi todo el siglo XX, un siglo convulsivo, donde han ocurrido tantos acontecimientos que han revolucionado no sólo a la sociedad humana, sino a la ciencia y a la tecnología. Hechos sociales, científicos y políticos que enfrentaron y aún enfrentan diversas formas de interpretación teórica. A través de sus 84 años vivenciales logró compactar sus ideales, su cotidianidad y conocimiento como parte de su pensamiento lúcido y crítico que la acompañó en su accionar diario de acuerdo a su tiempo y por encima del mismo.

En 1994, luego de toda una vida de trabajo, estudio y esfuerzo propio por mejores días tantos para mujeres como para los hombres de nuestra patria, muere en la ciudad capital la primera socióloga de nuestro Istmo. Sin embargo, su legado, manifestado en sus preocupaciones por elevar el nivel cultural, político y social de quienes formamos parte de este país, es tan vigente como en la década del 40 y gracias a sus aportes tanto sociológicos, históricos como políticos, nos han llevado a enriquecer desde **otras perspectivas teóricas, ideológicas y políticas** las interpretaciones del desarrollo de los diferentes movimientos sociales que se dieron en tan temprana época de nuestra República.

BIBLIOGRAFIA

- Alvarado, Angela, y Marco, Yolanda.** Mujeres que Cambiaron Nuestra Historia. 1a. ed. Fondo Canadá-Panamá, y UNICEF. Panamá, 1996.
- Gandásegui, Marco A. (Compilador); Jiménez de López, Hernan y Soler Ricaurter.** La clase Social en Panamá. Grupos Humanos, clase medias, élites y oligarquía. 1a. CELA. Panamá, 1993.
- Gasnell, Carlos.** Elementos Generales de Sociología. Muestra Panameña de Sociología. Departamento de Sociología, Universidad de Panamá. Panamá, 1992.
- Gutiérrez, Mirla y Candanedo, Jacqueline.** Un Siglo de Liderazgo Femenino en Panamá. Un Enfoque Histórico-Sociológico. 1a. ed. SERPAJ. Panamá, 1997.
- Jiménez de López, Georgina.** Participación de la Mujeres la Vida Pública, publicado en Anuario de Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá. Año IV, N° 4. Panamá, 1959-60.
- Marco, Yolanda.** El Feminismo de los Años Veinte y la Redefinición de la Femenidad en Panamá. Capítulo 8, Entre Silencios y Voces. Género e Historia en América Central (1750-1990). Centro Nacional para El Desarrollo de la Mujer y la Familia. Eugenia Rodríguez Saénz, editora. 1a. ed. San José, C.R., 1997.
- Oller de Mulford, Juana.** Valores Panameños Femeninos. Editor Marcos Ostronder Mulford. Panamá, 1978.

EL CEPAM*: Una Alternativa de Abordaje Integral de la Violencia Intrafamiliar en Panamá

NIDIA ELENA CHASE

ANTECEDENTES:

La creación de un Centro Especializado de atención en Violencia Doméstica nace como resultado de la reflexión generada a lo interno del equipo de trabajo del Programa de la Mujer del Departamento Nacional de Pastoral Social y Cáritas Panamá, durante los años de final de la década de los 80's. Dicho programa, bajo la atinada dirección de la compañera Mercedes C. Cumberbath M., se inserta en el apoyo a la promoción integral de la mujer, específicamente en la formación de los grupos de mujeres de base constituidos principalmente por indígenas, campesinas, pobladoras, amas de casa, que eran animados a lo interno de la iglesia panameña por los equipos de trabajo pastoral en diversas comunidades de nuestro país. Esta vivencia cercana a los grupos, aunado a otros eventos a nivel nacional e internacional van sentando las bases que fortalecerán los pilares de nuestra reflexión.

A nivel internacional consideramos determinante el hecho de que la Organización de las Naciones Unidas declarara en 1975 la Conmemoración del Año Internacional de la Mujer, que una vez finalizado diera inicio al Decenio de la Mujer (1976-1985). El período comprendido entre los años 1975 y 1985, abrió espacios para que muchas organizaciones cuya labor se insertaba en la problemática socio-económica del país

* Centro Pastoral de Mujeres Contra El Maltrato-CEPAM

y sobre todo aquellas que total o parcialmente incidían de alguna manera en aspecto de funcionamiento familiar, constataran y comunicaran la creciente realidad de la violencia que experimentaban las mujeres, en las diversas esferas de su vida, de lo cual no se suprimía el plano familiar donde ésta, las niñas y los niños se constituían en las/os principales afectadas/os, víctimas o sobrevivientes.

A nivel nacional nuestra reflexión se animaba y fortalecía con información proveniente de organizaciones especializadas en la mujer y de otras, tales como el **Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá** que revelaban un incremento acelerado en los porcentajes de abusos sexuales, violaciones carnales, incesto, maltrato físico, muchos de los cuales dejaban sobre las agredidas y sus familias saldos que lamentar.

Algunos Datos de la Realidad a Finales de la Década de los 80's:

Aunado a lo señalado en el punto anterior podemos señalar lo siguiente: un estudio exploratorio, realizado por el **Programa de la Mujer de Cáritas-Panamá** en el año de 1988, reveló que en el Cuarto de Urgencias del Hospital Santo Tomás, principal centro hospitalario de la ciudad de Panamá, se atendieron en 1988 un promedio de 4 a 5 casos diarios de mujeres victimizadas. Estas sobrevivientes se caracterizan en su mayoría por ser amas de casa, por la no identificación del agresor, la presentación de heridas producidas con objetos y armas contundentes, punzantes y/o cortantes con heridas principalmente en la cabeza, los brazos, cara y piernas. Además datos recopilados por la **Lic. Angela Alvarado** en Urgencia Pedriátrica de la Caja del Seguro Social en el período entre 1985 a 1989 registraron 538 casos de abuso y todas eran niñas. También encontró en el Hospital del Niño en los meses de julio de 1992 al 31 de enero de 1993, 30 casos de incesto y 207 casos de violación de menores de 0 mes a 14 años; de éstos 109 eran niñas y 98 eran niños.

Definiendo la Alternativa:

Para inicio del año de 1988 era claro para el equipo integrado en ese momento por Dora I. Arosemena B., Nidia Elena Chase, Eisi Raquel Medina, María de los Santos Domínguez, E. Querube Serrato C., Marinelda Varela Q., y con el aporte de María del Pilar Moreno, Cecilia Moretti y tantas otras compañeras, que era inminente para la Iglesia Católica panameña definir una respuesta concreta ante la violencia que experimentamos las mujeres en nuestro país. El espectro era muy am-

plio y los recursos financieros inexistentes. Toda la reflexión nos llevó a priorizar la violencia que experimentamos en el plano de la familia. Ese espacio que para tantas personas no constituye el puerto seguro al cual arribar para compartir alegrías y penas sino el infierno donde cohabita la persona victimaria que hace que la vida se detenga entre el miedo, el horror, el dolor, el peligro y la posibilidad de perder la vida en un instante.

En este sentido el **CEPAM** se define como una respuesta concreta a la problemática de violencia intrafamiliar en Panamá. Desde sus inicios, su aporte se definió como un abordaje interdisciplinario, a través de siete servicios básicos a saber: Consultorías y Asesorías Legal, Social y Sicológica, Línea de Auxilio, Grupos de AUTOAPOYO, Albergue Temporal, Voluntariado, Investigación y Educación a la Comunidad, por medio de los cuales se intenta abordar la problemática en dos grandes vertientes:

1. Atención integral a las víctimas o sobrevivientes;
2. Prevención de la Violencia Intrafamiliar por medio de una labor formativa e informativa sobre la temática, encaminada a aumentar la concientización a nivel de los grupos eclesiales, parroquiales, diocesanos, organizaciones privadas y gubernamentales.

Después de un período largo de gestión a nivel internacional para la búsqueda de apoyo financiero y de selección de personal, el primer equipo de trabajo del **CEPAM** estuvo integrado por Dora Isabel Arosemena Beitía (Trabajadora Social), Nidia Elena Chase De Dier (Trabajadora Social), María Antonieta Adames Pimentel (Abogada) y Zanya Gerli Villalobos Greco (Sicóloga) y coordinado por Mercedes Cecilia Cumberbath M. y administrado por E. Querube Serrato Cuoto e inició labores en octubre de 1990. La década de los años 90's significó para nuestro país la creación de diversos Centros que en diferentes perspectivas querían y de hecho han abordado la realidad de violencia intrafamiliar en Panamá. **EL CENTRO PASTORAL DE MUJERES CONTRA EL MALTRATO**, es el Centro pionero en el abordaje exclusivo de la violencia intrafamiliar en Panamá.

La violencia intrafamiliar se define como todo acto, acción u omisión que atente contra la dignidad, derechos e integridad de una persona, de parte de otra con la cual se tiene un vínculo fuerte por razón de lazos familiares. En la violencia intrafamiliar a diferencia de los otros procesos violentos, existe un elemento que agrava la situación, dado el vínculo familiar existente entre la persona victimaria o sujeto activo y la víctima, sobreviviente o sujeto pasivo.

La violencia intrafamiliar desarrolla en un patrón de comportamiento en donde una persona se ubica en una posición de poder y control sobre las otras personas que son agredidas. En este sentido el conocer todo lo relativo a ***EL CIRCULO O CICLO DE LA VIOLENCIA*** y ***el CIRCULO DEL PODER Y CONTROL*** es de suma importancia en el manejo de la violencia intrafamiliar. Estos conocimientos nos permiten entender las verdaderas razones que llevan a mantener a las mujeres en estas relaciones, que si bien es cierto son incomprensibles para nosotros, nos explican por qué es tan difícil salir de estas relaciones disfuncionales.

El **CEPAM** se define como un servicio concreto de justicia que tiene una perspectiva de fe que nos ha llevado a buscar mecanismos para establecer a todos los niveles, principalmente en la familia, relaciones más humanas y fraternas donde se respeta la dignidad, integridad y derechos de todos/as y cada uno/a de sus miembros.

Este esfuerzo responde a las prioridades de la Iglesia panameña que además trata de restablecer el balance mediante la concientización y sensibilización de la población a partir de la reflexión sistemática de la realidad que refleja un aumento rápido de este fenómeno social que atenta contra el plan de salvación.

Nuestro país ha sido escenario de incidentes graves y lamentables en materia de violencia intrafamiliar. Ante la ocurrencia de estos hechos gran parte de la población se consterna e interroga sobre la posibilidad de reducir o bien evitar los mismos. Otros sencillamente no logran incorporar lo profundo del daño que los mismos causan en las personas y en la sociedad en general. Son muchos los estudios y publicaciones que a este respecto se han difundido. Sin embargo el problema persiste.

Como sociedad hemos sido testigos de hechos violentos que han costado la vida de uno o varios miembros de una misma familia. Sin embargo, la violencia intrafamiliar es tan cotidiana y pese a que no siempre alcanza los niveles de cegar una vida, sin embargo son miles los adultos, jóvenes y niños y niñas cuyas vidas transcurren en el horror de la violencia física, psicológica, sexual y económica, produciendo en sus actores la muerte del ser y consecuentemente limitando sus capacidades.

En el **CEPAM**, como un espacio vinculado a la Iglesia católica, para enfrentar la violencia familiar, partimos del llamado que hace el Magisterio de la Iglesia, el solidarizarse con los sectores que sufren los efectos de una sociedad deshumanizada y desbalanceada, expresada en la discriminación a niveles de clase, raza y género.

Creemos en la dignidad de toda persona y por ello optamos por la no violencia en todas las relaciones entre los géneros, fundamentalmente en el plano familiar en el cual ninguna persona debe ser agredida. La promoción humana parte del convencimiento de la necesidad de instaurar un mundo en el cual varones y mujeres, niños y niñas pueden hacer valer sus derechos y ejercer plenamente sus deberes, de manera libre y sin discriminación.

Por otro lado, rechazamos la normalización con la que nuestra sociedad ha rodeado a las prácticas violentas. Reafirmamos la disposición de nuestros recursos principalmente hacia el beneficio de los sectores mas empobrecidos y vulnerables de la sociedad.

Pérfil del Recurso Humano:

- Formación de licenciaturas con diversas especializaciones a nivel de postgrado en Docencia Superior y de Maestrías en Orientación Familiar, Sicología Clínica, Gerencia del Bienestar Social;

- Todas tienen experiencias de vida y trabajo pastoral a nivel de las parroquias y movimientos apostólicos.

- Formación en Pastoral Familiar, Social y de la Mujer.

- Formación en Género, Autoestima, Autocuidado.

- Cursos de adiestramiento en Violencia Doméstica de diversos períodos de duración que ha oscilado en su mayoría de 1 a 6 meses.

- Formación sobre el rol de la mujer en la Biblia desde una lectura crítica, análisis del papel de la mujer desde la Enseñanza Social de la Iglesia con una visión liberadora, género y poder, autoestima.

- Adiestramiento en dependencia química, prevención y tratamientos y otros.

El equipo de trabajo actual está conformado por Dania Ivonne Carrera Herrera quien lo coordina, Lilia Elena Vásquez Pinto como administradora, Dora Isabel Arosemena Beitía y Nidia Elena Chase De Dier.

Pasando de lo Privado a lo Público: Las Demandas de las Mujeres:

La década actual también ha significado para Panamá la entrada en vigencia de la Ley N° 27 de 16 de junio de 1995 por medio de la cual se Tipifica el Delito de Violencia Intrafamiliar y Maltrato de Menores y se dictan medidas para la creación de Dependencias Especializadas. Esta

Ley constituye un hito importante en el abordaje de la violencia intrafamiliar, toda vez que finalmente ubica a la violencia intrafamiliar en su justo lugar, al lado de los otros delitos consagrados en nuestra legislación, así como sacar esta problemática del Código Administrativo donde recibía tratamiento como falta Administrativa, restándole su verdadera gravedad.

A raíz de la entrada en vigencia de la Ley N° 27 se han creado Mediante Resolución N° 11 de 28 de diciembre de 1995, las "Fiscalías Especializadas en Asuntos de Familia y el Menor, a fin de servir como despacho de recepción e investigación de las denuncias por violencia intrafamiliar y maltrato de menores respectivamente. En los meses de enero a agosto de 1996 se atendieron en la Fiscalía Primera un total de 190 mujeres, 11 hombres y 32 menores de edad víctimas de violencia intrafamiliar" (*Informe Nacional Clara González: Situación de la Mujer en Panamá, 1996, pág. 59*).

La Violencia Intrafamiliar tiene un componente profundamente político. El daño causado influye en la productividad de quien lo experimenta. Siendo la mujer la más vulnerable en el plano familiar, se infiere entonces que gran parte de la mitad del principal recurso del país no estará en condiciones óptimas para contribuir al desarrollo del país. Los niños y niñas testigos de violencia intrafamiliar disminuyen su aprovechamiento y rendimiento escolar, experimentan retrocesos en sus niveles de desarrollo sicomotor y fisiológico y además muchas veces son víctimas inocentes de la violencia física al ser alcanzados por objetos contundentes, cortantes y demás utilizados por las personas adultas en sus actos agresivos, causando inclusive la muerte de menores. En otros casos, como consecuencia de los traumas profundos en su personalidad por ser testigos de Violencia Intrafamiliar se ven limitados e imposibilitados en establecer relaciones de pareja estables y tienen dificultades en general para convivir de manera normal en sociedad y dar y recibir afectividad.

Principales Logros:

Son muchos los logros que hemos cosechado durante estos años de labor, entre los que podemos mencionar que hemos sobrepasado nuestras expectativas a nivel de formación, mucho más que duplicado el número de estos eventos que nos planteamos como meta, lo cual nos ha significado el reconocimiento como un ente especializado, expresado en la creciente demanda de nuestros servicios, de las personas que han encontrado una respuesta satisfactoria a sus situaciones particulares y

por los grupos con quienes hemos contactado mediante las jornadas de capacitación-entrenamiento sobre la violencia doméstica.

Otro logro importante lo constituye la conformación de un voluntariado permanente conformado por profesionales y estudiantes de diversas disciplinas que apoyan tareas administrativas, formativas y consultorías.

El CEPAM ha sido distinguido por dos años consecutivos por medio del reconocimiento a dos de sus profesionales con el premio de **"MUJER AYUDANDO A MUJERES"** otorgado por el Club Soroptimista Panamá Pacífico.

En cuanto a las usuarias de nuestros servicios podemos mencionar que en las mismas es notorio el desarrollo de sus capacidades de autorespuesta, así como la elaboración y publicación de sus testimonios en forma de artículos periodísticos y su participación en programas radiales y televisivos.

Nuestros Retos:

Hoy vemos la necesidad de continuar y profundizar la prestación de servicios teniendo un Centro consolidado con un marco doctrinal e ideológico más definido, que permita demostrar la necesidad de que estos casos sean abordados de una manera diferente dada las características tan complejas, multicausales y consecuencias diversas que nos llevan a plantearnos como meta enfrentar la problemática de manera integral, esfuerzo que nos ha distinguido positivamente a nivel nacional como un modelo particular el manejo de los casos y el abordaje de esta problemática que nos ha distinguido de otros servicios existentes en la República de Panamá.

Romper el silencio social y elevar la conciencia a nivel de las instituciones públicas, privadas, eclesiales, autoridades judiciales, medios de comunicación y comunidad en general han sido, entre otros, nuestros mayores logros. Sin embargo, los niveles de violencia en la sociedad panameña continúan alejándose de lo esperado. Hay que crear conciencia de que la violencia intrafamiliar es asunto público y como tal todas y todos somos socialmente responsables de detener la ejecución de los mismos.

Aunado a la gravedad ascendente y generalizada del problema a nivel intrafamiliar, la situación se tornaba mas difícil al evidenciar la carencia de espacio y/o programas que atendieran esta problemática,

colocando a las personas sobrevivientes en una situación de mayor desprotección en términos generales.

Continuar prestando el servicio en los niveles que desde sus inicios se han desarrollado y ampliar el mismo a nivel nacional. No suspender el servicio ya que serían muchas las familias afectadas y sería una gran pérdida para el país, ya que el Centro brinda una atención integral y su trabajo preventivo contribuye a aumentar la seguridad y estabilidad de las personas usuarias.

En el proceso de seguimiento a la Ley N° 27 hay que lograr la implementación de mecanismos que aligeren y hagan expeditos los trámites legales que generalmente son engorrosos para las personas sobrevivientes.

Lo que hemos aprendido:

1. Para una mayor efectividad e impacto del trabajo realizado por el CEPAM, éste se vincula y coordina actividades con espacios tales como: Red Nacional contra la violencia hacia la Mujer y la Familia, Colectivo para la revisión de normas y procedimientos en materia Judicial y Penal, Vinculación con otras Iglesias tales como la Iglesia Metodista y la Episcopal, Cruz Blanca Panameña, Conferencia Episcopal Panameña (Departamento de Familia de la Curia, Movimiento Familiar Cristiano, Federación de Mujeres Católicas, Programa de Jardines de Párvulos de la Iglesia Católica panameña, Instituto Cooperativo Interamericano), Juzgados Seccionales de Menores y otros.

2. La labor de tratamiento tiene una importancia fundamental, sin embargo las acciones de prevención son prioritarias; la difusión de información clara es asunto de vida o muerte.

3. El fortalecimiento de la autoestima de la mujer tiene que ser un eje en todo trabajo de promoción de la mujer. En las situaciones de violencia ya sean éstas físicas, psicológicas, sexual o económicas es fundamental el fortalecimiento de la autoestima en la persona sobreviviente.

****CEPAL: VII Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe***

URANIA A. UNGO M.

El gobierno de la República de Panamá, por mi conducto, se complace en enviar a la organización de este evento sus parabienes y deseos de éxitos y su cordial saludo a las y los participantes de la Señora Ministra y del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, Leonor Calderón. La integración de las mujeres al desarrollo económico y social es parte de la agenda de gobierno y un componente fundamental en el proceso de reforma del Estado y de la modernización social, política y económica.

La presente exposición constituye una síntesis brevísima de un proceso político muy rico, diverso y complejo. En consecuencia previo a entrar en la exposición de los que a nuestro juicio constituyen los problemas fundamentales para el acceso de las mujeres a los niveles de decisión y poder en todos los ámbitos de la vida social, es necesario narrar, también de modo breve, el proceso del cual el presente es tributario.

1. Los años noventa para Panamá inician con un trauma nacional que condicionó de diversos modos la vida social. De modo particular para las distintas expresiones organizativas de las mujeres ello significó una nueva articulación, formas nuevas de concertación política, fenóme-

* Ponencia a la VII Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 19 al 21 de noviembre de 1997.

no que en el país- por lo menos para el caso de las organizaciones políticas de mujeres-tenía ya una historia.

Así en 1992 nace el **Foro de Mujer y Desarrollo**, espacio en el cual desde feministas hasta campesinas, académicas, obreras, religiosas, políticas, profesionales e indígenas concertan una visión común para concebir la condición y la situación de las mujeres en el país.

Dos años de trabajo producen el **Plan Nacional Mujer y Desarrollo**, concebido con un diagnóstico y una propuesta de las mujeres al Estado sobre su condición. Surgen además otros espacios de concertación, la **Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Integral de la Mujer**. (CODIM) y el **Foro Nacional de Partidos Políticos**, los que a su vez acompañan al **Foro** en el proceso siguiente que consistió en que, con el apoyo técnico y financiero de la **Unión Europea** el **Plan** se operativizara y surgiera el **Plan de Acción Mujer y Desarrollo**, hoy equivalente nacional a los planes de igualdad de oportunidades de otros países.

En noviembre de 1993 todos las y los candidatos a la presidencia de la República firman el **Compromiso Mujer y Desarrollo**, asumiendo que el gobierno electo popularmente ejecutará el **Plan** y creará los mecanismos gubernamentales necesarios para tal ejecución.

En septiembre de 1994 al asumir la Presidencia el gobierno del Dr. Ernesto Pérez Balladares convoca a las organizaciones a diversos procesos de consulta que producen que en 1995 se creen por decreto ejecutivo el **Consejo Nacional de la Mujer** y la **Dirección Nacional de la Mujer**, **Secretaría Técnica** del mismo Consejo, dentro del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

Creados y funcionado los **mecanismos gubernamentales nacionales para el adelanto de las mujeres**, se crean oficinas y programas en la mayoría de las instituciones gubernamentales que constituyen mecanismos sectoriales para el avance de las mujeres. A su vez el proceso iniciado respecto al **Plan** con la **Unión Europea** produce en 1996 la firma del **Convenio Promoción de la Igualdad de Oportunidades en Panamá (Pan/B7- 3010 -95-100)** que tiene por objetivo fundamental apoyar la ejecución de grandes partes del **Plan de Acción Mujer y Desarrollo**, la formulación y ejecución de políticas públicas de igualdad de oportunidades y la integración de la perspectiva de género en todas las políticas públicas. En este momento el Convenio-se encuentra en su fase inicial, recién está empezando desde octubre recién pasado.

Dicho Convenio pactado a cinco años, compromete financiamiento de la **Unión Europea** por casi trece millones de dólares y un aporte local de siete millones como contraparte en dicho período.

A la vez en el marco de la **reforma y modernización del Estado**, de reestructuración de muchas instituciones gubernamentales, el gobierno de Panamá recientemente ha creado el **Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia**, concebido como una institución para abordar la dimensión social de la modernización y reforma del Estado, como entidad rectora y ejecutora de políticas sociales para la promoción del desarrollo humano, la equidad de género, la focalización y la facilitación de procesos de participación y de organización ciudadana.

Ello es importante para ingresar en el proceso de globalización en condiciones que no afecten y que por el contrario propicien el desarrollo humano y la integración social mediante el acceso a recursos financieros generados por los procesos de privatización y de reestructuración de empresas estatales. A la vez en el marco de los compromisos internacionales firmados sin reservas por nuestro país contenido en la **Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)** ratificada por Panamá en 1981-, las **Estrategias de Nairobi Orientadas hacia el Futuro para el Adelanto de la mujer (1985)**, el **Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993)**, la **Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará, 1994)** desarrollada en nuestra **Ley 27 de 1995**, el **Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (Cairo, 1994)**, el **Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995)**, el **Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe 1995-2001 (Mar del Plata, 1994)** y la **Plataforma de Acción Mundial de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 95)**.

2. Como es evidente el momento en que hoy nos encontramos se caracteriza principalmente por contener condiciones favorables al cambio de la condición femenina. Tanto del Estado como de las propias organizaciones de mujeres, existe una voluntad política comprometida, instituciones para la ejecución y el seguimiento, los recursos económicos y técnicos y un "clima" general entre las y los formadores de opiniones públicas de la necesidad del cambio de algunos de los aspectos más visibles de la subordinación.

Es un contexto esperanzador. Sin embargo los obstáculos también están presentes, a pesar de los avances. Estos son de diversa naturaleza y de distintos órdenes que van desde las concepciones del mundo y tradiciones que consagran las diferencias entre los sexos como desigualdades sociales y genéricas "naturales" y eternas, pasando por las visiones de las y los funcionarios cuyas prácticas institucionales refuerzan la subordinación hasta la escasez de los recursos financieros asignados a los mecanismos gubernamentales para el adelanto de la condición de las mujeres. Ello se traduce en que las mujeres están sistemáticamente ancladas al trabajo doméstico, a la crianza y cuidado de la infancia, sujetas a la discriminación laboral en todas sus formas, marginadas del control y el acceso a los recursos materiales y bienes culturales, ausentes en las grandes decisiones políticas y macroeconómicas, sometidas a la violencia doméstica y social, limitadas respecto al control y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y de las decisiones demográficas que directamente las afectan, tanto como presentes en todas las regiones de la vida social pero ausentes de los niveles de poder y decisión.

En octubre recién pasado la **Dirección Nacional de la Mujer** presentó su primer informe sobre la condición y situación de las mujeres en el país.

A partir de una "radiografía" que siguió la estructura de la Plataforma de **Acción Beijing 95** construimos un panorama de dicha condición y situación, la conclusión más general puede ser sintetizada así:

"...la situación de las mujeres panameñas puede ser expresada de modo sintético como **desigual y contradictoria**... los altos niveles de educación de las panameñas, su extensa participación social y política no se compaginan con su desventaja salarial ni con su ausencia de las cúspides del poder en todos los ámbitos, para citar sólo algunas coordenadas significativas".

De modo particular es significativa la anotación última, la presencia femenina en todos los ámbitos de la vida social se caracteriza por un gran trabajo en las bases y ausencia en los niveles de poder y decisión. Así se evidencia en cualquier aspecto que una examine, se trate de los órganos del Estado, la dirección de centrales y federaciones obreras, gremios profesionales o patronales, asociaciones y centros estudiantiles universitarios, partidos políticos, gerencia y/o propiedades de empresas, títulos de propiedad de bienes y empresas.

También se nos hizo evidente que un fenómeno tal, que se extiende por todo el orden social no puede ser concebido como un objeto de

conocimiento simple. Los obstáculos a la presencia de las mujeres en los niveles de poder deben ser examinados en toda su complejidad. Y sin pretender tener alguna respuesta exacta en este momento, es posible afirmar que dicho examen debería contener algunos otros ejes que se nos hacen cruciales:

- la propia relación entre las mujeres y el o los poderes existentes en la organización social.
- las propias relaciones entre las mujeres.
- la identificación de los límites "duros" a la acción de las mujeres en la vida social y política.

Tales relaciones, enunciadas así de modo simple, se constituyen en entramados presentes en el contexto, fundadores de las condiciones en las que pensamos acciones para el cambio.

3. Enunciado ello de este modo, parecen, estas cuestiones, asuntos cuya naturaleza es ajena a la agenda del desarrollo económico y social, ajena a los discursos clásicos del sistema político. Desde esta perspectiva son asuntos fundamentales cuando, por ejemplo, es evidente que **las mujeres son activas en la gestión comunitaria pero no son las líderes políticas comunitarias.**

¿Cómo se traza esta diferenciación?. Cuando hablamos de la potenciación de las mujeres ¿qué estamos diciendo realmente?

¿Y qué cualidades debería contener la intervención que se dirige a la potenciación social y personal de las mujeres?

Todavía es muy poco claro todo ello. No se trata únicamente de la oposición de las familias, exigiendo a las mujeres el tiempo y el trabajo para atenderlas, ni tampoco es sólo la invisibilidad de las mujeres para las y los funcionarios en los proyectos.

Potenciar a las mujeres, pasa entonces por establecer con claridad y distinción formas de relaciones que hasta hace muy poco no eran parte de la cuestión del desarrollo y del poder. Ello significa que la reflexión, el conocimiento debe hacer significantes fenómenos antes invisibles y que las propuestas de acciones no deben desconocer esas significaciones. Y que por el contrario, las acciones dirigidas a generar condiciones de igualdad para las mujeres también deben atravesar tales relaciones.

Es decir que no sólo se trata de mecanismos de igualdad sino que también éstos se constituyan en espacios que contribuyan a la

reformulación de las tradicionales relaciones femeninas en el proceso de realización de dichas medidas; ello por supuesto supone facilitar la profundidad y consistencia de la participación y organización de las mujeres en todas las dimensiones necesarias.

Desde nuestra perspectiva los límites y obstáculos al acceso de las mujeres al poder y al nivel de las decisiones en cualquier ámbito de la vida social conforman un poderoso tramado consagrado por las concepciones más tradicionales sobre el desarrollo social y que sólo puede ser desmantelado si la visión y la acción logran verlo integralmente, evidenciando todas sus relaciones y presencias, iluminando las regiones en que dichos límites se escudan en la tradición, la cultura y/o las costumbres y estableciendo sus dimensiones y relaciones.

Ciertamente, éstas son reflexiones aún muy iniciales sobre un proceso en marcha, seguramente el mismo proceso nos informará más sobre otras limitaciones y obstáculos hasta ahora no muy evidentes.

Es claro, por otra parte, que las relaciones relativas a la equidad de género, deben llegar hasta el mundo de las relaciones privadas- hay incluso temas que borran fronteras, vbg. Violencia contra las mujeres- y extenderse a todas las regiones del mundo de lo público sin excepción.

Y diría para finalizar, que respecto del tema del acceso al poder y las decisiones, el límite no son los aspectos técnicos sino la propia armazón fundamental de la subordinación generica, que no es neutra sino profundamente política. Y en consecuencia la voluntad política gubernamental se sostiene y avanza en el diálogo permanente con las mujeres y sus organizaciones.

Esta relación es hoy más que nunca fundamental, estratégica, no sólo para el seguimiento y la evaluación sino para el propio desarrollo, consistencia y profundidad del proceso hacia la equidad de género.

Termino como finaliza nuestro informe "Clara González"....

"Para cambiar la desigualdad entre los géneros, es necesario cambiar el estatuto histórico de las mujeres. Ello mejorará la calidad de vida de toda la población, hará de nuestro país una sociedad más armoniosa y habitable, más justa, más democrática y humana y nos situará en los niveles de desarrollo humano necesarios para enfrentar nuestros desafíos como nación en el nuevo milenio".

Mujeres Rurales: Prioridad Nacional

LUZ ALEYDA TERÁN

Hoy día nuestras sociedades se debaten en la búsqueda de alternativas que permitan disminuir la pobreza en vastos sectores de la población, aumentar el nivel de entendimiento a través de la concertación, la negociación y de mecanismos para preservar el medio ambiente y el logro del desarrollo sostenible.

Paralelo a ello se agudiza la pobreza, disminuye la calidad de vida de las personas signadas por la violencia, el desempleo, el deterioro ambiental, las enfermedades endémicas y sobre todo persiste y se mantienen estructuras e ideologías que dan sostén a la discriminación y subvaloración de la mitad de la humanidad: las mujeres.

"La pobreza obedece a causas estructurales y la mujer, por su condición de desigualdad en la sociedad, es más vulnerable. La pobreza no es sólo la falta o insuficiencia de ingresos y de condiciones materiales para la vida, sino que implica otras dimensiones relativas a la dignidad de la persona y al ejercicio pleno de su ciudadanía" (Arce M. y Leonel J.: 1996).

Las teorías feministas se han incorporado al conjunto de propuestas que abogan por un mundo mejor y más solidario, y han venido a dar claridad sobre las formas de poder que son ejercidas sobre las mujeres para subordinarla en todos los espacios, tanto los públicos como los privados.

Estas relaciones de poder basadas en la violencia, el control y el autoritarismo deben ser transformadas con nuevos modelos de cooperación, participación igualitaria y respeto mutuo. Todo esto sólo se puede lograr si cambian las condiciones de la vida social de las mujeres. (Lagarde. La Prensa: 6 A).

En este amplio abanico de mujeres que viven en condiciones cada vez más difíciles, las mujeres rurales: campesinas e indígenas, son las más discriminadas, las más invisibilizadas y las más subordinadas.

Las estadísticas indican que el 34% de las familias en el área metropolitana y el 62% de las rurales viven en condiciones de pobreza y/o de extrema pobreza. La población indígena (10% del total de habitantes) vive en los 20 distritos más pobres del país y es víctima, todavía, de enfermedades erradicadas como la tuberculosis.

Esta situación las lleva desesperadamente a la búsqueda de mejores oportunidades, generando la migración hacia el área urbana, lo que reduce la PEA en el sector primario (de 40% en 1970 a 27.4% en 1980).

Según los últimos datos de la Contraloría General de la República, del total de la población ocupada del país las mujeres son el 32.4%. El área de ocupación donde más mujeres hay (89%) es el servicio doméstico, lo que representa apenas un 6% del total de la población femenina ocupada. En este 6% se encuentran la mayoría de las migrantes del área rural.

La situación de las domésticas es hartamente conocida por su escasa remuneración, la cual oscila entre 100 y 200 balboas, las menos, por mes.

Esta última cifra no alcanza a cubrir la Canasta de Alimentos (B/. 215.00). Ni hablar de la posibilidad de cubrir la Canasta Básica (servicios y alimentos) calculada en 400.00 balboas aproximadamente.

Paralelo a su irrisoria remuneración se encuentran las exageradas jornadas laborales, que generalmente inician a las 4 ó 5 de la madrugada y culminan a las 11 ó 12 de la noche, cuando se acuesta la última persona de la casa. De allí la famosa esquila "No escuela. Dormir en el empleo ", que aparece en los periódicos cuando se convoca para un trabajo de doméstica.

Adicionalmente encontramos otros elementos tales como trato discriminante, en ocasiones abusos sexuales, físicos y psicológicos, y la

ausencia total de algún tipo de organización de las empleadas domésticas que vele por su condición social y laboral.

En nuestro país, las mujeres indígenas y campesinas pobres son las que peores servicios de salud tienen. En las áreas indígenas el promedio de médicos es de 6 por cada 10,000 habitantes y el 13% de esta población tiene deficiencia nutricional. Por cada mil habitantes urbanos hay 5.6 camas hospitalarias, pero en el campo hay 0.9 por cada mil habitantes, de las cuales 10% son camas obstétricas. Esto obliga a que cada cama sea utilizada por 2 mujeres en labor de parto o paridas en la mayoría de los hospitales del interior.

Se explica así la necesidad de formar parteras rurales o comadronas y de recuperar la medicina tradicional basada en la naturaleza y en los recursos del medio ambiente.

La escasa atención médica, recibida por la mujer del campo durante el embarazo, sumada a otras necesidades básicas, nos enfrenta a miles y miles de mujeres desdentadas, macilentas y prematuramente envejecidas.

Los puestos y centros de salud no siempre son accesibles para toda la población, ni están dotados de los recursos mínimos. A pesar de los esfuerzos del MINSA, todavía se concentran en las cabeceras de provincia los servicios más completos, los cuales también enfrentan dificultades.

Por todas estas razones frente a los 72.3 años de esperanza de vida de la mujer rural, las mujeres urbanas tienen 77.16 años.

En cuanto al analfabetismo, del total de analfabetas del país (189,174) 10.7% a nivel nacional, las mujeres representan el 51.32% y los hombres el 48.68%. Esta situación se agudiza más cuando vemos cifras en los lugares con población indígena: Bocas del Toro, Kuna Yala, Darién y Veraguas, donde el analfabetismo entre las mujeres alcanza cifras alarmantes. "Según el Censo de 1990, las mujeres de las diferentes etnias tienen un alto índice de analfabetismo: Ngöbes 53.2%, Embera-Wounan 52.6%, Kuna 44%, Buglé 41.7% y Teribe 25.2% y el promedio es de 53%." (Informe Clara González: 85).

Los programas de alfabetización de adultos y adultas se han esforzado, en atención a la máxima de la UNESCO "educa a un hombre educarás una persona, educa a una mujer y educarás a una familia", por ejecutar acciones de alfabetización dirigidas a mujeres, que sean además bilingües, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La mayor cantidad de iletradas se concentra entre grupos de edades de 55 y más años.

Las circunstancias de administradora del hogar, responsable de la familia mientras las más jóvenes trabajan en la ciudad, la edad, los prejuicios sociales, los refranes populares como "loro viejo no da la pata", la falta de apoyo de la familia, de las comunidades y la poca concentración de los esfuerzos de todos los sectores para impulsar estos procesos de formación, les hace tener, muchas veces, poco impacto en la vida cotidiana de las mujeres.

En 1995 del total de estudiantes matriculados (179,394), según datos del Ministerio de Educación a nivel medio, sólo el 7.35% correspondió a mujeres del área rural. Si observamos la situación de las mujeres rurales en cuanto a formación técnica formal obtenida a través del Bachillerato Agropecuario, vemos que en 1991 de una población de 212 estudiantes, solamente 22 eran mujeres, o sea el 10.38% y para ese mismo período se graduaron 2. El Magisterio, el bachillerato en letras y comercio, siguen siendo las carreras donde más participan las mujeres tanto del campo como de la ciudad.

Cierto es que la educación, en toda su diversidad es un derecho humano reconocido en Convenios y Declaraciones; sin embargo, para la mujer rural, las campesinas pobres e indígenas, ésta sigue siendo un privilegio.

Por otro lado, a pesar de que las mujeres rurales tienen jornadas laborales que van desde las 4 de la madrugada hasta las 9 ó 10 de la noche, según el Censo de 1990 son las que declaran mayor inactividad económica respecto a los hombres (80.9% y 83.2%). Los trabajos ejecutados por ellas en la casa, en la huerta y en la parcela es cotidiano y su jornada se alarga a 12 y hasta 15 horas, pero son las menos visibilizadas en sus aportes al desarrollo económico de las familias, comunidades y del país.

Debido a que la mayor actividad es de auto consumo, desarrollada además por el grupo familiar, "... y de que el sector moderno de la economía agropecuaria sólo explica un tercio del empleo anual destinado a la producción comercial, con 43% de sus asalariados como trabajadores eventuales, nos da claros indicios de cómo opera la estacionalidad en la absorción-expulsión de mano de obra de las relaciones formales de empleo". (Bolaños, V. **El Acceso de la Mujer a la Tierra**: 58).

Como no hay relaciones laborales contractuales, las mujeres que trabajan la agricultura asumen costos de producción que no se cuantifican ni se pagan (trabajan la parcela familiar, pero eso es "ayuda"), este

servicio no se paga y tampoco se reconoce en el Producto Interno Bruto (PIB).

"Con ello, la mujer subsidia indirectamente al sector agrario moderno, asumiendo costos de reproducción del asalariado agrícola, que este tendría que solventar bajo relaciones laborales estables. A su vez, asume costos de producción, ya que parte de la inversión hogareña (y femenina) en recursos para producir, se transforma en productos que se someten a sus canales formales de comercialización, bajo sus condiciones, sin ningún tipo de protección estatal a la pequeña productora". (Bolaños: 140).

Los sombreros, los encajes, las hamacas, las escobas, tortillas, bollos, tamales, manualidades, tejidos, cría de pollos, puercos, cosechas, etc; etc., que hacen las mujeres rurales todos los días son productos que se comercializan y que no siempre cuentan con salarios, relaciones laborales, protección legal, ni apoyo técnico, la mayoría de las veces.

Si bien se ha demostrado la importancia estratégica de las mujeres rurales en el sistema agrícola, aún subsisten los patrones culturales basados en la división genérica del trabajo que le asignan a esta roles, espacios y funciones sin reconocer, valorar, entender, ni compartir sus tres dimensiones: "a) como reproductora de la especie (tener hijos y suministrar nuevas fuerzas de trabajo); b) como reproducción social (responsabilidad casi exclusivamente materna de formar los hijos con las normas y principios existentes); y c) como reproducción de fuerza de trabajo (ayuda a reparar las energías físicas gastadas en los procesos de producción)". (**El Acceso de la Mujer a la Tierra en El Salvador: 1992**).

Como reproductoras las campesinas e indígenas diariamente realizan cientos de tareas hogareñas que garantizan la continuidad y reposición de la mano de obra, esto implica reproducción biológica, socialización, labores domésticas, tal como hemos visto, con el agravante de la ausencia de servicios públicos en la mayoría de los hogares (luz, agua, combustibles, salud, educación y otros).

Encontramos que para 1990 en el área rural los hogares jefaturados por mujeres alcanzan el 15.5% de un promedio de 4.6 miembros, se caracterizan por tener más edad que el de los jefes y una situación económica más precaria. Comparadas con el resto de la población femenina su escolaridad es más baja (52% no han superado la primaria). (Bolaños: 29-31).

En las áreas rurales se concentran el 87.2% de viviendas semipermanentes y el 61% de las improvisadas, según datos de la Dra. Enriqueta Davis. Las condiciones de estas viviendas, por su precariedad y falta de servicios públicos, no pueden ser consideradas dignas. El 99% de las viviendas urbanas tienen alcantarillado y 65.3% tanque séptico, mientras que el 63% de las rurales tienen servicios de hueco o letrina y 25.2% no tienen. Sólo el 59.2% de las viviendas gozan de acueducto, 4.8% de pozos sanitarios y 36% utilizan agua de pozos superficiales, brocales, ríos, quebradas, carros cisternas y agua lluvia.

Los niveles de contaminación, a que están sometidas todas estas fuentes de abastecimiento de agua, nos dan una idea clara del volumen de infecciones gastro-intestinales y de otros tipos, ocurridas entre la población rural.

A esta fuente de posible epidemia colectiva se suman la inexistencia de una estrategia ambiental nacional, con participación de la ciudadanía, que permita optimizar los recursos ambientales, humanos y financieros disponibles, para el mejoramiento de nuestra calidad de vida.

En este contexto, uno de los factores que más afecta a las mujeres campesinas e indígenas es el legal. "El restringir los beneficios al jefe de familia desfavorece a la mujer, ya que por costumbre social, dentro de una pareja el hombre es el considerado jefe. Con ello también se reserva a los hombres los derechos de asociación, crédito y servicios agrarios." (Bolaños: 79).

Para confirmar esto, el Informe Clara González registra que para el quinquenio 88-93 de los 7,556 títulos entregados el 27.8% eran para mujeres y el 72.2% para hombres.

Evidentemente el marco jurídico nacional no da tratamiento positivo, ni brinda condiciones de igualdad a hombres y mujeres para acceder a la propiedad de la tierra. Esto obedece primero a los patrones socio-culturales basados en la discriminación del género femenino y segundo a "...las leyes e instituciones que no se han creado, además de la falta de una doctrina jurídica desde la perspectiva de la mujer como género subordinado. En el caso de las relaciones entre géneros, el fenómeno jurídico debería considerar que hay uno que tiene más poder y privilegios que otro, y que también en este campo se regulan las relaciones de poder". (Facio, A., citada por Bolaños: 74).

En el plano organizativo, las mujeres rurales han estado supeditadas al desarrollo de las organizaciones campesinas e indígenas mixtas,

subsumidas en una agenda donde sus necesidades e intereses no están incorporados, ni son prioridad para los dirigentes. Incontables son las compañeras que a pesar de llevar sobre sus hombros grandes responsabilidades de sus grupos, no son consideradas en la toma de decisiones, ni tienen cargos directivos que las hagan visibles, o que vayan más allá de los vinculados a las funciones domésticas tradicionales.

Por su poca relación con el mundo público las mujeres ceden espacios a los hombres para que las representen, y cuando ellas se organizan para sí, la mayoría de las veces, es en el marco de sus labores domésticas. Tal es el origen de los Clubes de Amas de Casa apoyadas por el MIDA, los cuales no han tenido mayor impacto en la economía nacional, o en el avance de la mujer rural en particular.

No queremos significar con estos comentarios que las necesidades prácticas no son importantes, ni que las mujeres del campo no estemos avanzando. Sí avanzamos, y prueba de ello es el aumento de nuevas expresiones organizativas de mujeres, como son las cooperativas y otros grupos productivos.

Lo relevante es, además de crecer cuantitativamente, hacerlo cualitativamente. Generar los espacios para las organizaciones de mujeres, con sus propias agendas, estructuradas para hacer visibles sus necesidades y el impacto sus demandas. Nuestros esfuerzos están dirigidos a transformar el complejo entramado de dominación que no permite a las mujeres su participación en todos los ámbitos y el disfrute de los beneficios sociales, en igualdad de condiciones y con justicia.

Las organizaciones de mujeres rurales deben contribuir a crear prácticas y modelos de aprendizaje de la sociedad civil y política, para nuevas formas de relaciones de poder entre los géneros, incorporando en toda la trama de la sociedad nuestras demandas: en las escuelas, en las elecciones partidistas o gremiales, en los medios de comunicación, en las iglesias y en particular y prioritariamente en nuestros hogares

Las políticas de desarrollo dirigidas a mujeres rurales tienen que tener un carácter integral que garantice la organización de las mujeres, su libre autonomía, que aumenten la producción, la rentabilidad y el mejoramiento de sus condiciones de vida y las de sus familias, dando especial atención a la autoestima, al empoderamiento y la eliminación de la violencia intrafamiliar, en todas sus formas.

La violencia como mecanismo de sometimiento de las mujeres está enraizado en la psiquis de la sociedad, asociada a la subvaloración que

de nosotras se tiene. Para que mujeres y hombres nos tratemos y relacionemos como iguales, debe erradicarse la violencia.

Hay que tejer un conjunto de propuestas y acciones en torno al mejoramiento no sólo de la condición de las mujeres rurales, también de su posición. Esta se mide de acuerdo a las oportunidades, a la participación, diferencias salariales y vulnerabilidad de las mujeres ante la pobreza y la violencia. Estas acciones deben articularse a las diversas iniciativas y esfuerzos desarrollados desde las entidades gubernamentales, las no gubernamentales, las organizaciones de mujeres y los organismos internacionales.

El asistencialismo como política de desarrollo no funciona. Está demostrado que sin la incorporación consciente y decidida de la población beneficiaria de programas y proyectos no hay auto sostenimiento y continuidad de los procesos iniciados. Tampoco se generan las sinergías impulsoras hacia estadios superiores.

Las mujeres hemos estado presentes a lo largo del desarrollo de la humanidad. La historia universal rebosa de "grandes hombres" cuyas "grandes mujeres acompañantes" no aparecen en ella. La exclusión de las mujeres rurales de la toma de decisiones, del acceso a la tierra, del manejo de recursos, del acceso a créditos, a programas de formación y capacitación, del dominio de avances tecnológicos es un problema complejo, que amerita compromisos múltiples y radicales para ser superados.

Ninguna estrategia de desarrollo puede tener éxito sin la incorporación plena de las mujeres, y entre ellas las del área rural: las campesinas y las indígenas.

BIBLIOGRAFIA

Arce, Mariela y Junia Leonel. **Políticas Públicas desde las Mujeres.**

Una propuesta concertada en Panamá. Ceaspa. Panamá. 1996.

Bolaños, Vielka. **El Acceso de la Mujer a la Tierra en Panamá.** Ceaspa. 1995.

Contraloría General de la República. **Panamá en Cifras.** Panamá. 1990.

Davis Enriqueta. **Situación de las Mujeres Rurales en Panamá.**

Fundación para la Promoción de la Mujer/FAO. Panamá. 1994.

Dirección Nacional de la Mujer. **Informe Nacional Clara González.**

Situación de la Mujer en Panamá, 1996. UNFPA, UNESCO, PNUD. Panamá. 1997.

Elton, Charlotte. **Panamá: Evaluación de la Sostenibilidad Nacional.**

Serie: Panamá Hoy 7. Ceaspa. 1997.

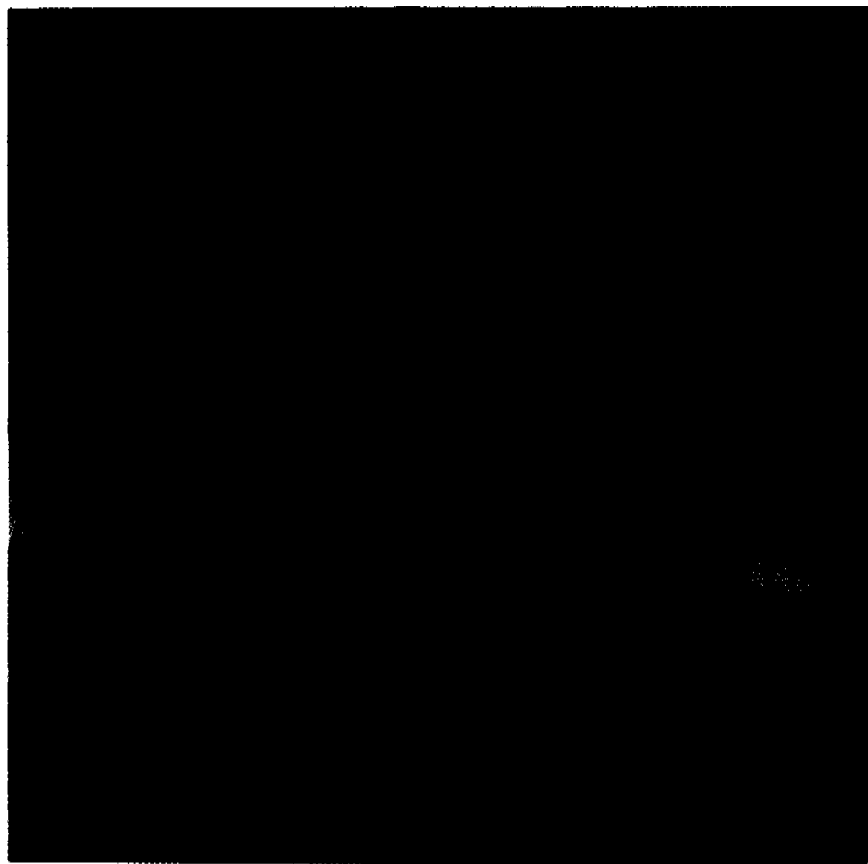
Foro Mujer y Desarrollo. **Plan Nacional Mujer y Desarrollo 1994-2000.** Panamá. 1993.

Fundación Arias. **El Acceso de la Mujer a la Tierra en Salvador.** San José. Octubre de 1992.

Fundación Arias. **El Acceso de la Mujer a la Tierra en Centroamérica. Memoria del Taller Centroamericano.** Costa Rica. 1996.

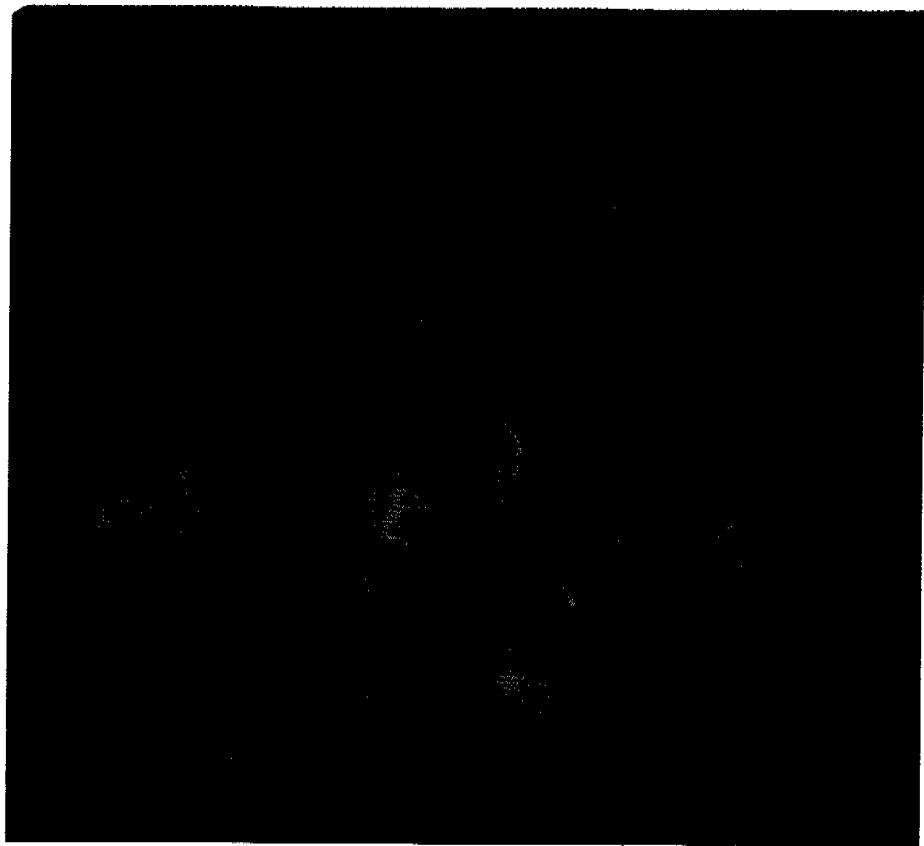
Lagarde, Marcela. **Género y Feminismo. Desarrollo Humano y Democracia.** Horas y Horas la Editorial. Madrid. 1996.

Mujer y Género: Potencial alternativo para los retos del nuevo milenio. Irene Pineda (Comp.). UCA. Managua. 1997.



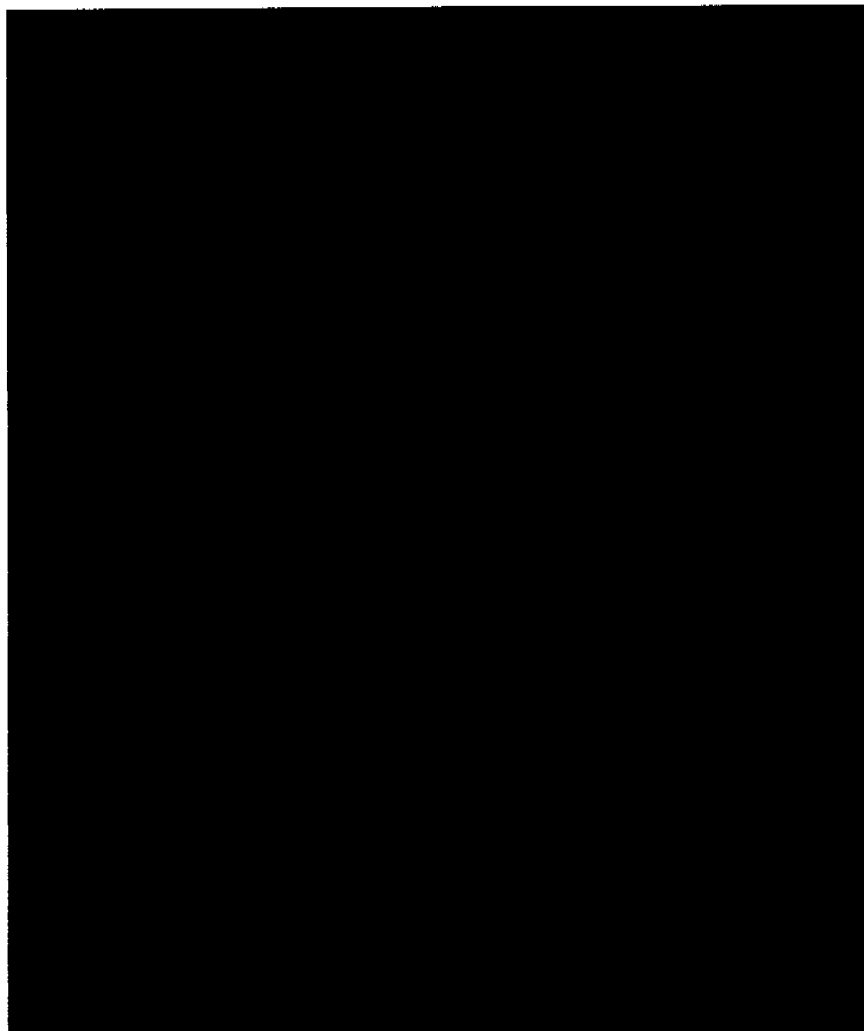
BOSQUES DE COLORES AL ATARDECER

**40» x 40»
Panamá, 1997**



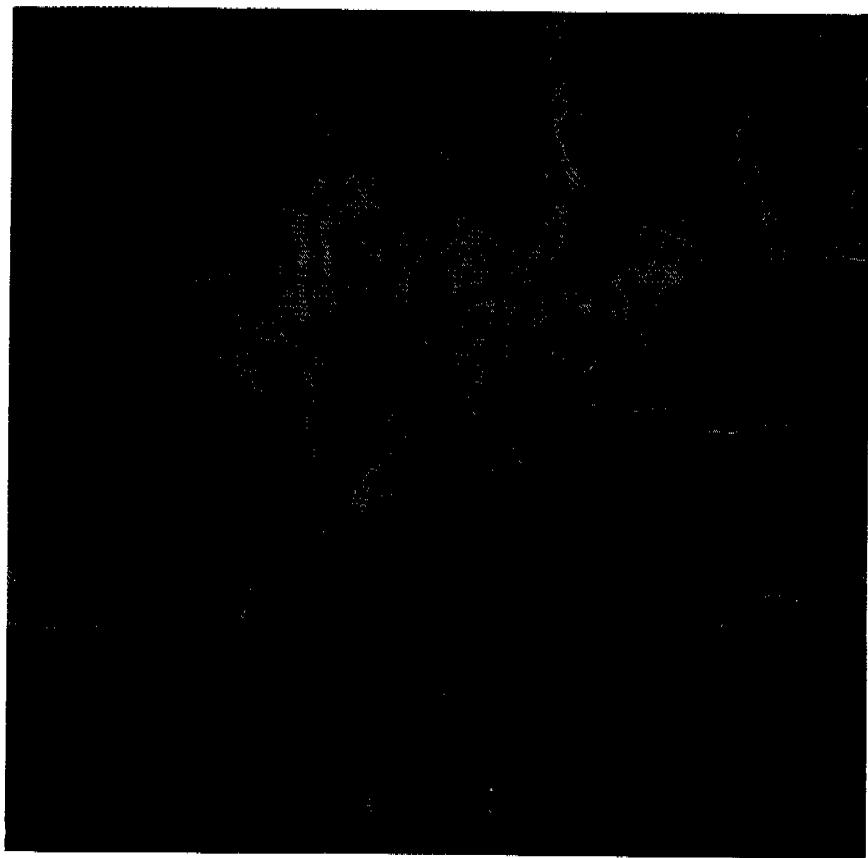
COLORES EN EL BOSQUE

**19» x 28»
Panamá, 1997**



LAGUNA ENTRE LOS CERROS

36" x 30"
Panamá, 1997



ÁRBOLES Y FLORES

50» x 50»

Panamá, 1997

Género y Relaciones Internacionales Contemporáneas

BRISEIDA ALLARD O.

Este año se cumple el cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expedida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. Sin lugar a dudas, la Declaración tuvo, entre otras, la importante función de familiarizar a los países con la noción de que el asunto de los derechos humanos no es exclusivo de la jurisdicción interna de los Estados, sino del interés general de la comunidad internacional.

No obstante las dificultades propias de la época en que surge, causadas principalmente por el conflicto Este-Oeste, la Declaración permitió establecer un conjunto de sistemas y de procedimientos a través de los cuales se pudieron introducir en la agenda internacional importantes problemas específicos de la condición femenina. Se pueden mencionar como logros de este periodo, la Convención para la Supresión del Tráfico de Personas y de la Explotación de la Prostitución (1949), el Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (1951), la Convención Internacional sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952), el Convenio sobre la protección de la maternidad (1955), el Convenio sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (1957), la Convención contra la discriminación en materia de educación (1960), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), entre otros.

Así, pues, en el marco de esta singular celebración es oportuno al menos apuntar algunas ideas en torno al impacto que las cuestiones

derivadas de los sistemas de género tienen en la sociedad internacional contemporánea.

No olvidemos que la perspectiva de género aporta una nueva manera de plantearse viejos problemas, modificando profundamente las líneas de búsqueda. Los interrogantes nuevos que surgen y las interpretaciones diferentes que se generan no sólo ponen en cuestión muchos de los postulados sobre el origen de la desigualdad y de sus modalidades actuales, sino que replantean la forma de entender o visualizar asuntos fundamentales de la organización social, económica y política, tanto a nivel nacional como internacional.

El poder es un referente esencial en la comprensión de la amplia temática del género. De ahí que el tema del poder constituya uno de los ejes fundamentales en torno al cual giran la discusión teórica, las propuestas estratégicas y las iniciativas concretas vinculadas al reconocimiento e incorporación de la perspectiva de género en el debate sobre las políticas estatales, la política exterior entre ellas.

Es necesario mejorar la capacidad negociadora de los actores nacionales en el proceso de toma de decisiones respecto al asunto del respeto de los derechos humanos y en el análisis de las políticas públicas panameñas con perspectiva de género en su conjunto y con referencia a su dimensión externa. Es imprescindible explorar, analizar y divulgar la cuestión de género, contribuyendo a su conocimiento mediante el debate abierto y plural de experiencias e ideas que apunten al tratamiento concertado de las múltiples dificultades derivadas de las formas de organización de los sistemas de género que hoy trascienden las fronteras nacionales. Este es uno de los retos más urgentes que plantea el nuevo milenio.

I

Los temas y prioridades que están ligados a la compleja relación entre género⁽¹⁾ y relaciones internacionales⁽²⁾ dan cuenta de la metamorfosis, profunda y sin precedente, que vive el mundo de nuestro tiempo. En esta oportunidad quiero acercarme a esta relación a través del eje de los derechos humanos.

Los derechos humanos aparecen a contrapelo de la razón de Estado.⁽³⁾ Y la primera figura de esta afirmación de la libertad contra el orden del Estado es, en nuestra civilización, una mujer. Más de cuatrocientos

años antes de Cristo, en Atenas, Sófocles pone en boca de Antígona la rebelión ante la ley, en nombre de un principio superior y ajeno a ella. Un edicto de Creonte, tirano de Tebas, ordena que no sea enterrado el cuerpo de uno de los hermanos de Antígona, Polineces, que vino a combatir contra su ciudad y fue muerto bajos sus muros. Así, como supremo ultraje que se inflige a un traidor, quien intente enterrarlo será ajusticiado. "Yo lo enterraré", afirma Antígona. "¿Voy contra la ley? Lo sé, pero obedezco otra ley que no lleva la fecha de hoy, ni la de ayer, y nadie sabe cuándo fue escrita". Antígona desafía al tirano no tanto por serlo: si la ciudad entera decidiese que no puede dar sepultura a su hermano, desafiaría a la ciudad. Lo hace porque dejarlo sin sepultura viola un derecho natural del que se siente portadora y que está por encima de las leyes. Las culpas de Polineces pertenecen a los hombres y a la política; el vínculo de sangre y de piedad hacia los muertos pertenece, por el contrario, a una ley no escrita que ninguno -comunidad o individuo- puede borrar.

Un hermoso ejemplo que la literatura universal nos provee para ilustrar el núcleo duro de los derechos humanos en la sociedad internacional contemporánea.

En efecto, este año los movimientos de mujeres europeos dedicaron la celebración del Día Internacional de la Mujer a las mujeres de Afganistán. Los actos contaron con el apoyo tanto de las Naciones Unidas como de la Unión Europea. Las consignas: ¡Una flor para las mujeres de Kabul! y ¡Derechos de las Mujeres son Derechos Humanos!, además de la denuncia y el compromiso que contienen, expresan la pretensión de estas organizaciones no gubernamentales de convertir la conculcación de los derechos de las mujeres afganas por el integrismo islámico del régimen de los Talibanes, en un tema de la agenda comunitaria europea.

No obstante, para el gobierno de Kabul la cuestión así planteada implica una intervención en los asuntos internos del Estado afgano; además, arguyen, una violación a sus tradiciones culturales.

La cuestión no es nueva. En una de las primeras conferencias internacionales sobre mujer y desarrollo (1976), la chispa que encendió el conflicto fue una sesión donde una antropóloga inglesa presentaba un trabajo sobre la mujer en el Islam, en una ponencia que incorporaba una crítica de la subordinación y confinamiento que la cultura islámica impone a las mujeres. ¿Qué derecho tiene una inglesa a criticar la cultura

islámica? ¿Qué derecho tiene, como extranjera, a penetrar la privacidad del velo? ¿Por qué nos tenemos que ocupar de la subordinación de la mujer, definida además a partir del modelo de sociedad moderna occidental?, se preguntaba un grupo de las presentes, expresando su desacuerdo. ⁽⁴⁾

Si bien es cierto que en los últimos años la concepción sobre los derechos humanos ha experimentado aceleradamente múltiples exigencias, comprometiendo en su debate y lucha aspectos antes no tomados en cuenta, lo cierto es que después de años de debates y diálogos el tema de la diversidad cultural y de los parámetros comparativos sigue estando en el centro de las discusiones sobre los derechos humanos. Fundamentalmente, lo que se mantiene en pie es la condición básica de estos derechos: ir a mano contraria a la razón de Estado. Y aquí se centra el problema principal en lo que atañe a la dimensión internacional de este asunto.

No son pocos los especialistas que, analizando las profundas transformaciones en las relaciones internacionales a partir del fin de la Guerra Fría, insisten en la creciente importancia adquirida por los llamados nuevos temas o temas globales de la agenda multilateral. Entre ellos son mencionados el ambiente, el narcotráfico, las migraciones, los conflictos étnicos y los derechos humanos.

Para el internacionalista mexicano Andrés Rozental, por ejemplo, si bien el carácter global de estos temas los hace elementos novedosos de las relaciones internacionales, a la vez "encierra el peligro del cuestionamiento irreflexivo de principios consagrados de las relaciones entre los Estados, como la soberanía y la no intervención en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados"⁽⁵⁾ Además, para este autor los nuevos temas tienden a concentrar la atención en detrimento de asuntos tan importantes como el de la promoción del desarrollo.

En realidad, el tema de los derechos no es un nuevo tema si tenemos en cuenta que en 1945 la Carta de las Naciones Unidas, en su preámbulo, asienta "la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y valor de la persona humana, en la igualdad de hombres y mujeres". El artículo 1.3 de la Carta, tomando en conjunto con los artículos 55 y 56 de la misma, establece el compromiso de emprender acciones para lograr el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y de las libertades básicas.

Es evidente que la Carta introdujo un nuevo elemento en las relaciones internacionales, una preocupación que se insertó desde entonces en la conciencia internacional sobre la necesidad de instituir y de proteger esos derechos por la vía internacional cuando el sistema nacional fuera deficiente en su protección. Posteriormente, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas expidió la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Sin duda, el orden internacional imperante dificultó un mejor y mayor despliegue de iniciativas y planteamientos reivindicativos en esta materia. Solamente recordemos los análisis ásperos y desencantados que generó la política de los derechos humanos promovida por el Presidente Carter a mediados de la década del setenta. Ante eso que un sector del pensamiento progresista llamó, de manera peyorativa, "el diseño redentor de Carter," se antepuso la concepción de los derechos de los pueblos.⁽⁶⁾

La profunda transformación de la sociedad internacional en los últimos años ciertamente ha otorgado una nueva dimensión a los derechos humanos, tanto en el plano de las relaciones internacionales como en el ámbito interno de los Estados.

En el plano internacional quizá el dato más relevante sea la erosión del Estado-nación. De acuerdo a Paul Kennedy, "durante las tensiones de la guerra fría, sin duda era fácil sostener que las amenazas al propio pueblo eran ante todo de naturaleza militar y que el Estado-nación seguía siendo el actor central de los asuntos mundiales... Sin embargo, ahora que la Guerra Fría ha acabado, muchos teóricos sostienen que las rivalidades militares y las carreras armamentistas están siendo sustituidas por rivalidades económicas, carreras tecnológicas y diversas formas de guerra comercial."⁽⁷⁾ Para Bergalli y Resta, "el concepto de soberanía, por lo menos aquel que se ha manejado en las ciencias políticas y jurídicas de la cultura occidental, si bien ha sido empleado con profusión en las aplicaciones de esos campos disciplinarios para el estudio de la historia y configuración de los países de Latinoamérica, lo cierto es que puede ser fácilmente contrastado con las realidades económicas y sociales de esos propios países."⁽⁸⁾

En otras palabras, la globalización implica una cierta cesión del control de un país sobre su propia moneda y política fiscal. Las grandes tendencias globales (relacionadas con el medio ambiente, el crecimiento demográfico y los avances tecnológicos), al ser transnacionales por

naturaleza y estar en gran medida fuera del control de las autoridades del Estado-nación, generan que conceptos básicos y principios del derecho público internacional clásico, como los de la soberanía y la no intervención, pierdan en buena medida su validez bajo el imperativo del Nuevo Orden Mundial.

En el ámbito interno de los Estados, ante la difusión universal de los valores de la democracia representativa, la reivindicación actual de los derechos humanos introduce un elemento ético frente al discurso democrático jurista, replanteando con gran vigor la cuestión de los fundamentos de la convivencia social y política. Por otra parte, en la mayor parte de la población hay una recepción cada vez más amplia de la visión de determinados derechos básicos, válidos en cualquier circunstancia, que responden a cualquier persona por el sólo hecho de existir.

En este contexto, numerosas organizaciones no gubernamentales de mujeres luchan para ampliar el espectro de las temáticas que proponen nuevos contenidos a lo que se entiende por derechos humanos. En este sentido, una de las temáticas más polémicas es la que surge en torno a la violencia contra las mujeres. Se ha intentado ir más allá de la tematización de la violencia contra las mujeres ejercida por agentes políticos (ya sea gubernamentales o no), como ha sucedido en países que han sufrido dictaduras, guerras civiles, etc. Así, se sostiene y demuestra que existen otras formas de violencia cuyo entorno son la familia y la comunidad, como, por ejemplo, la quema de viudas en la India, la mutilación genital a niñas en algunas regiones de Africa, y la violencia doméstica alrededor del mundo. La lucha es convertir estos "crímenes privados contra la mujer" en "crímenes públicos".

En este sentido es importante enfatizar cómo la Plataforma de Acción, producto de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en el tema sobre derechos humanos incluyó asuntos referidos a la violencia contra la mujer, al tráfico ilícito, a las mujeres desplazadas y refugiadas, a la violación como un instrumento deliberado de guerra y depuración étnica.

II

Ahora bien, las dificultades para convertir estos acuerdos en realidad son múltiples y muy serias. La razón básica es la dicotomía entre la telaraña de la interdependencia y globalización por un lado, y la fragmentación del sistema político internacional, por el otro.

Dicho de otra manera, aun cuando la categoría y las funciones del Estado hayan resultado erosionadas por las tendencias globales, éste continúa siendo la institución básica de la sociedad internacional, por tanto la razón de Estado continúa siendo el principal eje que articula el interés nacional. El Estado-nación continúa en el centro de las cosas, embarcado con los demás en un incesante forcejeo para sacar ventajas. Se entiende, entonces, que los Estados no estén interesados únicamente en la maximización del bienestar general, sino también y básicamente en su propia posición relativa dentro de los sistemas económicos y políticos internacionales.

Como ocurre con otros asuntos de la agenda multilateral, el manejo por parte de la sociedad internacional de las inequidades provocadas por los sistemas de género, consideradas como violaciones a los derechos humanos, demanda la cooperación y coordinación de una política internacional sin precedentes en estos asuntos. Sin precedentes porque las formas de cooperación que surgieron históricamente en el sistema internacional de Estados, fundamentalmente han estado relacionadas con la elaboración de reglas mínimas de coexistencia, creadas alrededor del reconocimiento mutuo de la soberanía y, consecuentemente, con la norma de la no intervención.

Hasta hace muy poco, el sistema internacional de Estado fue una especie de "asociación pragmática" que no encarnó ningún conjunto de propósitos comunes así como ninguna visión común del buen vivir.⁽⁹⁾ Por supuesto, este cuadro minimalista de la cooperación internacional ha sido modificado en las últimas décadas del siglo XX, mediante la expansión de la interdependencia económica, el crecimiento de instituciones internacionales y la firma de tratados que establecen derechos y deberes para los individuos en el derecho internacional. La sociedad internacional que empieza a dibujar -aunque tímidamente- sus contornos en medio de los escombros aún humeantes del orden anterior, se está conformando gracias a lo que se ha llamado la "tercera revolución industrial", adquiriendo valores políticos que parecen caracterizar a la sociedad posindustrial: democracia, derechos humanos, protección del ambiente, el desarme, la tolerancia, el desarrollo sostenible.

A pesar de ello, la estructura de los sistemas políticos y legales a nivel internacional sigue sustentándose, en gran medida, en la independencia y autonomía de Estados soberanos separados y en el pluralismo que esto conlleva.

En síntesis, pues, la década de los noventa es un tiempo de cambios radicales en los modos de organización de la vida individual y colectiva de las personas a nivel mundial. Entre los procesos sociales, económicos y culturales que actúan como telón de fondo de las transformaciones en marcha y los modelos que los inspiran aparecen la globalización y liberalización económica, el fin de los bloques ideológicos-militares, la hegemonía cultural de Occidente, el énfasis y afirmación de la individualidad, la pérdida de importancia de los colectivos sociales, entre otros. En medio de este marco todavía frágil y volátil, es preciso enfatizar la estrecha relación que parece existir entre la incorporación de nuevos temas a la agenda internacional y la creciente incorporación de mujeres a la vida pública, especialmente en su dimensión internacional, pues sin duda esa incorporación ha ido gestando paulatinamente una mayor visibilidad de situaciones que hasta hace pocas décadas eran consideradas de dominio privado y que hoy, más que nunca en la historia, concitan el interés de las fuerzas políticas mundiales. Probablemente, la Cumbre del Cairo (1994) sea la demostración más cercana y cierta de ello. ¿Qué otro aspecto podría ser considerado más privado que la sexualidad? Sin embargo, es uno de los asuntos humanos más debatidos en la política internacional de este final de siglo.

Por todo lo anterior, es importante entonces incentivar el intercambio de conocimientos y criterios para evaluar las manifestaciones globales del tema género en su contexto político, diplomático y multilateral.

Ermolao de Barbaro, el embajador veneciano de quien se dice fue el primer teórico de la práctica diplomática, escribía en los albores de la Europa moderna: "La primera obligación de un embajador es exactamente la misma que la de cualquier otro servidor del gobierno, esto es, hacer, decir, aconsejar y pensar todo lo que sirva mejor a la conservación y engrandecimiento de su propio Estado."⁽¹⁰⁾ Ojalá llegue el tiempo en que la conservación y engrandecimiento de los Estados pase por considerar y/o apropiarse de la necesidad de convertir los derechos humanos en asuntos clave para afianzar la paz y la seguridad internacionales. Para nosotras las mujeres no puede ser un debate más urgente.

NOTAS

- (1) Cuando hablamos de "género" nos referimos al conjunto de comportamientos y símbolos que le asigna una sociedad determinada a las mujeres y a los hombres a partir de su cuerpo sexuado femenino o masculino. El género es un modo de vida que se enseña y que se aprende. Los "sistemas de género" son los conjuntos interrelacionados de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran, a partir de la diferencia sexual anatómo-fisiológica, y que dan significado a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y, en general, al relacionamiento entre hombres y mujeres. Los sistemas de género constituyen un conjunto de arreglos por los cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos culturales que, generalmente, reproducen un orden social desigual entre hombres y mujeres. Se trata de arreglos que implican poder, dominación.
- (2) Con la expresión "relaciones internacionales" generalmente se abarca el conjunto de las relaciones sociales que configuran la sociedad internacional, tanto las de carácter político como las no políticas, sean económicas, culturales, humanitarias, religiosas, etc.: tanto las que se producen entre los Estados como las que tienen lugar entre otros actores de la sociedad internacional y entre éstos y los Estados.
- (3) El núcleo conceptual de la teoría de la razón de Estado consiste en la tesis según la cual el Estado, cualquiera sea su forma, es decir, su régimen y sus dimensiones, tiene una tendencia orgánica a buscar el continuo incremento y consolidación de su propia potencia o fuerza en detrimento de cualquier otra finalidad. Por tanto, al perseguir tal objetivo tiende irresistiblemente a usar los medios de la violencia más despiadada.
- (4) Elizabeth Jelin: *¿Ante, de, en, y? Mujeres, derechos humanos*; Red entre mujeres, Lima, 1993, p. 22.
- (5) Andrés Rozental: "Las Naciones Unidas y la nueva agenda multilateral", en VV.AA.: *Las Naciones Unidas hoy: visión de México*; F.C.E., 1994, p. 210.
- (6) CF. VV.AA.: *Carter y la lógica del imperialismo*, 2 tomos; EDUCA, Centroamérica, 1978.
- (7) Paul Kennedy: *Hacia el siglo XXI*; Plaza y Janés editores; Barcelona, 1993, p. 193.
- (8) Roberto Bergalli y Eligio Resta (comp): *Soberanía: un principio que se derrumba*. Aspectos metodológicos y jurídico-políticos; Paidós, Barcelona 1996, p. 205.
- (9) Andrew Hurrell, "El medio ambiente y las relaciones internacionales, una perspectiva mundial", en VV.AA.: *Medio Ambiental y Relaciones Internacionales*; Tercer Mundo Editores, Colombia, 1993.
- (10) Citado por Perry Anderson: *El Estado Absolutista*; Siglo XXI Editores. México, 1979, p. 33.

Violencia Contra La Mujer

GLADYS MILLER R.

Partimos del hecho objetivo ya demostrado de que a través de las sociedades del mundo existen estructuralmente desventajas económicas y sociales entre hombres y mujeres. La expresión de estas desventajas se reconocen como discriminación según el género.

Se entiende que esta discriminación data desde milenios y el concepto de género ha sido acuñado en los últimos años y es un aporte teórico intelectual de numerosas mujeres. El género es una categoría que hace relación a las estructuras socio-culturales y económicas. El sexo es una categoría biológica, es la que somos desde el punto de vista físico. Por consiguiente, el sexo es natural pero el género es construido.

En la práctica social, se construye cultural y socialmente cómo debe ser la mujer y cómo debe ser el hombre. La adscripción socio-cultural de hombre y mujer lleva a establecer una diferencia que se traduce en discriminación y desigualdades en derechos.

Respecto a las desventajas socio-económicas en la sociedad, es decir, la adquisición de bienes y servicios a beneficio de algunos en detrimento de las grandes mayorías, es oportuno señalar que tanto hombres como mujeres, presentan condiciones de grandes dificultades; no obstante, en ese conjunto de población, las mujeres tienen cuadros de mayor vulnerabilidad.

El análisis de la división social del desarrollo humano donde se identifican la vida familiar y la vida extrafamiliar ilustran claramente cómo la sociedad señala roles distintos para hombres y mujeres y cómo

esta conformación de roles propicia la desigualdad. El espacio familiar denominado "privado" se ha vinculado mayormente con la mujer porque se asocia al rol reproductor (natural). El espacio extrafamiliar o mundo público, se ha relacionado más con el hombre porque se concibe como un área de peligro, de retos y de seguridad que debe ofrecer el hombre a la mujer. La sociedad responsabiliza a los hombres de la adquisición de los bienes familiares (proveedor).

La evolución de la humanidad propiciada por diversos acontecimientos históricos: guerras, avances tecnológicos, revoluciones, ha permitido releer la concepción de vida de muchas poblaciones en el mundo. Sin embargo, las actitudes, valores y creencias internalizadas a través de las distintas instituciones socializadas, no han permitido que las transformaciones se presenten de igual manera y con la misma profundidad.

Por ello, ha sido necesario que organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, OEA, grupos feministas y de promoción de la mujer, organismos no gubernamentales, se pronuncien respecto a la necesidad de identificar, enfrentar y tomar medidas respecto a la visión discriminatoria entre hombres y mujeres en todas las sociedades del mundo.

El principio fundamental que movió a los organismos internacionales y a las organizaciones de mujeres, es que no podemos entender la justicia y la democracia en sociedades que desvaloran o discriminan a la mitad de su población. Y aun más, no se puede hablar de desarrollo, si los beneficios no alcanzan a ser compartidos por igual entre la población. Por consiguiente, uno de los indicadores para medir los niveles de desarrollo de un pueblo debe estar necesariamente asociado a conocer la condición de la mujer.

Por lo tanto, el conocimiento específico de la realidad de las mujeres, el develamiento de mitos, la relectura de la concepción familiar, social, relaciones de pareja, es fundamental para plantearnos una nueva forma de vida realmente democrática y justa para todos (as).

En ese examen de las situaciones, es necesario analizar el problema de la violencia contra la mujer como forma de discriminación y violación a los derechos humanos. La violencia que se expresa tanto en el mundo mal denominado "privado", es decir, la familia, como en el mundo público, es decir las relaciones sociales extra-familiares, (trabajo, comunidad, etc.)

La Violencia Contra la Mujer se expresa a dos niveles que, para facilitar su comprensión, se denominan: Violencia Social y Violencia Familiar. La primera se refiere a toda forma de discriminación contra la mujer en los aspectos de su vida pública; es decir, lo asociado a:

- Trabajo (Discriminación salarial, segregación ocupacional, hostigamiento sexual en el empleo).

- Participación Política (limitado o escaso acceso al poder y a la toma de decisiones en instituciones formales e informales),

- Educación (analfabetismo, estereotipos sexuales en la educación).

- Vivienda (limitaciones para la adquisición al crédito para la vivienda, entre otros).

- Salud (facilidades para los servicios de atención de salud-física y mental, la morbilidad materna, violencia institucionalizada).

- Los Medios de Comunicación (imagen estereotipada de la mujer, uso de la figura de la mujer como símbolo sexual).

Es importante señalar que las metodologías de captación de datos socio-económicos invisibilizan el aporte de la mujer.

Ello es una evidencia más de la discriminación social contra la mujer. Lo cierto es que a pesar de aquella limitación, todos los estudios acerca de la situación de la población en general en distintas áreas del desarrollo, demuestran que las mujeres cuentan con mayores desventajas respecto al hombre. Además, que el problema se agudiza en función del sector social y grupo étnico.

Algunos datos que ilustran la realidad de la violencia social contra la mujer expresan lo siguiente:

a. Aspectos Demográficos:

Según el censo de 1990 las mujeres representaron el 49.4% de la población total. Significa que las mujeres son la mitad de la población.

b. Participación Política:

A pesar de que las mujeres representan la mitad de la población, en los poderes del Estado, (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) su acceso es débilmente representado. En consecuencia, sus demandas no son atendidas. Tenemos por ejemplo que del total de 67 legisladores(as) que conforman la Asamblea, apenas el 7.4% está representado por mujeres.

En los otros órganos del Estado, el comportamiento es idéntico. Incluso hay instituciones del Estado donde la mujer no alcanza ningún tipo de posición decisoria o de influencia en la elaboración de las políticas públicas.

c. La Educación:

Si bien se encontró que , según los datos de participación educativa formal (universitaria), las mujeres superan en participación a los hombres, lo cierto es que la inserción en el empleo según la ocupación demuestra que ellas son peor pagadas, aunque se desempeñen en la misma ocupación que el compañero varón. Además, el analfabetismo, en especial en las poblaciones indígenas cuando se trata de las mujeres, es mayor.

Problemas asociados a la segregación ocupacional, el sexismo y estereotipos en los textos educativos son, a grosso modo, las formas más comunes de discriminación en el campo educativo contra este grupo humano.

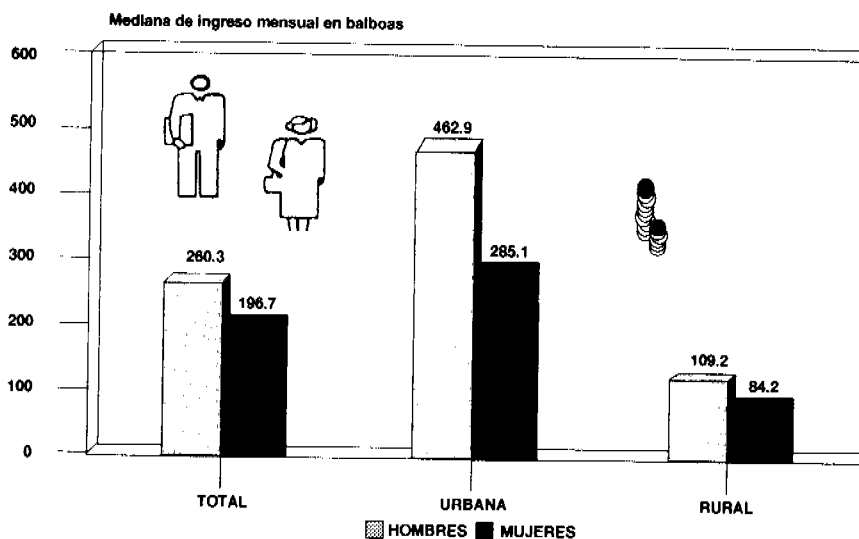
ch. Lo Laboral:

Asociados al nivel educativo, tenemos las ocupaciones. La PEA femenina para el año 1990 se calculó en 29%. Su crecimiento es vertiginoso, así como la condición de pobreza de los hogares compuestos por mujeres. La ubicación laboral está fuertemente representada en el sector de servicios y dentro de ésta en el área informal.

El ingreso de las mujeres es inferior al del hombre tal como lo ilustra el cuadro #1 que adjuntamos. El comportamiento continúa igual para los últimos años.

Los problemas más relevantes que afectan a la mujer y no al hombre es la doble jornada laboral (hogar y puesto de trabajo), el ingreso inferior, acoso sexual, limitaciones para su contratación por su función reproductora. Estas condiciones la localizan en los sectores más pobres del total de los habitantes, en especial, cuando es la única proveedora del hogar. Es importante resaltar aquí en lo laboral, la subestimación del trabajo que registran las estadísticas formales. En especial, nos referimos al aporte de trabajo en la mujer en el sector rural y al trabajo doméstico.

INGRESO PROMEDIO DE LOS JEFES DE HOGAR 1990



d. La Salud.

En este aspecto es importante resaltar el enfoque de salud que aún prevalece en las instituciones del sector, esto es la mujer como ente reproductor. Sin embargo, aun en este enfoque la atención es deficiente y de violencia. Prevalece la concepción de autoridad institucionalizada sobre las decisiones y respeto a la mujer. Ella se convierte en un ser pasivo, receptora de los servicios de salud. De ahí que la mujer se torna en un expediente numérico sujeto a exploraciones de tipo científico en menoscabo de la persona.

e. Los Medios de Comunicación:

Los medios como estructura educativa informal, refuerzan los estereotipos de hombre y de mujer que la sociedad erradamente ha asumido. El rol reproductor del conocimiento es perfectamente tratado en detrimento de la adecuada imagen de la mujer como ser humano a través de distintas vías: comerciales, telenovelas, programas seriales "enlatados", entre otros.

La Violencia Familiar, como otra forma de expresión de la discriminación contra la mujer se refuerza con las diversas modalidades

de violencia social descrita con anterioridad. La Violencia Doméstica o Familiar se especifica en los actos de agresión al interior de la familia por algunos de sus miembros. Esta condición limita la libertad, dignidad y desarrollo del otro (a).

Para el caso de las mujeres los estudios realizados al respecto, indican que en distintas fuentes de datos, hay un aumento de las denuncias por violencia doméstica. El aumento de las denuncias no significa que se trate de un problema actual sino que, la población, paulatinamente, se está aproximando a denunciar el problema que es y debe ser de interés comunitario.

Datos de la Policía Técnica Judicial revelaron que para el año 1991 se llevaron a cabo 294 crímenes, de ellos el 36% fueron contra mujeres y el 29% por su cónyuge. Hasta octubre de 1992 de los 245 homicidios registrados en la misma fuente, el 47% fue contra mujeres y el 35% se llevó a cabo en la familia (violencia doméstica).

El Instituto de Medicina Legal, por otro lado, reveló que el 95% de los casos de violación sexual que se reportan afectan a la mujer y a las niñas (1991).

En el Distrito de San Miguelito, de cada 100 denuncias por violaciones carnales, 71 son dirigidas a la mujer.

El Reforzamiento del Problema: Los Mitos

La reproducción de ideas por medio de creencias es un instrumento facilitador para alimentar la injusticia social, porque no permite el cuestionamiento de normas, principios y valores aceptados como verdad. Es así como se tejen un conjunto de expresiones, frases y "afirmaciones" que son reproducidas de generación en generación. Es de mucha importancia indicar que los mitos no son sólo ideas aceptadas por el común de las personas, es decir, aquellas que no cuentan, por diversas razones, con niveles de educación formal e informal. Las creencias forman parte de un conglomerado de hombres y mujeres indistintamente de la escolaridad, etnia, la religión e ideas políticas.

Se trata de procesos de internalización de conceptos o visión de las cosas, lo que hace necesario demostrar científicamente que no es cierto, por medio de un proceso de reeducación social. Esta condición pareciera presentarse desmotivadora para los que estamos convencidos de una transformación social, sin embargo, lo importante es observar lo obligado que resulta para un determinado período histórico de la humanidad, en-

tregar al grupo venidero una sociedad que se aproxime a la justicia e igualdad entre hombres y mujeres. Se parte de la convicción de que no sólo es posible, sino obligatorio y responsable ofrecer una sociedad mejor a las próximas generaciones. Por todo lo anterior, es necesario develar un conjunto de creencias que atentan contra la solución del problema a la violencia contra la mujer. Algunos de ellos señalan:

a. "La Mujer Maltratada Disfruta el Maltrato y es Masoquista".

Esta aseveración es tenida como verdad por especialistas y profesionales de distintas ramas del saber. Es reproducida al común de las personas. Pero, lo más peligroso es que es interpretada a las mujeres afectadas por el problema. Este mito es peligroso porque el mensaje es paralizar la acción de enfrentar el problema en la medida en que pretenda hacer ver a la propia mujer y el resto de la sociedad que ellas (las mujeres) disfrutaban al ser golpeadas; por consiguiente, no hay nada que hacer para solucionar el problema.

b. "Los Niños(as) Necesitan a su Padre aunque éste agrede a su mujer".

A la mujer se le ha enseñado que su principal rol es ser madre y esposa. Antes de esta condición la mujer es incompleta. Sólo un esposo, luego los hijos la convierten en persona.

De ahí que las mujeres en el afán de lograr ser personas, es decir, "ser completas", establecen relaciones que muchas veces no responden a sus reales intereses. Por otro lado, ella aprendió que la imagen del padre en el hogar es indispensable. Dos aspectos que es prudente resaltar en este mito:

1. la dependencia emocional y económica de la mujer hace que la presencia masculina perdure mayor tiempo;
2. la concepción de la necesidad de la presencia masculina en el hogar como símbolo de autoridad y respeto comunitario, postergan e inmovilizan a las mujeres de enfrentar los maltratos.

c. "La Mayoría de los Hombres de la Clase Económica "Baja" Maltratan más a sus mujeres que los de la clase Media".

Resulta básica la interpretación de este mito en la medida que evidencia un prejuicio respecto a la asociación de la población económicamente desventajosa con la agresión. Lo cierto es que las

actitudes de agresión están presentes en todos los seres humanos. En especial, para el caso de la relación hombre y mujer, la concepción del poder masculino sobre el femenino trasciende los niveles socio-económicos de la sociedad, tanto como las ideas religiosas, status profesionales, etc.

d. "La Violación no es posible entre parejas casadas o unidas".

Muchas mujeres piensan que el hecho de estar unidas a su pareja, es un aval para realizar relaciones sexuales. Ello porque las mujeres aprendieron que es un deber "servir" a sus maridos.

e. "Los asaltos sexuales ocurren entre extraños".

La literatura respecto al problema de violación ha demostrado no sólo que hay mujeres casadas obligadas a mantener relaciones sexuales con sus propios maridos, es decir, persona conocida, sino que las violaciones a niñas y adolescentes en la familia ocurren porque el agresor es otro miembro de la familia o persona conocida en el grupo.

Propuesta de las mujeres y organizaciones

Es necesario y justo reconocer que es sólo a partir de los movimientos de mujeres en general y los grupos feministas en particular, que el problema de discriminación de la mujer cobró algún nivel de reconocimiento social. La historia ha demostrado que es la población vulnerable la que toma la iniciativa de sus reivindicaciones. Las mujeres han hecho lo propio.

Desde esa perspectiva, las mujeres han logrado no sólo colocar en el tapete de discusión pública el problema de discriminación, violencia contra la mujer, sino que ello ha permitido que otros grupos discriminados se unan y planteen el problema y propuestas de solución.

Las mujeres a nivel mundial han logrado que la sociedad entienda que no se puede hablar de democracia, sin justicia entre hombres y mujeres. Se discute en el presente la necesidad de incorporar el problema de la Violencia Contra la Mujer como Violencia a los Derechos Humanos. Esto porque todo acto discriminatorio priva al ser humano de disfrutar de sus plenos derechos como ciudadano (a).

Por otro lado, las mujeres han propuesto a toda sociedad nuevas formas de liderazgos y de relaciones de poder, basados en el respeto, la participación conjunta de hombres y mujeres en los espacios públicos (la calle) y en lo intrafamiliar (el hogar). Se propone la división equitativa de derechos y deberes en la familia y en la sociedad mayor.

Las mujeres han provocado el reconocimiento de que el Machismo afecta al hombre en la medida en que lo "castra" de expresar emociones, y lo coloca a nivel de "super" hombre. Las consecuencias de ello son, entre otros, los niveles de frustraciones y complejos que resultan en hombres que no responden a las expectativas sociales. La discusión de estos aspectos facilita al hombre aceptar que es débil y a la vez fuerte tanto cuando lo es la mujer.

Se trata finalmente de proponer nuevas formas de relaciones humanas que rescaten valores de respeto y equidad entre el hombre y la mujer, reconociendo que las diferencias entre ambos no deben ser entendidas como desigualdades. Las diferencias enriquecen, ya que aportan aspectos más valiosos y completos para enfrentar la vida. Viva la diferencia, pero, con igualdad.

BIBLIOGRAFIA

Centro de estudios y Capacitación Familiar y Gladys Miller Ramírez. **Manual para Investigadores y Capacitadores en Materia de Violencia Contra la Mujer, la Infancia y la Familia.** CEFA/ red/ cladem, 1991, Panamá.

ISIS Internacional. **Proyecto Violencia en Contra de la Mujer en América Latina y el Caribe,** Chile ISIS/UNIFEM, 1989.

Lugo, Carmen. **Machismo y Violencia,** Revista Nueva Sociedad #78, Caracas, Venezuela , 1985, julio / agosto.

Mujer/ Fempress. **La Contraviolencia,** Boletín #21, enero 1988, Santiago, Chile.

Naciones Unidas, Asuntos Económicos y Sociales Internacionales. Boletín #9, **Sobre Prevención del Delito y Justicia Penal,** diciembre 1983, pág.4.

Oficina de Planificación, Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, **Documento sobre la Participación de la Mujer en el Mercado Laboral,** 1992. Panamá.

Violencia Contra la Mujer: Pasos a su Erradicación en Panamá

ROSINA PÉREZ BERMÚDEZ

Actualmente el tema de la violencia ocupa uno de los principales espacios de los foros de discusión, toda vez que es un fenómeno que afecta a la población mundial sin ningún tipo de exclusión. Por lo que se hace necesario entrar en este debate desde todos los espacios posibles, y en el caso de las mujeres, se trata de una adhesión obligante, ya que ella es una de las principales víctimas, tanto en su vida pública como privada.

Desde lo público es evidente que aun en nuestros días, la mujer se enfrenta a diario ante una sociedad que permanentemente soslaya derechos que le son propios por naturaleza, por su condición de humana, tales son los casos en que la misma es discriminada por razón de su sexo, como por ejemplo, cuando ocupa cargos de igual jerarquía que un hombre, pero recibe un salario menor que éste.

Y no sólo se le discrimina en lo laboral sino que también se le valora en un segundo orden en relaciones civiles, comerciales y se le dificulta entrar en la política y formar parte de la estructura de poder, en cargos de alta jerarquía, tanto en el sector estatal como el privado.

Existen situaciones en las que materialmente podemos palpar la violencia que se ejerce contra la mujer; nos referimos a aquellas agresiones que afectan directamente su integridad física y psicológica. Esto lo podemos observar desde dos aspectos: la violencia sexual y la violencia intrafamiliar.

En el caso de la violencia sexual, está de más señalar que la mujer es una de sus principales víctimas y que situaciones tales como las violaciones carnales, son hechos que aun logrando sancionar al agresor, no podemos impedir que la mujer tenga como consecuencia traumas y afecciones que quizás en un momento dado puedan ser minimizadas, pero que difícilmente podrán ser olvidadas.

Por otro lado, está una forma de violencia que afecta a todos los sectores de la sociedad, y cuyos efectos inciden en el grupo de las mujeres; la clase de violencia a la que nos referimos es la que ocurre día a día y que cada vez se adscribe a más personas; se trata de la violencia intrafamiliar.

Para nadie es secreto que una de sus principales víctimas son las mujeres, y es por ello que luego de revisar de una forma muy genérica algunos elementos relacionados con las distintas formas de violencia que enfrenta la mujer, a continuación haremos algunas anotaciones sobre lo que ocurre en nuestro país en relación a la violencia intrafamiliar, específicamente desde el punto de vista jurídico. Es así como relataremos algunos antecedentes de cómo hoy día contamos con la Ley que permite sancionar este tipo de violencia y presentaremos sus principales características, así como algunas limitaciones de la misma para, entonces, valorar sus avances y poder indicar algunas conclusiones para su mayor y mejor efectividad y aplicabilidad.

Nos detenemos en este tema porque está de más señalar la importancia de que reviste este instrumento jurídico favorable a todas sus víctimas y que siempre merece un lugar para su discusión y divulgación.

Algunos antecedentes sobre Violencia Intrafamiliar y su regulación en Panamá.

En nuestro país la violencia intrafamiliar no sale a la luz pública ahora, sino que tiene algunos antecedentes que vale la pena rescatar en este momento.

Si bien a nivel mundial se pueden acotar una serie de datos para captar lo que han sido los antecedentes y los esfuerzos que se han sucedido en miras a erradicar la violencia intrafamiliar, situación que en épocas anteriores fue un hecho amparado y legitimizado por el mismo sistema social y jurídico, sólo nos referimos a algunos datos de carácter nacional para que en la lectura de este documento se tengan algunas nociones que nos permitan entender en todo su contexto este asunto.

Es así que a mediados de los 80 se realizan algunas investigaciones como: *Estudio exploratorio sobre el maltrato físico de que es víctima la mujer panameña*, y *Mujer y Victimización*, lecturas que empiezan a dar los primeros pasos hacia el análisis de esta temática en nuestro país.

En este momento también surgen algunos organismos no gubernamentales de atención a mujeres maltratadas, en especial cabe resaltar, que en 1991 se conforma la red no gubernamental contra la violencia dirigida a la mujer y la familia.

De esta forma es que través de distintos mecanismos, básicamente el sector de la sociedad civil realiza primero que todo, un trabajo de sensibilización, capacitación y divulgación para trabajar el problema de la violencia intrafamiliar.

En 1994, se realiza un trabajo en conjunto por parte de los organismos no gubernamentales y el Ministerio Público y luego de una serie de discusiones se elabora el ante-proyecto de Ley que entraría a la Asamblea Legislativa para ser debatido. Cabe señalar que a pesar de existir un nivel de aceptación por parte de la ciudadanía en general sobre la gravedad de la problemática, al momento de discutirse esta Ley los grupos de mujeres tuvieron que ejercer una fuerte presión para finalmente obtener su aprobación.

Contenido de la Ley 27, por medio de la cual se crea el delito de violencia Intrafamiliar.

La Ley 27 como bien sabemos, no sólo se refiere al tema de la violencia intrafamiliar, sino que crea el delito de maltrato de menores y además modifica algunos artículos del código Penal y Procesal, relativos a los delitos sexuales, que también son delitos a través de los cuales se ejerce un tipo de violencia contra las mujeres, no obstante sólo haremos referencia al contenido de la Ley directamente relacionado con la violencia intrafamiliar.

Partimos del primer párrafo del artículo 215-A que tipifica, es decir, que señala qué es el delito de violencia intrafamiliar cuando dice:

"El miembro de una familia que agrede física o psicológicamente a otro miembro, será sancionado con 6 meses a 1 año de prisión, o con medida de seguridad curativa, o con ambas....."

De lo anterior podemos deducir, que aquella agresión física o psicológica que realiza un/a miembro/a de la familia a otro/a miembro/a de la familia será violencia intrafamiliar; entonces todo tipo de actuación que

afecte o cause daño, como por ejemplo, golpes, gritos, insultos, en fin cualquier tipo de lesión, será un delito.

Es importante destacar que nos encontramos ante un delito tipificado con la suficiente amplitud puesto que la violencia intrafamiliar tiene diversas formas de producirse y esto permite que siempre la víctima pueda denunciar la agresión cualquiera que sea el nivel de gravedad de la misma.

La ley penal expresa claramente quiénes podrán ser parte de la relación víctima/ agresor (a) cuando establece que serán considerados como miembros de una familia las personas unidas por el vínculo del parentesco o matrimonio, y quienes convivan con ellos de manera permanente. Se excluyen aquellas personas con quienes la convivencia se basa en relaciones de carácter contractual (vg. domésticas/os, jardineros/as, entre otros.)

El delito de violencia intrafamiliar puede ser agravado por lo que cualquier hecho lesivo que produzca el debilitamiento permanente de un sentido o de un órgano, daño corporal o síquico incurable, pérdida de un sentido o un órgano, entre otras, traerá, como consecuencia un aumento de la sanción. (ver Art. 215 B del Código Penal Panameño)

Otro de los artículos de importancia es el que se refiere a la obligatoriedad de los funcionarios públicos y privados de poner en conocimiento a las autoridades cuando conozcan de algún caso de violencia intrafamiliar o maltrato de menores. Al incumplirse con esta obligación, se impondrá una sanción de 50 a 150 días multa.

Lo interesante de este artículo es que a través del mismo se logra ir involucrando a la comunidad para hacer que estos hechos violentos puedan ser repelidos y de esta forma se hace social y pública una problemática que en otrora se consideraba un asunto privado donde "nadie se debe meter".

Además debemos resaltar que la misma Ley le da seguridad a la persona que pone en conocimiento de algún caso que no existirá responsabilidad legal alguna por razón de la denuncia. Lo cierto es que hay que incentivar a la población para que cumpla con este mandato, pues en todo caso es mejor prevenir, o detener un mal menor, que lamentarnos de la gravedad de un hecho cuando en muchas ocasiones los daños son irreparables.

En su capítulo tercero la Ley 27 crea las Unidades Especializadas para la Atención de víctimas del maltrato y violencia intrafamiliar, que

serán centros especializados de atención que funcionarán 24 horas, todos los días del año y que además deberán contar con personal idóneo de la rama de la medicina así como trabajadores sociales y serán provistos de unidades de protección policial. (ver artículo 23 de la Ley 27 de 1995).

En la actualidad estos centros no existen toda vez que no existe presupuesto para los mismos, no obstante, en relación a la atención de víctimas, es importante hacer mención que la Ley prevee que los centros médicos, hospitales, clínicas y consultorios, públicos y privados, en sus horarios regulares deberán atender los casos de violencia intrafamiliar y maltrato de menores. Además de que se obligan en todos los casos a llenar el formulario distribuido por el Ministerio de Salud, que contiene entre otras, informaciones sobre el historial clínico, diagnóstico e incapacidades de las víctimas y dicho formulario deberá ser enviado al Instituto de Medicina Legal para luego ser remitido al Ministerio Público.

Logros a partir de la aprobación de la "Ley 27".

Entre los principales avances podemos numerar los siguientes:

1. Existe una normativa penal que determina que la violencia intrafamiliar es un delito.
2. Muchas víctimas luego de tener conocimiento de la existencia de esta ley, se han atrevido a presentar las denuncias respectivas.
3. Existe un mayor nivel de conciencia en la comunidad con respecto al problema de la violencia intrafamiliar.

Limitaciones.

Entre algunas de las principales limitaciones que podemos señalar están:

1. La falta de presupuesto para hacer realidad y por tanto efectivas las Unidades Especializadas de Atención a las Víctimas de la Violencia Intrafamiliar y Maltrato de Menores, puesto que urge que las mismas sean establecidas a fin de que cumplan con las funciones que la propia Ley les delega.
2. Se requiere de más programa de divulgación de esta Ley.
3. Se necesita mayor capacitación a las autoridades y al personal relacionado con la atención de los casos de violencia intrafamiliar.

CONCLUSIONES

Primero que todo requerimos que se ponga en práctica en su totalidad toda la normativa que regula la violencia intrafamiliar descrita en el artículo de la Ley 27.

Por otro lado, luego de casi tres años de su aprobación se puede observar que la Ley empieza a tener sus efectos positivos en nuestra sociedad pero que también requiere de algunas modificaciones entre las cuales podemos mencionar: la conclusión expresa de las uniones de hecho como relaciones familiares que pueden constituirse en violencia intrafamiliar; la fijación de medidas preventivas y de seguridad específicas a los casos de violencia intrafamiliar, (como por ejemplo, el desalojo de la persona agresora).

Para finalizar queremos insistir que si bien hoy día las mujeres hemos logrado a través de un gran esfuerzo que se empiecen a respetar una serie de derechos que nos eran negados, y que contamos, en el caso de Panamá, con estructuras como el Ministerio de la Mujer, la Familia, la Juventud, el Instituto de la Mujer; la ejecución de un Plan en conjunto por la Sociedad Civil y el Estado, la aprobación de las leyes justas, equitativas y reivindicativas del género femenino, tenemos que reconocer que estamos construyendo una verdadera cultura democrática, tanto para hombres y mujeres, no obstante no debemos detener el paso porque aún queda mucho por hacer no sólo por el bienestar de un sexo, sino para satisfacer a toda una comunidad, toda una ciudadanía, todo un país que sobre todo ahora, frente a la llegada del nuevo milenio, nos exige dar pasos firmes, frente a los nuevos retos, que sólo serán conseguidos en un ambiente de paz y libre de todo tipo de violencia.

Específicamente en cuanto al asunto de la violencia intrafamiliar a diferencia de lo que la tradición ha querido imponer, tenemos que reconocer que ésta es una problemática de carácter público y eminentemente social, por lo tanto se requiere de un tratamiento no sólo a nivel de las personas que sufren directamente las consecuencias de este mal, sino que todas y cada una de las personas debemos involucrarnos y tratar de informarnos por lo menos del contenido de la Ley, para que así podamos aportar y contribuir a erradicar esta forma de violencia que en muchos casos, ha cobrado la vida de mujeres, niños y niñas, entre otras, y que muy tarde descubrimos que se trataba de situaciones en las que si nos hubiéramos interesado o que si hubiésemos tenido conocimiento de qué hacer o a dónde ir, otros hubieran sido los resultados.

Por lo tanto cada ciudadano y ciudadana de este país, tenemos por un lado la obligatoriedad de denunciar la violencia intrafamiliar y el maltrato de menores, y no convertimos en agresores/as y por el otro, el deber de exigirle a las autoridades y al Estado que se tomen todas las medidas necesarias y que se creen políticas públicas a fin de por lo menos minimizar la violencia intrafamiliar que ocurre en los hogares panameños, en miras a construir una cultura democrática de paz en la que finalmente este mal sea erradicado de nuestras vidas.

BIBLIOGRAFIA

- ANTONY, Carmen y MILLER, Gladys. **Estudio Exploratorio sobre el maltrato físico de que es víctima la Mujer Panameña.** Imprenta Universitaria. Instituto de Criminología. Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Panamá. 1986.
- ANTONY, Carmen. **Mujer y Victimización. Estudio Penal-criminológico sobre algunos delitos sexuales.** Imprenta Universitaria. Universidad de Panamá. Instituto de Criminología. Panamá. 1990.
- Ley 27 de 16 de junio de 1995. Por la cual se tipifican los delitos de violencia intrafamiliar y el maltrato de menores, se ordena el establecimiento de dependencias especializadas para la atención de las víctimas de estos delitos, se reforman y adicionan artículos al Código Penal y Judicial, y se adoptan otras medidas". G O N° 22.811 de 23 de junio de 1995.
- PEREZ BERMUDEZ, Rosina M., **La mujer como sujeto pasivo en los delitos contra la vida y la libertad sexual.** Trabajo de Graduación. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá. Panamá. 1997.
- PEREZ, BERMUDEZ, Rosina M., **Revisión de antecedentes de la violencia intrafamiliar en Panamá y análisis crítico de la Ley 27.** Panamá. 1995.
- Balance de la Ley sobre violencia intrafamiliar. Red Nacional contra la violencia a la mujer y la familia.

Cuando Reinaron las Diosas

AGATHA WILLIAMS

La mitología es la reflexión histórica que recrea el origen de la plenitud del ser, el estallido de la energía cósmica que es la estructura fundamental de la vida.

El mito nos permite renovar en el espacio y el tiempo el origen de esa energía viviente, por lo que hablamos del tiempo primigenio.

El mito de la Diosa Madre ha sido venerado desde hace miles de años, su imagen aparece muy temprano en el Paleolítico en numerosas estatuillas talladas en granito, mármol y huesos, sus escultores la concibieron casi siempre en estado de gestación, procreadoras y guardianas de la vida, cultoras de las semillas, pioneras de la agricultura y cuidadoras sempiternas del fuego sagrado.

En este sentido son bellos modelos la Diosa de Lespugue, esculpida en mármol encontrada en las faldas de los Pirineos y en Austria, la Diosa de Willendorf 20,000 - 1,800 A. C. hermosa imagen de la fecundidad y símbolo permanente de la continuidad de la vida, magia sublime de la maternidad, esencia misma de la existencia humana.

El mito de la Diosa Madre es un símbolo que inspira y recrea un universo orgánico, viviente, sagrado y único.

La Madre Tierra y todas las especies vivientes que la habitan participan del hecho de ser hijos de ella. "La Tierra es madre de todos los seres que proceden de sus entrañas" (**Himnos Homéricos** 30, 1-2). Este

entramado no es más que una red cósmica en la que todos los seres mantienen una íntima relación al participar de la santidad del vínculo primario que es fuente inicial de la vida, la madre.

La Humanidad ha sido parte integral del género femenino.

En la historia presente sin embargo el mito de la Diosa Madre no encuentra sus raíces, aparece desgarrada de sus orígenes, sepultada en el olvido, excepción hecha de la Virgen María, Madre de los Cielos que rescata la imagen de la deidad femenina en la versión católica de la cristiandad.

Todo sugiere que la Diosa Madre, Señora de la Tierra y de toda la creación fue destruida a partir de la concepción androcéntrica del Mito Divino. La Tierra era su epifanía. La divinidad femenina era immanente a la Creación.

Las imágenes míticas son símbolos que gobiernan nuestra cultura, se traducen en valores, actitudes y sensaciones.

Nuestra percepción de la imagen mítica de la Tierra, Gea, origen de la vida ha perdido su profunda dimensión, lo cual ha trascendido hasta distorsionar el valor del principio femenino en nuestra sociedad.

Hoy es evidente la desacralización de la naturaleza en donde la Tierra no es instintivamente concebida como ser viviente como lo fue en épocas pasadas. Esa desacralización importa una desnaturalización que en términos cotidianos quiere decir deforestación; polución o contaminación que quieren significar la profanación de lo sagrado.

Esta pérdida de símbolos fundamentales ha llevado quizás a la Humanidad al extremo de poner en peligro la existencia de nuestro propio planeta.

La Diosa Madre: la Tierra fue venerada también en el Neolítico, período de grandes transformaciones en el orden tecnológicos y en el de la producción de los bienes. Los artefactos arqueológicos hacen pensar que fue reverenciada como deidad suprema.

Ella proveía no solamente la vida humana sino también la provisión de alimentos. Para algunos antropólogos la temprana agricultura nació alrededor de templos dedicados a la Diosa Madre que luego llegaron a ser centros de gran actividad económica y social que sentaron los gérmenes embrionarios de futuras ciudades.

La Diosa Madre emerge como una deidad antiquísima según las fuentes más variadas: papiros, bobliotecas, museos, tabletas. Leyendas antiguas utilizadas como rituales dramáticos, oraciones, festivales con una clara personificación de las deidades femeninas.

La veneración de la Diosa Madre se extendió con mucho vigor hasta el Neolítico en el Cercano y Medio Oriente, en regiones de Checoslovaquia, Vestonice aparecen estatuillas de Venus horneadas al fuego y en Shanidar al norte del Tigris se han encontrado cementerios que datan del 9,000 A. de C. período claramente Pre-Neolítico; estas figurinas o estatuillas representan la Diosa Madre o Madre Tierra, manchadas de pintura "color ocre", claro simbolismo que representa la vida.

James Melfoort, hoy Director Asistente del Instituto Británico de Arqueología en Ankara describe las culturas Proto-Neolítico del Cercano Oriente que datan del 9,000 - 7,000 A. C. "períodos en que el arte se manifiesta en la escultura de animales y de deidades supremas que encarnan indudablemente las Diosas Madres".

Desde que se empezó a concebir como una divinidad de fuerza incontrolable se hizo posible el tránsito a su conquista por medio del orden: un Dios masculino, destruyéndose así el concepto de unidad y equidad. Hoy concebimos lo masculino y lo femenino como fuerzas polarizadas en constante oposición: Humanidad y Naturaleza (Anne Baring y Jules Cashford, **The Myth of the Goddess: Evolution of an Image**, 1993).

La historia enseña desde hace mucho que el paradigma creado por la mitología babilónica pone en contrapunto "El Espíritu Creativo y la Naturaleza Caótica" concepto que llega a separar el cuerpo del alma, asumimos la diferencia cualitativa entre espíritu y la materia, separamos percepción y pensamiento, preconcebimos la diferencia entre el mundo espiritual y el mundo físico, entre razón e instinto.

Estos dualismos nos llegan a situar el plano espiritual como superior al plano físico. Elementos difíciles de reconciliar que para lograrlo, vaya de por medio la disolución de ambos.

Por miles de años ha sobrevivido el principio femenino expresado en la historia mitológica a través de la figura de las divinidades femeninas y en la historia cultural en un sistema de valores que encarnan la espontaneidad, el sentimiento, el intelecto y también la intuición que hemos ido perdiendo como elemento de nuestra unidad y espiritualidad, expresiones válidas de la vida misma.

En la mitología judeo-cristiana desaparece casi por completo la dimensión femenina de la divinidad, nuestra cultura en lo particular está estructurada en la imagen de un Dios Masculino, concebido más allá de toda creación.

Las consecuencias inevitables son un desbalance entre el concepto femenino y el concepto masculino, lo cual trasciende en la formación de principios fundamentales sobre cómo percibimos nuestro universo.

El mito de la divinidad femenina ha sido desvalorizado, no ha desaparecido por arte de magia, su destrucción fue sistemática, pero sobrevive disfrazado en imágenes que no pudieron expresarse con vitalidad y espontaneidad, en especial en la cultura judeo-cristiana. En la mitología griega, por ejemplo, Zeus se casa con las antiguas diosas madres quienes gobernaban al mundo de la fertilidad, el alumbramiento y de la transformación espiritual; a pesar de ello fueron subordinadas al Dios Padre, debían responder ante él. Pero en la mitología hebrea la Diosa pasó a formar parte de un submundo, subsumido en el mundo caótico, del Leviathán.

Reaparecieron las deidades en Artasté, diosa de la fertilidad muy venerada en el Cercano Oriente bajo innumerables formas. Se hace necesario nombrar a "Nammu" diosa del océano o del mar, se le rindió culto por milenios en el Sumer, cuyo ideograma representa el mar que para los sumerios, era fuente primegenia de toda creación, quien dio vida a la Montaña Cósmica, la Tierra Ki y al aire Enlil.

En Mesopotamia, afirman los teóricos, "la fuente de la vida radica en un principio femenino y la vida es gestada por una diosa y el universo es concebido, no creado".

Inana-Ishtar es una de las deidades más jóvenes, pero a su vez es la Gran Madre, trasciende mucho más que un mito, encarna al Cielo y la Tierra, la Vida y la Muerte. Este rol se proyecta en otras divinidades de la Edad de Bronce - Isis y Cibeles. Su veneración tiene un profundo sentido en el desarrollo de las sociedades matrilineales y matriarcales, donde la línea de filiación pasaba de madres a hijas, como era común en muchas sociedades llamadas primitivas. Son divinidades lunares, luz y oscuridad, principio y fin, vida y muerte.

Aun en Grecia y Roma clásica, no solamente el linaje era femenino sino además la obtención de títulos, propiedades y derechos territoriales pasaron a través de la línea femenina para ser retenidos dentro del clan familiar.

Sofía y Atenea, poseedoras de la sabiduría, cualidad suprema del ser. Eva, humana y maldecida resalta en importancia como madre de todos los mortales; fatalmente inculpada y salida de la costilla de Adán, lo persuade a desobedecer la Ley Divina al rebelarse y comer del Arbol de la Ciencia. La rebelión en la historia de la humanidad en busca de su propio destino "Consumatum est", culpabilidad impuesta a Eva para vergüenza de su género desplaza sentimientos de culpabilidad acumulados durante milenios.

Eva, compañera de Adán, progenitora de la humanidad, fue tentada por la pérfida serpiente, otrora símbolo de sabiduría, en un abierto desafío a Dios y conminó a Adán a seguir sus pasos.

Arruinó sus vidas al ser expulsados del Jardín del Edén. "Tu pena será multiplicada en el alumbramiento de tus hijos y desearás a tu esposo quien te gobernará (Génesis 3-16).

La leyenda sobre la pérdida del Paraíso Terrenal ha sido, según los profetas del Nuevo Testamento, utilizada para probar la inferioridad de la mujer. Joseph Campbell, mitólogo, citando a W. Schmidt en **Mitología Primitiva** nos dice: "Como en las culturas tempranas las mujeres se mostraron como seres supremos porque no sólo engendraron los hijos, fueron a su vez principales productoras de alimentos. Advirtieron que era posible cultivar y además cosechar y juntos hicieron valiosa la Tierra siendo así sus poseedoras".

Desde los albores de la humanidad las diosas gobernaron solas según las primeras observaciones, luego un hijo o consorte compartió su reinado según los mitos de cada región. Así aparece en la leyenda griega Afrodita, diosa del amor y la sensualidad, según su origen griego, pertenece a la misma estructura de la Creación, es la hija del Cielo y la Tierra, representa su separación. Su fertilidad simboliza el renacimiento de la virginidad y la primavera como estación en que se renueva la virginidad de la tierra. En el simbolismo pre-cristiano de Anatolia y después Roma, reaparece en los rituales de Cibeles, Diosa de la fertilidad, representa la Tierra y la vida silvestre.

En los **Himnos Homéricos** se le canta como a la madre de todos los dioses.

El tránsito de las divinidades femeninas a un segundo plano es inherente a la aparición y desarrollo de las sociedades patriarcales.

En el Oriente Próximo, cuando la sociedad construye una religión cuyas divinidades simbolizan la continuidad de la vida y la reproducción

de la especie se sitúa en la cúspide del panteón a Astarté en Egipto, Isis, deidad suprema de la teogonía, Diosa Madre, primera entre diosas y dioses, es fundamental en las estructuras de una sociedad que según muchos egiptólogos fue desde sus inicios matrilineal y matriarcal, ninguna divinidad masculina rivaliza con su poder y naturaleza.

Deméter, diosa de la agricultura, representa la prosperidad de la Madre Tierra, Minerva y Atenea la sabiduría y el conocimiento cuyos dominios son asumidos por Dionisio y Baco, dioses en los cuales la primavera se trueca en arrebató y expansión del desenfreno vital, período en que la naturaleza es hermosa y exuberante en sus flores y frutos, se excede en prodigalidad para el hombre.

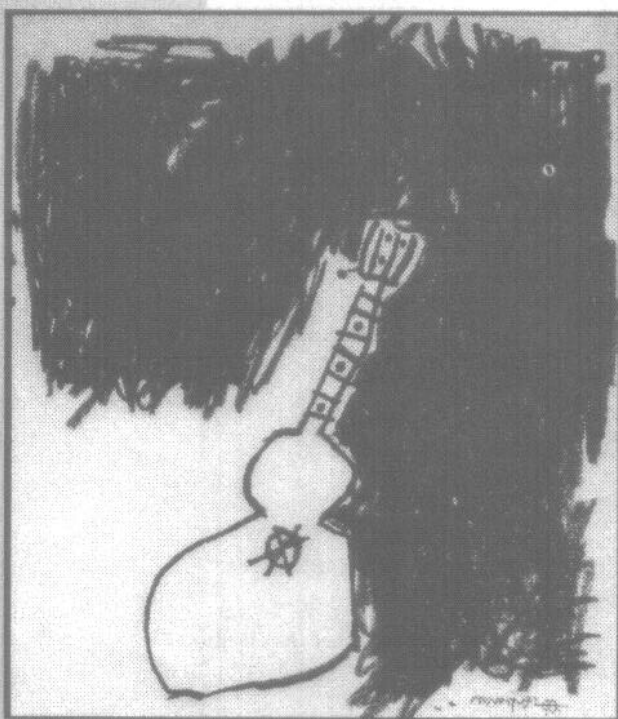
Etapas de renacimiento y esplendor de renovación y cambio, valores atribuidos anteriormente a Deméter y Ceres. La Madre Naturaleza se recoge y medita en épocas de soledad y tristeza traducidos en la nostalgia otoñal y el silencio del frío invernal.

Las diosas tuvieron un reinado especial cuyos baluartes sustanciales fueron la Vida y la Sabiduría: Minerva y Atenea no disputaron la voluntad a los dioses representantes del poder entendido desde la visión de la fuerza física y del dominio y control del espacio, pues fueron ellas madres y maestras.

BIBLIOGRAFÍA

- Baring, Anne y Cashford Jules **The Myth of the Goddess: Evolution of an Image**. Arkana, Penguin Books. London. 1993.
- Graves, Robert **Los Mitos Griegos**. Editorial Akal. Madrid. 1995.
- Pagels, Elaine **Adam, Eve and The Serpent**. Vintage Books. New York. 1989.
- Stone, Merlin **When God Was a Woman**. Barnes and Noble. Books. New Yorks. 1993.

Libros Recibidos

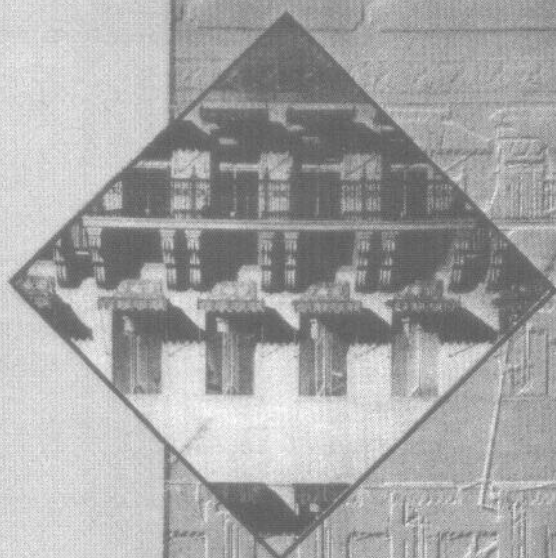


Porfirio
Salazar

.....

Guitarra
de Fe

CCM
COLECCIÓN
CLASICOS
MUSICALES



Felix Armando
Quirós Tejeira

La ciudad calla



COLECCION
CUADERNOS
MARGINALES

NUESTRAS COLABORADORAS

MARIBLANCA STAFF WILSON

Abogada. Madre de dos hijos y una hija. Investigadora de la problemática jurídica de la Mujer panameña. Directora del Registro Público. Ha publicado numerosos artículos y obras acerca de la situación de las mujeres. Como defensora de los derechos de la Mujer ha obtenido 14 fallos favorables de la Corte Suprema de Justicia.

VIELKA BOLAÑOS MORENO

Socióloga. Investigadora de la condición de la Mujer Rural y Laboral. Consultora de Organismos Internacionales.

NISCHMA DEL C. VILLARREAL CHÁVEZ

Abogada. Madre de un niño. Encargada del Departamento de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de la mujer.

BRISEIDA BARRANTES

Socióloga. Profesora de Sociología Encargada del Departamento de Investigación de la Dirección Nacional de la Mujer.

NIDIA ELENA CHASE

Abogada y Trabajadora Social. Presidenta de CEPAM.

URANIA A. UNGO M.

Feminista. Madre de una hija. Profesora de Filosofía. Master en Filosofía Latinoamericana por la Universidad Nacional Autónoma de México. Activista e Investigadora del Movimiento de Mujeres de Panamá y Centroamérica. Ha publicado numerosos artículos y ensayos sobre la condición de las mujeres. Directora de la Dirección Nacional de la Mujer y Secretaria Técnica del Consejo Nacional de la Mujer.

LUZ ALEIDA TERÁN

Trabajadora Social. Profesora universitaria. Investigadora Asociada del Centro de Estudios y Acción Social Panameño. Colaboradora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá.

BRISEIDA ALLARD O.

Maestra en Ciencias Sociales con Especialidad en Estado y Clases Sociales. Profesora Titular de la Universidad de Panamá. Ha publicado varios trabajos relativos al tema de Género, Política y Desarrollo.

GLADYS MILLER RAMÍREZ

Profesora Universitaria. Trabajadora Social con estudios en Brasil y Maestría en la Universidad de Puerto Rico. Especialista en Planificación por el Centro de Estudios Regionales Urbano-Rurales en Israel. Especialista en Docencia Superior por la Universidad de Panamá y Presidenta del Centro de Estudio y Capacitación Familiar. Ha escrito artículos y ensayos sobre su especialidad y actualmente es Coordinadora Nacional de la Red contra la violencia.

ROSINA MARIELA PÉREZ BERMÚDEZ

Abogada. Miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). Colaboradora del Centro de Estudios y Capacitación Familiar (CEFA). Asesora Legal de la Organización de Mujeres Nueva Identidad. Ha participado en diversos seminarios y ha sido expositora sobre el tema de la violencia intrafamiliar tanto nacional como internacionalmente.

AGATHA WILLIAMS SPRINGER

Profesora en Filosofía e Historia. Post grado en Bases Teóricas de las Ciencias Sociales, Maestría en Sociología del Desarrollo y Doctorado en Historia Moderna. Ex Secretaria General de la Universidad de Panamá e Investigadora Asociada del Instituto de la Mujer.